LAS DICTADURAS EN EL CONO SUR: BRASIL, CHILE, URUGUAY Y ARGENTINA

- 1. Primera plana de *O Globo* sobre la asunción de Ranieri Mazzilli, luego de declararse la acefalía de la presidencia de la república.
 2. Manifestación de apoyo al presidente Goulart, Río de Janeiro, 13 de marzo de 1964.
 3. Soldados en Río de Janeiro marchan en apoyo del golpe de Estado, el 1.º de abril de
- 4. El golpe militar en Brasil, el 1.º de abril de 1964.

a particular situación que vivía el continente, enmarcada en la nueva estrategia de los Estados Unidos que terminó por cristalizar en la creación de la Escuela de las Américas, y en las ansias por neutralizar la amenaza de la Revolución cubana, (la cual prometía expandirse más allá de las fronteras nacionales) llevó al desarrollo de una nueva ola dictatorial que se generalizó en los países del Cono Sur. Visto en clave regional las experiencias de Argentina, Chile y Uruguay, en especial, tienen como punto de partida el golpe militar llevado adelante en Brasil en 1964 contra el Gobierno democrático de Joao Goulart.









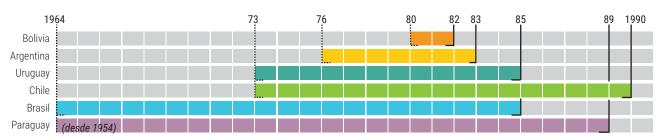
BRASIL

El golpe de Estado perpetrado el 31 de marzo de 1964 tenía motivaciones específicas. Se trataba principalmente de obturar el camino de transformaciones abierto con el gobierno popular de Getulio Vargas, cuyo modelo de intervencionismo estatal era considerado de por sí un avance demasiado importante de los sectores tradicionalmente excluidos de la sociedad. Con Goulart en el poder el proceso se profundizó, lo cual quedó evidenciado en los proyectos de reforma agraria y nacionalización de empresas estratégicas, para el desarrollo productivo autónomo del Brasil. Esta radicalización, que ponía en el eje de las políticas públicas a los obreros y campesinos del interior del país, motivó a que tanto el ejército como la élite política y económica se aliara entre sí para destituir al Gobierno e implementar así una dictadura que se sostendría en el poder hasta 1985.





COMIENZO Y FIN DE LOS GOBIERNOS DICTATORIALES





Presidente Castelo Branco.

Uno de los primeros debates que se generaron en el seno de las Fuerzas Armadas tuvo a la democracia como eje de disputas y tensiones. En coincidencia con la visión que tiempo después tuvo el Gobierno militar uruguayo, y tras tomar distancia del caso argentino y chileno, el dilema del no funcionamiento de la democracia no se debía a los partidos políticos en general, sino en particular a sus dirigentes. La «limpieza» de estos elementos sería el reaseguro fundamental para ponerle fin a la situación de caos que supuestamente atravesaba Brasil. El otro bando sostenía exactamente lo contrario, y entendía la erradicación de los partidos políticos como la vía necesaria para finalmente depurar la democracia brasileña a fin de garantizar la viabilidad de un proyecto de país.

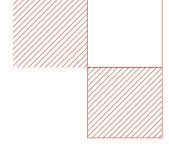
El equilibrio entre estos dos extremos determinó una de las peculiaridades propias de este gobierno *de facto*, el cual de forma intensamente restrictiva y atenta a que no fuera contrario a sus intereses, permitió la existencia de partidos políticos. Las razones de esto se relacionaban tanto con la valoración personal que algunos militares —como Castelo Branco— poseían sobre las causas del problema, y con el objetivo de fundar una nueva democracia con bases irremediablemente distintas a las que poseía Brasil, como con la pretendida intención de generar una legitimación hacia el exterior del país, pero por sobre todo al interior. A tono con esto, se establecieron dos partidos, uno —en teoría— opositor y verdaderamente inerte en la práctica (Movimiento Democrático Brasileiro), y otro más activo y a favor del Gobierno (Alianza de Renovación Nacional).

El Parlamento debía, en un plazo estrictamente acotado, evaluar y aprobar las leyes dispuestas por el Gobierno. El deseo de legitimación llevó a la aparente elección de presidentes durante los 21 años de dictadura. Así se sucedieron diferentes militares de alto rango como Branco, Costa E. Silva, Emilio Garrastazu, Ernesto Geisel y Joao Baptista Figueiredo. Más allá de las apariencias, el trasfondo real era el férreo control autoritario de las riendas del país. Las elecciones fueron un simple engranaje más del régimen represivo.

Con todo ello, el instrumento político predilecto y desde el cual se afianzó y gobernó la dictadura fueron los Actos Institucionales (AI). El primero de ellos, lanzado apenas comenzado el nuevo gobierno, dictaminó el estado de excepción, y aunque se estableció formalmente la vigencia de la Constitución de 1946 con algunas modificaciones, las prerrogativas del Gobierno militar se consolidaron. Comenzó así la evaluación sumaria de unos diez mil funcionarios civiles y militares, y en paralelo, al suspenderse las más básicas garantías constitucionales, se iniciaron investigaciones a más de cuarenta mil ciudadanos brasileños. El AI-2 dio vía libre al control del Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo, y reemplazó la elección directa del presidente y del vicepresidente por la indirecta mediante el Colegio Electoral.

En relación con los partidos políticos, estos fueron suprimidos, lo que sentó las bases para la construcción desde el Estado de los dos partidos citados anteriormente. El Al-5 de 1968 coincidió con la fase de mayor represión de la dictadura e instituyó la posibilidad del Poder Ejecutivo de disponer la disolución del Parlamento, y la supresión de los *habeas corpus* entre otros derechos individuales. Se aplicó la censura de los medios de comunicación y se prohibió la libertad de expresión. Los estrechos vínculos entre Augusto Pinochet y la cúpula militar brasileña permitió el surgimiento de la «Operación Cóndor» (acta fundacional firmada en noviembre de 1975), que profundizó la represión ejercida al pueblo brasileño.

El inicio de esta cercana relación entre ambos Gobiernos militares estuvo en el rol activo que los brasileños prestaron al dictador chileno.



A pesar de los contundentes esfuerzos por parte del Estado militar por asfixiarlo, el movimiento obrero de la mano de sus referentes sindicales (como Lula Da Silva) pudo organizar huelgas de hasta tres millones de trabajadores que criticaron y resistieron los embates del autoritarismo. Una breve revisión del proyecto económico permite dilucidar un punto de encuentro con el Gobierno autoritario de Onganía en la Argentina. Una de las funciones que cumplieron los medios de comunicación fue la construcción de discursos que pretendían erigirse en reflejo de la realidad. En las dictaduras militares del continente, los medios de comunicación como *O Globo* en Brasil, *Clarín y La Nación* en la Argentina, *El Mercurio de Chile* y otros, fueron cómplices de los brutales gobiernos represivos. Aun siendo breve, esta aclaración permite echar luz sobre otros actores claves del período aquí analizado.



La lucha popular contra la dictadura en Brasil.

Una vez más, se aplicaron medidas de corte liberal tales como los recortes sociales y salariales, tanto para intentar controlar la inflación como para favorecer el mayor despliegue del sector industrial del país.

El período de crecimiento del PBI fue conocido como el «milagro brasileño», y a pesar de su amigable denominación fue la represión, junto con una política pública que allanó el camino a los abusos del patrón hacia la clase trabajadora, lo que permitió incrementar la producción. El —a todas luces— fallido proyecto desarrollista de Onganía pareció repetirse aquí con un relativo éxito para las clases burguesas locales. En la Argentina, los capitales extranjeros adquirieron empresas nacionales para seguir produciendo los mismos bienes; en Brasil por el contrario, las inversiones extranjeras crearon nuevas ramas industriales.

En consecuencia, mientras en otras latitudes se trató de destruir la producción local a través de la instauración de un modelo liberal, en Brasil solo se implementaron ciertas medidas de este corte, direccionadas a disciplinar a la clase trabajadora; fue el instrumento que el Estado usó para generar profundos cambios en su estructura productiva e industrial. La burocracia estatal de corte técnico, junto con la burguesía local y los inversores internacionales fueron los actores sobresalientes de esta política.



Los Actos Institucionales marcaron el inicio, ascenso y descenso tanto de la política represora cuanto del liderazgo militar del Estado brasileño. El desgaste propio de una política económica que atentaba contra la mayoría de la población a través de salarios reales bajos junto con el derrumbe del modelo económico, debido a la crisis del petróleo y la cada vez mayor inflación, sumado al crecimiento de la desconfianza por parte del empresariado en relación con la capacidad del Gobierno de dar respuestas a sus demandas, pusieron en jaque y finalmente tumbaron la dictadura en Brasil.

La caída de la nula o casi inexistente legitimidad que el pueblo otorgaba al sistema de partidos pergeñado por el Estado decantó en las elecciones presidenciales de 1985. Uno de los legados del período militar fue el notable crecimiento de la deuda externa, la cual pasó de 3,2 mil millones de dólares al momento de producirse el golpe a 100 mil millones de dólares cuando finalizó. El presidente *de facto*, Ernesto Geisel, comenzó con una gradual apertura democrática al anular el Acto Institucional V. Completaría esta tarea el general Figueredo, y sería José Sarney quien, tras la muerte del electo presidente Tancredo Neves, asumiría como el primer presidente civil tras 21 años de dictadura militar.

- 1. Requisas durante la dictadura de Brasil.
- 2. La lucha popular contra la dictadura en Brasil.
- 3. Tancredo Neves presidente, portada del 15 de enero de 1985.







LA BATALLA CULTURAL



Al igual que en otros países de la región, muchos artistas fueron perseguidos y sus obras prohibidas. A pesar de esto, siguieron produciendo obras y discursos que denunciaban los atropellos cometidos por el Gobierno militar.



Rubens Gerchman, Não Há Vagas, 1965

A pesar de usted

por Chico Buarque de Hollanda

Hoy es usted el que manda Dijo, está dicho No hay discusión Toda mi gente hoy anda Hablando bajito Mirando al suelo, vio? Usted que inventó este estado E inventó el inventar Toda la oscuridad Usted que inventó el pecado Se olvidó de inventar El perdón [...]

Cuando llegue el momento Todo el sufrimiento Cobraré seguro, juro Todo ese amor reprimido Ese grito mordido Este samba en lo oscuro Usted que inventó la tristeza Tenga hoy la fineza De desinventar Usted va pagar y bien pagada Cada lágrima brotada Desde mi penar [...]

TESTIMONIO DE PIERRE LALLART (AGREGADO MILITAR FRANCÉS EN BRASIL ENTRE 1962 Y 1964) FRENTE AL GOLPE DE ESTADO DE 1964

Una operación sumamente bien ... Muchos de los involucrados en el de sangre, técnicamente, como francesa». operación, un modelo en su género

montada, ejecutada en dos días, en golpe son especialistas en doctrina un país 17 veces mayor que Francia, francesa, o antiguos alumnos de casi sin dificultad ni derramamiento la Escuela Superior de Guerra





Portada del diario *Clarín* anunciando el golpe de Estado.

ARGENTINA

Todas las dictaduras se caracterizaron por la violencia ilegítima como método para eliminar las posibilidades de disenso. El régimen que comenzó en Argentina con el golpe de Estado de 1976 fue en particular uno de los que llevó más lejos los niveles de represión. El régimen aplicó sus conocimientos aprendidos en la Escuela de las Américas de Panamá y en la llamada «escuela francesa» con el objetivo de eliminar físicamente a todo disidente para evitar que, en un futuro, estos adversarios pudieran volver de manera legal a la arena política, tal como había ocurrido con Juan Domingo Perón.

En 1973 Argentina era testigo de la asunción de un gobierno popular conducido por Perón, quien no pudo concluir su mandato al fallecer al año siguiente de ser electo. Fue sucedido por su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón.

Desde el punto de vista político, Argentina se había caracterizado desde la caída de Perón en 1955 por altos niveles de inestabilidad política, situación que se profundizó luego del golpe de Estado de 1966, cuando se intensificaron las acciones de los movimientos guerrilleros. Con el retorno del conductor del movimiento peronista al país y su elección como presidente en 1973, se abrió la posibilidad de alcanzar la pacificación mediante un amplio pacto social. Sin embargo, los conflictos dentro del movimiento popular, el boicot constante de los sectores de la oposición política, la influencia de la política exterior norteamericana (que ya operaba en la región mediante la Operación Cóndor) y finalmente la muerte del conductor, cercenaron esta posibilidad y abrieron paso a la ejecución de un nuevo golpe de Estado.

En ese contexto políticamente convulsionado, María Estela Martínez de Perón había anunciado la convocatoria a elecciones para octubre de 1976. Sin embargo, un conjunto de fuerzas cívico-militares decidieron en marzo de ese año que el comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla, junto al comandante general de la Armada, Emilio Massera, y el de la Fuerza Aérea, Orlando Agosti, procedieran a hacerse cargo del Gobierno, tal como lo expresaban en el Acta para el «Proceso de Reorganización Nacional», y el Acta que establecía el propósito y los objetivos de la dictadura, dado a conocer el mismo día del golpe. El 25 de marzo de 1976 comenzaron por encarcelar a Isabel Martínez de Perón así como a numerosos dirigentes políticos. La Junta Militar que se hizo cargo del Estado se dividió el poder en forma tripartita entre las tres fuerzas: Ejército, Aeronáutica y Marina. Se distribuyeron todos los espacios de poder de forma equitativa. Los mismos documentos establecían caducos los cargos ejecutivos vigentes, disolvían el Poder Legislativo, que fue reemplazado por una Comisión de Asesoramiento Legislativo, y se suspendían las actividades políticas y gremiales. El objetivo declarado era el de erradicar la «subversión», para asegurar el posterior regreso a una democracia republicana, representativa y federal. Tanto los militares argentinos como los de otros países de la región plantearon la paradoja de derrocar a un Gobierno democrático, utilizando como principio legitimador la restauración de la democracia.

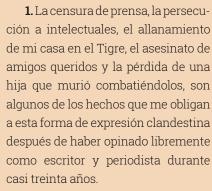
CARTA ABIERTA A LA JUNTA MILITAR POR RODOLFO WALSH 24 DE MARZO DE 1977

Rodolfo Jorge Walsh nació en 1943 en la provincia argentina de Río Negro, en una familia conservadora de ascendencia irlandesa. Antes de terminar sus estudios secundarios, se trasladó a Buenos Aires, en donde comenzó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Para sobrevivir se dedicó a variadas ocupaciones, fue lavacopas, limpiavidrios, comerciante. A los 20 años comenzó a publicar sus primeros textos periodísticos. Además, fue escritor y precursor del «nuevo periodismo» y de lo que más tarde se llamó «novela de no ficción». Entre 1957 y 1973 publicó las novelas que más trascendieron en el género, que relatan casos reales de la violencia política que se vivía en Argentina: Operación Masacre (1957), Quién mató a Rosendo (1969) y Caso Satanowsky (1973). A fines de la década de 1950 viajó a Cuba, donde junto con Jorge Ricardo Masetti y el Che Guevara conformaría el grupo que encabezó la agencia Prensa Latina. En 1961 regresó a Buenos Aires y se acercó al «Malena», nombre que se pusiera la agrupación quevarista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), donde militaba su hija Victoria Walsh, quien murió en septiembre de 1976, a los 26 años de edad, en un combate con las fuerzas militares. A pedido de Perón, Walsh creó y dirigió el semanario de la Confederación General del Trabajo. Hacia fines de 1969, ya estaba políticamente comprometido y militaba en las Fuerzas Armadas Peronistas. En abril de 1973, pasó a integrar la agrupación Montoneros

junto con su hija, pasando luego a ser el jefe de inteligencia de la agrupación. Bajo la dictadura iniciada en 1976 creó la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA). Luego de dar a conocer su Carta Abierta, que ningún medio publicó, fue raptado por un grupo de tareas de la Marina y asesinado en la calle.



(SELECCIÓN DE FRAGMENTOS)



El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato



dereando comercia.

Rodolfo Walsh.

transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese «ser nacional» que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.

2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.

Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.

Más de siete mil recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados.

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aun en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.

[...]

3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.

[...]

4. Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas.

[...]

5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad

mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%12 prometiendo aumentarla con 300 000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.

Los niveles de represión de la dictadura argentina llegaron tan lejos que se habló de un «método argentino», que incluyó secuestros, torturas en centros clandestinos de detención, la desaparición forzada de treinta mil personas (según los datos de los organismos de derechos humanos del país). Varios de ellos fueron arrojados al mar en los llamados «vuelos de la muerte». Pero el «método argentino» no se agotó ahí: también se secuestraron a centenares de niños y niñas junto a sus progenitores, y en otros casos se procedió al robo de los bebés que nacían en los centros



Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40 %, el de ropa más del 50 %, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30 %, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la «racionalización».

[...]

El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el «festín de los corruptos».

Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al ser nacional.

Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.

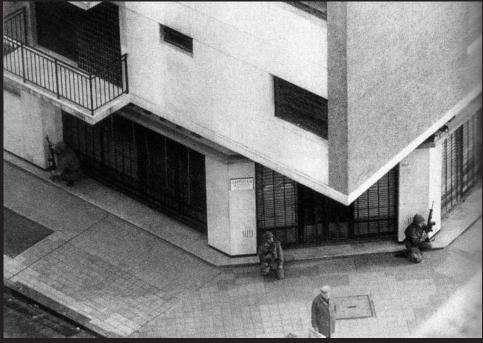
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.

Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022 Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.

clandestinos de detención luego del secuestro de mujeres embarazadas, las cuales luego del parto, también pasaban a integrar la lista de personas «desaparecidas» (y cuyos cuerpos hasta el día de hoy son rastreados para su identificación por el Equipo Argentino de Antropología Forense). Estos niños y niñas fueron entregados ilegalmente en adopción por los militares y actualmente la mayoría todavía desconoce su verdadera identidad. En la actualidad de ha recuperaron la identidad de 119 nietos que habían sido apropiados durante la dictadura y su historia falsificada.

LA DICTADURA EN IMÁGENES





Archivo diario Clarín.





Archivo diario Clarín.



DECLARACIONES DEL GENERAL JORGE RAFAEL VIDELA A PERIODISTAS BRITÁNICOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO LA PRENSA. 8 DE DICIEMBRE DE 1977

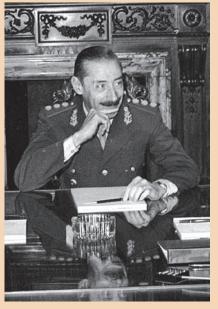


La Argentina es un país occidental y cristiano, no porque está escrito así en el aeropuerto de Ezeiza; la Argentina es occidental y cristiana porque viene de su historia. Es por defender esa condición como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto... Por el solo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida nadie es privado de su libertad, pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquel que en el plano de las ideas guiera cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir subvierten valores, cambian, trastocan valores... El terrorista no solo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización.

FRAGMENTOS DEL DISCURSO AL ASUMIR LA PRESIDENCIA 30 DE MARZO DE 1976

El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia.

Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible, frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia [...]. El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo, sumió a los habitantes de la nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones [...] condujo a una total parálisis del Estado, frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales [...] las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada. Ninguna medida de fondo se adoptó en consecuencia. Ante esta drástica situación, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de la nación. Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza y consecuentemente solo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos, sin tregua, a la delincuencia subversiva



Jorge Rafael Videla, presidente de facto.

en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento.

FRENTE A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SEPTIEMBRE DE 1979

Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera tendría un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está... ni muerto ni vivo, está desaparecido.

A diferencia de la actitud mostrada por los Episcopados de otros países de la región como el de Chile y Brasil, la jerarquía eclesiástica argentina no denunciaba enérgicamente la represión en curso. Por su parte, obispos como Adolfo Tortolo y Victorio Bonamín, vicario y provicario castrenses y sus capellanes a cargo, cumplieron un activo rol en la legitimación represiva; los mencionados «vuelos de la muerte» por ejemplo, fueron avalados y justificados teológicamente como una forma cristiana de muerte.

La inusitada violencia de la dictadura cívico-militar dio origen a múltiples movimientos de defensa de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar a los de Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. En el primer caso, un grupo de mujeres que comenzó a manifestarse bajo la dictadura, pidiendo por la recuperación de sus hijos continúa su lucha en la actualidad. La organización de Abuelas de Plaza de Mayo, también compuesta por familiares de desaparecidos, aún sigue luchando por la recuperación de los niños apropiados; han llegado a resolver hasta 2016 ciento diecinueve casos de nietos desaparecidos, algunos de los cuales incluso fueron recuperados por sus familias biológicas. Sin embargo, la organización aún busca a casi 400 nietos de los cuales se desconoce el paradero. Ambos organismos toman el nombre de la plaza central de la ciudad de Buenos Aires, lugar donde comenzaron sus reuniones y caminatas. Otro caso que cabe destacar en la lucha por los derechos humanos en la época de la dictadura cívico-militar es la del activista Adolfo Pérez Esquivel, quien en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz debido a su labor.

Dentro del arco de partidos políticos, el Partido Justicialista fue el único que presentó formalmente, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, una dura declaración denunciando lo que estaba ocurriendo en el país firmada por Deolindo Bittel y Herminio Iglesias. Al igual que en las otras dictaduras de la región, la represión y el disciplinamiento que ejerció el régimen argentino afectó a un amplio espectro de personas que, de acuerdo con el imaginario militar de entonces, eran pasibles todas ellas de recibir el rótulo de «subversivas» y que por ende, eran consideradas como enemigas de la sociedad «occidental y cristiana». Artistas, empresarios, periodistas, integrantes de organizaciones guerrilleras, religiosos de diferentes credos, estudiantes, profesores universitarios y trabajadores fueron algunos de los sectores víctimas de la represión. Sobre este último sector recayó quizás el mayor peso del aparato represivo, con el evidente objetivo de lograr implementar políticas económicas neoliberales. Así, se produjo la desarticulación de los delegados y comisiones de cada empresa (para lo cual fue clave la coordinación con el sector empresarial). Muchos empresarios fueron cómplices de la represión y de la desaparición de empleados y operarios. Algunas grandes firmas industriales, como la azucarera nacional Ledesma y las automotrices Mercedes Benz y Ford entre otras, aportaron datos de los obreros que eran activistas. La política represiva de la dictadura consideraba que el asesinato colateral de civiles que se mantenían al margen del activismo, podía ser tolerado como consecuencia de la lucha antiterrorista y más aún, era un medio de instaurar el terror en la población en general para disuadirla de participar en política.

La última dictadura cívico-militar argentina concluyó en 1983. El régimen tuvo tres períodos diferenciados. El primero se extendió hasta 1978, y se caracterizó por el intento de los militares de subordinar por medio de la represión a toda la sociedad. Entre 1978 y 1982, el régimen buscó diseñar un modelo político para el futuro que garantizara la impunidad de los militares. Para eso dio mayor espacio

LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO









- 1. Fotografía de Eduardo Longoni, diario *Clarín.* 2. Marcha de las Madres de Plaza de Mayo, 1983.
- 3. Adolfo Pérez Esquivel junto a las Madres de Plaza de Mayo, 1980, Archivo de Clarín.
- 4. El círculo del dolor, 1980. Fotógrafo Carlos Villoldo, diario *Clarín*.



para la participación de los civiles e inició el diálogo con los partidos políticos que estuvieran dispuestos a comprometerse en la lucha contra la «subversión». En 1982, se inició un período de transición y negociación con las fuerzas políticas a fin de emprender el camino hacia el retorno de la democracia.

EL 2 DE ABRIL DE 1982: LA BANDERA ARGENTINA FLAMEA NUEVAMENTE EN LAS ISLAS MALVINAS



EL INICIO DE LA GUERRA

Hacia fines de 1981 debido a la crisis política y económica inglesa, la primera ministra, M. Thatcher, decidió reducir la Armada británica en las islas Malvinas, ocupadas ilegalmente en 1833. Pero existían grupos de presión (de los cuales era parte la Royal Navy) que frente a la pérdida de influencia buscaron un motivo para evitar la aplicación de la medida tomada por Thatcher. Aprovecharon el hecho y desembarcaron en las Georgias del Sur un grupo de obreros de la empresa argentina Georgias del Sur S.A en marzo de 1982 para comenzar una fuerte campaña en favor de aumentar la presencia

militar en las islas. Finalmente, lograron que el parlamento británico exigiera al Gobierno el aumento de la fuerza militar. Ante la presión sobre Buenos Aires, el 26 de marzo de 1982 el Gobierno *de facto* ordenó enviar una fuerza de desembarco a las islas Malvinas. El plan era tomar militarmente las islas, antes de que llegaran los refuerzos que estaba enviando Londres, y una vez recuperadas las islas sentarse a «negociar» con Gran Bretaña. El Gobierno de facto creía que Londres no iría a una guerra y que Estados Unidos no permitiría que se llegara a un conflicto. Luego del 2 de abril Inglaterra movilizó todos sus medios al Atlántico Sur y se puso en marcha la mayor operación militar

británica desde la crisis del canal de Suez en 1956, operación que involucró un 80% de la fuerza naval británica.

LA REACCIÓN POPULAR

Cuando se conoció la noticia de la recuperación de las islas Malvinas el 2 de abril de 1982, se produjo un estallido de adhesión popular a la causa argentina, provocando una ola de movilizaciones espontáneas que se apropiaron de todos los espacios públicos. Esta ocupación de las calles y las plazas reinauguró un nuevo ciclo de participación masiva de la sociedad en la política, que ya no iba a detenerse hasta el retorno de la democracia en la Argentina.

La adhesión del pueblo a la causa de la recuperación de las islas no produjo, como esperaban algunos sectores de la dictadura, adhesión al Gobierno militar. Es ilustrativo, en este sentido, el pronunciamiento que la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió apenas sus trabajadores recuperaron la libertad luego de haber sido detenidos en una marcha anterior del 30 de marzo



Plaza de Mayo, 10 de abril de 1982. Concentración popular en ocasión de la llegada del mediador norteamericano a la Argentina, Alexander Haig.



exigiendo respeto por la soberanía nacional en Malvinas y el retorno de la soberanía popular en el continente. A propósito, el documental «Hundan al Belgrano», de Federico Urioste, relata cómo el pueblo argentino diferenció la gesta de la dictadura frente al arribo el 10 de abril del «mediador» de Estados Unidos Alexander Haig: «Cuando Haig llega a la Argentina, lo espera una manifestación de más de cien mil personas que acusan a Londres de piratería y cantan: «Malvinas sí, Proceso no». La voz se acompaña con las imágenes de las manifestaciones y con una pancarta que rezaba: «Malvinas sí, Proceso no». El pueblo argentino separaba la causa de

Malvinas de la salvaje dictadura cívico-militar y en la Plaza de Mayo se oía: «Atención / Atención / Las Malvinas son del Pueblo / La Rosada de Perón».

LA REACCIÓN LATINDAMERICANA

Por otra parte, el apoyo latinoamericano a la causa argentina fue contundente. Las embajadas de nuestro país en todo el continente iberoamericano comenzaron a recibir miles de voluntarios para combatir en Malvinas. También solicitaron ir a defender las islas, exiliados argentinos y presos políticos, defendiendo la consigna «no hay soberanía nacional sin soberanía popular». Tanto es así que el actual embajador de Bolivia en Argentina, Liborio Flores Enríquez, que en ese entonces se desempañaba como subteniente de la Fuerza Aérea de Bolivia fue el primero en presentarse como voluntario para combatir en las islas.

Argentina también recibió ayuda militar de otros países: «Venezuela: aportó gran cantidad de municiones 7,62 mm, bombas MK-82/84 y algunos torpedos. Perú: 10 Mirage V e intentaron triangular misiles AM39 Exocet. Libia: -15 misiles aire-aire 530; 20 misiles aire-aire 550; 20 motores de misiles aire-aire 550; 20 lanzadores SA-7; 60 proyectiles para SA-7; 10 morteros de 60 milímetros con



La guerra.

accesorios; 10 morteros de 81 milímetros con accesorios; 492 proyectiles de mortero de 60 milímetros; 498 proyectiles de 81 milímetros super explosivo; 198 proyectiles iluminantes de morteros de 81 milímetros; 1000 bombas iluminantes de 26,5 milímetros; 50 ametralladores calibre 50 milímetros; 49 500 proyectiles calibre 50 milímetros; 4000 minas antitanque; 5000 minas antipersonales.

Asimismo, el 3 de abril de 1982, reunido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Jorge Illueca, hizo una histórica defensa de la causa argentina. En relación con la discusión que precedió a la votación de la Resolución 502, advirtió: «Acabo de manifestar mi discrepancia con el proyecto de resolución presentado por el Reino Unido. Quiero ahora poner en claro mi coincidencia con algún punto. La República Argentina no amenaza a nadie; la República Argentina no lleva a cabo hostilidades contra nadie; no nos interesa un enfrentamiento armado con nadie y estamos dispuestos a negociar diplomáticamente todas las diferencias que nos separan del Reino Unido. Excepto, señor presidente, la soberanía, que no es negociable» (Jorge Illueca, 1982). Luego agregó: «Lo que va a ocurrir es que cuando el portaaviones Invencible y las unidades de la Armada británica lleguen a aguas territoriales argentinas, entonces sí va a haber hostilidades, y lo que está haciendo aquí hoy el Consejo es sencillamente armar la estructura

para unas hostilidades que no se están resolviendo aquí [...]. Con respecto al proyecto de Resolución Panamá [...] no va a pedir que se someta a votación, porque se va a reservar el derecho de presentar ese mismo proyecto, posiblemente fortalecido con otros elementos, cuando este problema que no es resuelto hoy por el Consejo de Seguridad, tenga que volver aquí dentro de cinco, diez o quince días más. Entonces tendremos ocasión de hacer planteamientos mucho más serios, muchos más graves, que afectan la paz del hemisferio occidental y que tendrán que ser definidos dentro del sistema que existe aquí, en este hemisferio y que van a hacer que se tomen posiciones categóricas para darnos cuenta de quiénes somos, dónde estamos y qué futuro tenemos». Una vez aprobada la resolución, expresó: «En modo alguno [la 502] autoriza al Reino Unido a usar la fuerza a través de sus unidades navales o su marina de guerra. Que quede claro que el Consejo no ha autorizado al Reino Unido para una operación bélica como la que está actualmente desarrollando a través del Atlántico y que se dirige ahora hacia el territorio argentino de las islas Malvinas» (Jorge Illueca, 1982).

Como si el apoyo internacional fuera poco, el 2 de junio de 1982 el canciller Nicanor Costa Méndez viajó a Cuba donde participó de la Reunión de los «Países No Alineados» y allí se reunió con Fidel Castro, quien le manifestó que la guerra de Malvinas era una lucha de «liberación nacional».

La solidaridad también se expresó en manifestaciones populares espontáneas en apoyo a la causa argentina, tal como ocurrió en Caracas luego del el hundimiento del crucero *General Belgrano*, un crimen de guerra donde murieron 323 combatientes.

De esta manera podemos comprobar que, tanto el pueblo argentino como el pueblo latinoamericano en su totalidad, entendieron fehacientemente de qué se trababa la causa Malvinas y supieron diferenciarla a todas luces de la sangrienta dictadura cívico-militar.

EL COMBATE

A pesar de la valentía y el arrojo de los soldados argentinos que comprobaron su bravura en cada combate, poco se habla de ellos en estos términos y mucho se los recuerda como los «pobres pibes» de la guerra. Hasta los propios ingleses han reconocido la gran labor de los argentinos. En este sentido, durante la batalla de Darwin-Pradera del Ganso (noche del 27 de mayo hasta la mañana del 29), un corresponsal inglés relata lo siguiente: «Los servicios de informaciones habían comunicado específicamente que las posiciones argentinas eran a cielo abierto. En realidad, sus trincheras tenían sólidos tejados, y los informes sobre una guarnición desmoralizada y desganada parecían sin fundamento. Tantas mentiras que se nos dijeron sobre que no querían pelear, y están peleando como leones». (Simon Jenkins, 1982). Como este, son



varios más los testimonios británicos que remarcan el valor de los soldados argentinos.

En 1982, Esteban Vilgre la Madrid cursaba cuarto año del Colegio Militar de la Nación, pero la inminencia de la guerra hizo que tanto a él como a sus compañeros tuvieran que egresar tempranamente como subtenientes en comisión. La Madrid, quien finalmente terminó en Malvinas al frente de una sección del Regimiento de Infantería 6, destaca en una entrevista para el programa radial Malvinas Causa Central que: «Después de Malvinas se nos hizo a nosotros, a los que habíamos combatido, los jóvenes combatientes, los padres de la derrota. Hay un viejo dicho que dice: la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, y bueno a nosotros nos hicieron padres de esa derrota. Nosotros somos y lo seremos siempre orgullosos padres de esa derrota. Fuimos a pelear por nuestra nación y lo hicimos de la mejor manera. Yo mejor que nadie puedo decir que no hubo ningún chico de la guerra, yo me animo a discutir con cualquiera que diga eso, a refutar, a decir que eso es una mentira. La patria tuvo soldados valientes y yo lo vi. Que pusieron el pecho al enemigo. El soldado Horisberger, cuando nos estaban atacando los británicos, tres veces se levantó para cambiar el cañón de su ametralladora y continuar disparando, el soldado Becerra, el soldado Bordón, el soldado Echave, el soldado Valviládez, el soldado Luna, todos caídos de mi sección en el monte Tumblendown. En la

soledad absoluta del combate y la noche, bajo las bengalas esperaron y resistieron heroicamente a los británicos y murieron. Pero también cayeron heridos varios más como la Pantera Eduarte, Herrera, Adorno, Pedevoi y varios más que tendría horas para contarte, ellos cayeron en su posición y otros fueron tomados prisioneros, eso es el espíritu del soldado argentino. Ese es el soldado que combatió, los quieren llamar los chicos de la guerra llámenlos pero fueron tremendos hombres que pusieron lo mejor de sí por nuestra patria, deben ser un ejemplo para un montón de argentinos. Así que yo, soy un orgulloso padre de esa derrota y no me siento ningún chico de la guerra.

En el mismo tono el Informe Rattenbach destaca que «la artillería de campaña y de defensa aérea, las compañías de comandos, el escuadrón de exploración de caballería, los elementos de aviación de ejército, algunos elementos de apoyo de combate y especialmente elementos del Regimiento 25 de Infantería, demostraron un elevado grado de adiestramiento y profesionalismo, así como una adecuada acción de comando, lo que fue puesto de manifiesto especialmente en la defensa de Puerto Argentino, donde tuvieron un desempeño destacado» (Informe Rattenbach, 1982/1983).

DESMALVINIZACIÓN

Sin embargo, los medios de comunicación hegemónicos y la prensa neoliberal ocultan y no discuten la verdadera causa del desembarco militar del 2 de abril. Quizás, el mayor daño de la «desmalvinización» sea tratar a nuestros soldados como «los chicos de la guerra», jóvenes que fueron obligados a ir a la guerra. Lo que buscan es ocultar a nuestros héroes, esos soldados que defendieron a la nación de una agresión militar y que han peleado nada más y nada menos que contra la OTAN. Al igual que en 1982, las provincias del interior profundo de la Argentina y sus habitantes reconocen a nuestros héroes. En este sentido, Delmira de Cao madre del soldado maestro Julio Cao, que fue voluntario a Malvinas a pesar de estar embarazada su mujer-manifiesta su sentimiento frente al discurso de «los pobres soldados»: «Tuve mucha bronca, cuando me decían; jay jpobrecito!, se murió por el hambre, se murió por el frío». Y a quienes me decían eso comencé a responder «no señora, no murió de hambre, no murió de frío y no murió por unos milicos, murió por usted y por todo el pueblo argentino porque estaba defendiendo a su patria y a todo su territorio».

Durante los últimos años existieron hechos significativos en relación con el reconocimiento de los soldados que lucharon en las islas. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner otorgó a los excombatientes el documento de «Héroe de Malvinas».



Alturas de Monte Longdon, sitio de una de las batallas finales por el control de las islas en 1982.

1) Tiempo de Descolonización. http://tiempo.infonews.com/2012/04/07/especiales-72449-malvinas-si-proceso-no-y-el-vira-je-politico-de-la-junta.php

2) Entrevista de Malvinas Causa Central programa de Radio que se emite por Megafón Radio la radio de UNLa y FM Mercado.

http://www.ivoox.com/entrevista-liborio-flores-embajador-bolivia-audios-mp3_rf_4387894_1. html

3) Tiempo de Descolonización. http://tiempo.infonews.com/2012/05/12/especiales-75448-apoyo-militar-a-comienzos-de-ma-yo.php

4) Tiempo de Descolonización. http://tiempo.infonews.com/2012/03/31/especiales-71836-la-postura-de-panama-una-historica-defensa-de-la-argentina.php

5) Simon Jenkins, periodista e historiador inglés. *The Battle for the Falklands* by Max Hastings and Simon Jenkins, pp. 264–265 (W W Norton, 1983).

6) Entrevista de Malvinas Causa Central progra-

ma de Radio que se emite por Megafón Radio la radio de UNLa y FM Mercado.

http://www.ivoox.com/coronel-vgm-esteban-vil-gre-la-madrid-audios-mp3_rf_3880488_1.html 7) Capítulo VII (El accionar de las fuerzas propias) de la Parte III (Evaluación y Análisis Crítico), punto c del apartado 609.

8) Entrevista de Malvinas Causa Central programa de Radio que se emite por Megafón Radio la radio de UNLa y FM Mercado.

http://www.ivoox.com/entrevista-a-delmira-hasen-clever-cao-audios-mp3_rf_2903610_1.html



CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y CHILE POR EL CANAL DE BEAGLE

Fecha de inicio del conflicto: 1971

Causa: desacuerdo en los límites fronterizos en las islas al sur del canal Beagle y espacios marítimos inmediatos que conectan los océanos Atlántico y Pacífico.

Desarrollo del conflicto:

En 1971, Argentina y Chile firmaron el Compromiso de Arbitraje, por el cual se acordó definir un polígono a someter al arbitraje del Reino Unido.

En 1977, la Reina Isabel II dictó una sentencia que otorgó la mayor parte de las islas y derechos oceánicos a Chile, y aguas navegables a ambos países. Esta sentencia se conoció como Laudo Arbitral. El Gobierno de facto argentino rechazó el fallo por considerarlo injusto y parcial y amenazó con iniciar un conflicto armado.

El 22 de diciembre de 1978 las Fuerzas Armadas de Argentina enviaron tropas a la zona en disputa y se iniciaron algunas maniobras militares. La Junta Militar abortó la misión tras aceptar la mediación papal.

Resolución:

El 12 de diciembre de 1980 el papa Juan Pablo II propuso otorgar las islas en disputa a Chile, pero la Argentina obtendría amplios derechos de navegación, explotación económica e investigación científica. Asimismo, el territorio marítimo sería concedido a la Argentina, debiendo ceder a Chile los derechos antes mencionados. El Gobierno Chileno aceptó esta propuesta, mientras que Argentina nunca lo hizo formalmente, sino que presentó una nota expresando cuestionamientos.

En 1984, el Gobierno democrático argentino presidido por el presidente Raúl Alfonsín convocó a una consulta popular no vinculante para decidir la aceptación o no de la propuesta de la Santa Sede. Fue ampliamente aceptada. El mismo año se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre ambos países.

CHILE

El caso de Chile tiene orígenes muy diferentes, dado que el país había vivido un período de estabilidad política desde 1932. Sin embargo hacia 1970, la sociedad política acentuó su proceso de polarización. El triunfo de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende, marcó un punto de inflexión en el que la sociedad se ubicó a favor o en contra. La posición de Estados Unidos respecto del gobierno socialista fue muy clara: la coalición de izquierda resultaba intolerable. Desde el inicio de la campaña electoral, el entonces presidente norteamericano Richard Nixon había expresado su preocupación por la posibilidad de que Allende llegara al Gobierno, motivo por el cual -según puede inferirse de los documentos desclasificados - promovió el accionar de la CIA para evitar que llegase al poder y, en caso de hacerlo, colaborar en la operación militar que derivase en su derrocamiento. Con este fin, Nixon autorizó un presupuesto de 10 millones de dólares, con los cuales se financiaron medios de comunicación, campañas y huelgas para desestabilizarlo. Además, saboteó el acceso al crédito internacional e invitó a las empresas norteamericanas a retirarse del territorio chileno. Estas herramientas no alcanzaron para tumbar al presidente en poco tiempo y el plan de Washington se retrasó hasta 1973. En septiembre de ese año, una Junta Militar compuesta por cuatro miembros y



Estadio de Santiago de Chile, convertido en un lugar de detención.

liderada por Augusto Pinochet, un oficial que hasta poco tiempo atrás Allende había creído leal, tomó el poder. Este no se dejó apresar y decidió suicidarse en La Moneda, la casa de gobierno en Santiago.







- 1. Pinochet en 1973.
- 2. General Augusto Pinochet y presidente Salvador Allende.
- 3. Bombardeo a La Moneda, 11 de septiembre de 1973.

EL FIN DE ALLENDE. EDITORIAL DE LA REVISTA BRITÁNICA THE ECONOMIST, TITULADO «THE END OF ALLENDE», 15 DE SEPTIEMBRE DE 1973

La muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que constantemente atropellaron la Constitución.

El presidente Allende no se convirtió en mártir, aun cuando fuera cierto que se suicidó el martes. El bombardeo y asalto de su palacio presidencial y la toma del poder por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile pusieron un fin amargo al primer Gobierno marxista libremente elegido en Occidente.

Y la batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna respecto de quien tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales.

Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano. Las fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende por casi tres años. En ese período, él se las ingenió para hundir al país en la peor crisis social y económica de su historia moderna. La expropiación de campos y empresas privadas provocó una alarmante caída en la producción, y las pérdidas de las empresas estatales, según cifras oficiales, superaron los \$ 1000 millones de dólares. La inflación alcanzó a 350 % en los últimos 12 meses. Los pequeños empresarios quebraron; los funcionarios públicos y trabajadores especializados sufrieron la casi desaparición de sus sueldos por causa de la inflación; las dueñas de casa tenían que hacer interminables colas para obtener alimentos esenciales, y si es que encontraban. La creciente desesperación originó el enorme movimiento huelquístico que los camioneros iniciaron hace seis semanas.

Pero el gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía. Violó la letra y el espíritu de la Constitución. La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país.

El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el Congreso señalaba que «el Gobierno no es responsable solo por violaciones aisladas de la Constitución y la ley; ha convertido tales violaciones en un método permanente de conducta». El sentimiento de que el Parlamento era ya irrelevante aumentó por la violencia en las calles y por la forma en que el Gobierno toleró el surgimiento de grupos armados de extrema izquierda que se estaban preparando de manera abierta para la guerra civil.

Las fuerzas armadas intervinieron solo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato popular para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un Gobierno que se comportaba de modo inconstitucional.

El detonante para el golpe fueron los esfuerzos de los extremistas de izquierda para promover la subversión dentro de las Fuerzas Armadas. El señor Carlos Altamirano, ex secretario general del Partido Socialista, y el señor Oscar Garretón del Movimiento de Acción Popular Unitaria, ambos conductores de la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por la Armada como los «autores intelectuales» del plan de amotinamiento de los marinos en Valparaíso. Los comandantes de la Armada en Valparaíso iniciaron el movimiento esta semana. Pero el rápido éxito del golpe y la participación en él de todas las fuerzas armadas (incluyendo a los carabineros, entrenados militarmente) sugiere que los planes para el golpe fueron cuidadosamente preparados. Todavía habrá que esperar para comprobar que las fuerzas armadas continúan sólidamente unidas en su oposición al derrocado Gobierno. La desaparición de dos comandantes, el almirante Raúl Montero y el general Sepúlveda, comandante de carabineros, quienes fueron reemplazados por sus subordinados antimarxistas, hace pensar que no todos los altos oficiales estaban a favor del golpe.



El peligro real de un derramamiento de sangre provendrá de unas fuerzas armadas divididas, o si ocurrieran serios motines entre la tropa. Esto podría producir una guerra civil. Puede esperarse una fuerte resistencia de los comités de trabajadores y de las brigadas paramilitares que el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria dirigen en Santiago, así como de grupos guerrilleros en el sur. Pero si no consiguen apoyo militar significativo, estos grupos probablemente podrán ser contenidos.

Cualquiera sea el Gobierno que surja del golpe militar, no se pueden esperar tiempos fáciles. También aquellos que sufrieron bajo el gobierno de Allende sentirán la tentación de ajustar cuentas con el bando derrotado. Pocas personas creen que Chile pueda retornar a su forma tradicional de administrar sus asuntos.

El trabajo de reconstrucción costará un enorme sacrificio, de la misma forma que ocurrió en Brasil cuando Roberto Campos era responsable de la planificación económica durante los años posteriores al golpe de 1964. Esto no significa que Chile se convertirá en otro Brasil. Por una parte, Chile es probablemente un lugar menos violento -aun en estos momentosque Brasil y, por otra, los generales chilenos tienen una concepción bien distinta de su rol comparada con aquella de los generales que apoyan al señor Campos. Ellos aceptan que es demasiado tarde para revertir muchos de los cambios impuestos por el Dr. Allende; por ejemplo, en su intento por reconstruir el sector privado,

ellos pondrán más énfasis en traer de regreso a los inversionistas extranjeros y en crear nuevas industrias que en devolver lo que fue expropiado.

El general Pinochet y los oficiales que lo acompañan no son peones de nadie. Su golpe fue preparado en casa, y los intentos por hacer creer que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente para quienes conocen la cautela norteamericana en sus recientes tratativas con Chile. El Gobierno militar-tecnocrático que está aparentemente tomando forma intentará reconstruir el tejido social que el Gobierno de Allende destruyó.

Esto significará la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual será deplorable, pero no debe ser olvidado quien lo hizo inevitable.

ESTADOS UNIDOS Y SU APOYO AL GOLPE DE ESTADO DE AUGUSTO PINOCHET. DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS

(SELECCIÓN DE FRAGMENTOS)

Entre 1993 y 2014, la Oficina del Historiador dependiente de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dio a conocer una serie de documentos desclasificados sobre el accionar de este país en Chile durante los años sesenta. En los mismos, se evidencian los planes de desestabilización planificados contra el Gobierno de Salvador Allende y el apoyo a Augusto Pinochet

para la realización del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

HACER GRITAR LA ECONOMÍA

Documento de la CIA - Fecha de distribución: 15 de septiembre de 1970.

Encuentro con el presidente sobre Chile, a las 15:25 del 15 de septiembre, 70.

Presentes: John Mitchell (Fiscal de EE. UU.) y Henry Kissinger

(consejero de Seguridad Nacional).

La chance es de 1 en 10, pero ¡salvar a Chile!

Gastar lo necesario.

[...]

No involucrar a la Embajada;

\$10 000 000 disponibles, más sí necesario.

Trabajo a tiempo completo con nuestros mejores hombres.

[...]



deceando comolo

ne home



Hacer gritar la economía. 48 Horas para un plan de acción.

LA CIA REPORTA SU FRACASO EN CHILE EN 1970

CIA: informe de la «Fuerza de Operaciones Especiales» en Chile.

Actividades del 15 de septiembre al 3 de noviembre de 1970.

Fecha de emisión: 18 de noviembre de 1970.

ASUNTO: informe de la CIA sobre actividades de la «Fuerza de Operaciones Especiales en Chile».

1. General

a. El 15 de septiembre de 1970, la CIA fue instruida para intentar impedir el acceso a la presidencia de Chile el 3 de noviembre al marxista Salvador Allende. Este esfuerzo tuvo que ser independiente de los esfuerzos coexistentes emprendidos a través, o con el conocimiento, del Comité de los 40, el Departamento de Estado y el Embajador Korry.

[...]

Las intenciones del Gobierno de Estados Unidos fueron altamente sospechadas, particularmente por Allende y ciertos sectores del Gobierno. Las sospechas se extendieron a todos los norteamericanos en Chile para cualquier propósito declarado. Además, el Ejército chileno estaba empezando a ser estrechamente monitoreado por las fuerzas de Allende, alertadas por señales de peligro ante cualquier proclividad al intervencionismo.

2. Organización especial

a. La Fuerza de Operaciones Especiales fue montada en Chile y estaba funcionando tres días después que se le asignara la misión a la CIA. Encabezada por (nombre tachado) y el altamente calificado agente CIA (nombre tachado) traído desde su sede en (tachado) específicamente para este propósito. Se puso en funcionamiento un canal especial de comunicaciones simultáneas entre Santiago, Chile, y Buenos Aires, Argentina, para manejar el delicado tráfico de cables de la Fuerza de Operaciones Especiales.

[...]

1. La campaña de propaganda

a. La campaña de propaganda fue hecha a la medida, centrándola en generar preocupación sobre el futuro de Chile en términos que condicionarían el pensamiento y las acciones de los tres elementos clave del equilibrio político chileno: el mismo Frei, la élite política criolla y el Ejército chileno (cartas que permitían colateralmente ejercer presión sobre Frei). Cada uno de estos elementos precipitaban la aceptación racional de Allende en la presidencia, con un paliativo inherente al control y equilibrio del respeto de Chile por la democracia y la constitucionalidad, suavizado por la promesa de Allende de honrar estas tradiciones.

b. Después de la votación popular del 4 septiembre, la prensa mundial tendía a tratar la perspectiva de dar testimonio sobre el acceso al poder del primer jefe de Estado marxista libremente elegido, presentado esto como un curioso desliz de la democracia, en lugar de un evento políticamente significativo. El interés de la prensa y su cobertura fueron relativamente indulgentes hasta que las fuerzas de Allende fortuitamente entregaron un tema atractivo que podría explotarse. El 15 septiembre, se puso en claro que Allende estaba dirigiendo una campaña bastante descarada para intimidar a los medios de comunicación y de información chilenos a través de amenazas de asesinato y violencia, «tomas» por parte de las llamadas organizaciones de trabajadores y un emplazamiento a la dirección de los periódicos y estaciones de la radio. El propósito de Allende era sofocar cualquier oposición a su elección por el Congreso y aprovecharse de las particularidades latinas, muy pronunciadas en el chileno, propenso a subirse al carro, contrariando los ideales y el bienestar del país. El blanco mayor de Allende era El Mercurio, el periódico más prestigioso de Chile y la más importante voz de oposición a Allende en ese tiempo. La CIA montó una campaña de propaganda centrada alrededor de El Mercurio, mostrando duramente en sus ediciones que Allende daba el primer paso en la«comunización» de Chile atacando la libertad de prensa y, peor aún, con una elección aún sin definirse. Entonces, se lanzaron los recursos de «acción encubierta»:

Cables de protesta y de apoyo a *El Mercurio* en los principales



periódicos a lo largo de América Latina.

Una declaración de protesta de la Asociación Internacional de Prensa (siguen 4 líneas borroneadas). «Las fuerzas comunistas y marxistas, y sus aliados, están estrangulando la libertad de prensa en Chile».

Con gran cobertura, la Asociación Internacional de la Prensa entregó detalles en sus protestas sobre los esfuerzos comunistas para apoderarse de la prensa chilena.

Se puso en marcha un programa para que un equipo de periodistas –con agentes efectivos y otros elementos— viajara a Chile para reportear desde el lugar de los acontecimientos (entre el 8 y el 28 de septiembre, la CIA colocó en ruta a Chile a 15 agentes periodistas desde 10 países diferentes. Este armazón fue complementado más tarde por otros 8 periodistas más de 5 países, quienes trabajaron bajo la dirección de agentes de alto nivel, capacitados en su mayoría en manejo de medios de comunicación).

Como resultado del escándalo resultante, Allende –muy sensible a la opinión mundial e intentando proyectar la imagen de un moderado socialista no dogmático– decidió hacerse más circunspecto. Para el 25 de septiembre, la intimidación pesada ejercida sobre la prensa virtualmente había cesado.

c. La demostración de fuerza que Allende había hecho, sin embargo, surtió algún efecto; la prensa chilena, incluyendo a *El Mercurio*, nunca se recuperó y permaneció en sordina al punto de quedarse completamente fuera. Faltando el foro usual para la generación espontánea y multiplicadora de propaganda dentro de Chile, la CIA tuvo que incrementar sus propios recursos:

Una prensa subterránea, dependiente directamente de la distribución por el servicio del correo ordinario.

La colocación de noticias a través de agentes (periodistas) desafiando la resistencia de las atemorizadas direcciones de los medios.

Financiamiento de un nuevo, aunque pequeño, periódico.

Subsidio a un grupo político anti Allende, a sus programas de radio, a sus anuncios políticos y a sus concentraciones públicas.

El envío directo por correo de artículos y noticias extranjeras al presidente Frei, a la Señora Frei, a líderes militares seleccionados y a la prensa interna chilena.

Este esfuerzo no hizo ni pudo reemplazar a una prensa chilena totalmente operativa y libre de trabas. Virtualmente en solitario, mantuvo viva dentro de Chile la voz de una oposición pública, con el propósito del golpe planteado durante las semanas finales de este período.

d. La magnitud de la campaña de propaganda montada durante este período de seis semana en los medios de comunicación de Latinoamérica y Europa, aparte de EE. UU., lejanos pero con gran influencia en Chile, resulta evidente del hecho de que un retorno solo parcial muestra 726 artículos, transmisiones, editoriales y notas similares cuyas repeticiones no se conocieron (siguen dos líneas censuradas). Ni tiene la CIA idea alguna del efecto multiplicador inmensurable, esto es, cuántas de sus «noticias inducidas» focalizadas hacia los medios de comunicación interesados en los problemas chilenos estimularon una cobertura adicional del tema; excepto que, incluso para normas conservadoras, esta contribución debió haber sido sustancial y significativa.

e. Se ofrecieron «sesiones de inteligencia especial» e información «desde dentro» a periodistas norteamericanos, en deferencia a la influencia internacional de los medios de comunicación de EE. UU. Particularmente notable en esta conexión fue la historia de portada de la revista Time «cover story», basada mayoritariamente en materiales escritos e informaciones proporcionadas por la CIA. El corresponsal de Time en Chile, quien estuvo proveyendo mucho del material de fondo para la historia, aparentemente daba un significado literal a los alegatos de moderación y constitucionalidad de Allende. De acuerdo a las sesiones de información de la CIA en Washington (sigue una línea censurada) cambiaron el empujón básico de la historia en las fases finales con otro corresponsal de Time. Esto dio motivos a Allende para quejarse el 13 octubre: «Estamos sufriendo la presión más brutal y horrible, interna



e internacional», singularizando que Time, en particular, «llamó abiertamente» a una invasión de Chile.

5. Acción política

a. El programa de acción política tenía solo un propósito: inducir al presidente Frei a impedir la elección de Allende por el Congreso el 24 de octubre y, fracasando esto, apoyar -a lo menos por neutralidad benévola y a lo más, por una débil bendición conspirativa- un golpe militar que le impediría a Allende acceder a la presidencia el 3 de noviembre. Realísticamente, la «tarea» era intentar lanzar de nuevo a Frei como una personalidad política, para un papel que exigía resolución y un «machismo» a un grado que hasta ahí este lo había eludido. Las presiones de aquellos cuya opinión y/o aprobación en su momento Frei valoró -en combinación con adecuadas orquestaciones de propagandarepresentaban la única esperanza de convertir a Frei.

[...]

6. Golpe militar

a. Después de comienzos de octubre –ausente cualquier evidencia de una respuesta de Frei a la respiración artificial, políticamente hablando– crecientemente se comenzó a pensar, cada vez más, en un golpe militar como la única posible solución al problema Allende. Existían corrientes anti-Allende en el ejército y en carabineros, pero inmovilizadas por:

La tradición de respeto militar hacia la Constitución.

La posición pública y privada del general Schneider, comandante en jefe del Ejército, quien defendió una adhesión estricta a la Constitución.

El temor a la reacción de oficiales de rango inferior que tendían a albergar simpatías pro Allende.

Una fuerte propensión a admitir los halagos de Allende en el sentido que el Ejército poco tenía para temerle.

Aunque había oficiales en la cúpula del ejército y de carabineros predispuestos individualmente para entrar en acción, sentían que el ejército era el mando natural para un golpe exitoso, y mientras el general Schneider se mantuviera como comandante en jefe, no podría contarse con el ejército. La actitud del general Schneider solo podría cambiarse a través de la intervención personal del presidente Frei y una poderosa defensa suya en favor de un golpe; algo que, como llegó a ser obvio, fue muy improbable que lo hiciera.

MEMORÁNDUM DE HENRY KISSINGER

Consejo de Seguridad Nacional.

Fecha de distribución: 9 de noviembre de 1970.

A: Secretaría de Estado-Secretaría de Defensa.

[...]

El presidente decidió que (1) la postura pública de los Estados Unidos será correcta pero fría, para evitar darle bases al gobierno de Allende que le permitan concitar apoyo interno e internacional para la consolidación

del régimen; (2) simultáneamente, los Estados Unidos buscarán aumentar al máximo las presiones sobre el Gobierno de Allende para impedir su consolidación y limitar su capacidad de llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos y del hemisferio.

Específicamente, el presidente ha ordenado esto en el contexto de una postura públicamente fría y correcta hacia Chile:

... Deben emprenderse esfuerzos vigorosos para asegurar que otros Gobiernos de América Latina entiendan la oposición de EE. UU. a la consolidación de un Estado comunista en Chile, hostil a los intereses de los Estados Unidos y de otras naciones del hemisferio, animándolos a que ellos adopten una postura similar.

... Establecer consultas íntimas con Gobiernos importantes de América Latina, particularmente Brasil y Argentina, para coordinar esfuerzos en contra de iniciativas de Chile que pueden ser contrarias a nuestros intereses mutuos; en la prosecución de este objetivo, deben incrementarse los esfuerzos por establecer y mantener estrechas relaciones con líderes militares amistosos en el hemisferio.

Deben adoptarse acciones necesarias para:

a. Excluir, en toda la magnitud posible, futura ayuda financiera o garantías para la inversión privada norteamericana en Chile, incluyendo aquellas relacionadas al Programa



de Garantía de Inversión u operaciones del Banco de Exportación Importación.

- b. Determinar la magnitud de garantías existentes y acuerdos de financiamiento que pueden terminarse o reducirse.
- c. Ejercer máxima influencia posible en instituciones financieras internacionales para limitar créditos u otras ayudas de financiamiento a Chile (en este sentido, deben hacerse esfuerzos de coordinación para obtener todo el apoyo a esta política en otras naciones amigas, particularmente aquellas de América Latina, con el objetivo de no exponer una postura norteamericana unilateral).
- d. Asegurar que los negocios e intereses privados de EE. UU. que tengan inversiones en Chile estén conscientes de la preocupación gubernamental norteamericana frente al Gobierno de Chile y de la naturaleza restrictiva de las políticas que el Gobierno norteamericano piensa aplicar.

No deberá emprenderse ningún nuevo acuerdo bilateral de ayuda con el Gobierno de Chile (los programas humanitarios o propios de agencias sociales privadas serán analizados caso por caso). Los compromisos existentes se cumplirán de manera coherente con los deseos norteamericanos, pudiendo reducirse, tardarse o terminarse.

El presidente decidió que el director de la Oficina de Preparaciones de Emergencia haga un estudio sobre las implicancias de los posibles desarrollos en los mercados de cobre del mundo, acciones sobre existencias reservas de cobre y otros factores que puedan afectar la comercialización del cobre chileno y nuestras relaciones con Chile.

El presidente también ordenó que el «grupo de revisión de alto nivel» se reúna mensualmente, o con mayor frecuencia si es necesario, para considerar las políticas específicas acordadas en el marco de esta posición general, informe de las acciones que se hayan tomado y exponga los desarrollos de acciones políticas específicas que puedan requerir decisiones. Para facilitar este proceso el presidente ordenó el establecimiento de un Grupo de Trabajo Ad Hoc Inter Agencias, integrado por representantes de las Secretarías de Estado y Defensa, el director de la Agencia Central de Inteligencia y el asistente del presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, y coordinado por el representante del secretario de Estado, para preparar opciones de cursos de acción específicos y planes de acción relacionados, para la consideración del Grupo de Trabajo Ad Hoc Inter Agencias y, además, coordinar la implementación de los cursos de acción aceptados.

LA CIA ANUNCIA EL GOLPE UN DÍA ANTES

Documento de la Dirección de Operaciones de la CIA.

Fecha de distribución: 10 de septiembre de 1973.

- 1. (Línea censurada) que un intento de un golpe se iniciará el 11 de septiembre. Las tres ramas de las Fuerzas Armadas y carabineros están todas involucradas en esta acción. A las 7 de la mañana del 11 de septiembre se leerá una declaración por radio Agricultura (palabra tachada) que carabineros tiene la responsabilidad de apresar al presidente Salvador Allende.
- 2. (Tachado el nombre del informante) comentó: (tachadas las líneas siguientes) el golpe programado para el 10 de septiembre fue postergado y (el resto del párrafo está censurado, unas 3 líneas).
- 3. (Tachado el nombre del informante) comentó: podría ser que las Fuerzas Armadas pospusieran el golpe programado para el 10 de septiembre para mejorar la coordinación táctica, mientras la Armada aparezca resueltamente decidida a deponer a Allende. Se asume que el presidente está trabajando diligentemente en resolver esta crisis. A este respecto, tiene programado un discurso nacional para la tarde del 10 de septiembre. El presidente podría usar esta ocasión para anunciar alguna propuesta dramática, como sería llamar a un plebiscito, que nuevamente haría vacilar a los conspiradores.



El régimen de Pinochet se caracterizó por altísimos niveles de represión, en el que se utilizaban centros clandestinos de detención, torturas, persecución al movimiento obrero, al estudiantil, a artistas y a sacerdotes. Si bien el número exacto de personas asesinadas no se conoce, se calcula que fueron más de tres mil (de una población de menos de 9 millones de habitantes), de las cuales la tercera parte aún permanece desaparecida. Además, según los datos del Ministerio de Interior chileno, un millón de personas debieron exiliarse y ochenta fueron asesinadas en otros países del Cono Sur. El brazo armado mediante el cual se ejercía esta represión fue la policía política secreta creada por el régimen, que se llamó Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y que estaba comandada por Manuel Contreras.

Videla y Pinochet, 1978.



Hacia 1977, el régimen tuvo que hacerse eco de las repercusiones internacionales en contra de la DINA y cambió el sistema represivo. La DINA fue disuelta y reemplazada por la Central Nacional de Informaciones. El aparato represivo, en el marco de la Operación Cóndor, había llegado demasiado lejos. En 1974 el excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, leal a Allende, había sido asesinado en Buenos Aires y en 1976, uno de los referentes de Unidad Popular, Orlando Letelier, había sido asesinado en Washington. La dictadura de Chile se extendió hasta 1990 y, pese al alto nivel de personalización del poder en la figura de Pinochet, se caracterizó por un mayor nivel de institucionalidad. Llegó a apelar al plebiscito en más de una oportunidad y a realizar una reforma constitucional en 1980, que terminó siendo aceptada por los gobiernos democráticos que la sucedieron. A partir de ese año, comenzó una nueva fase en el régimen que se conoció como «dictadura constitucional», dado que la reforma habilitó a los militares a gobernar durante ocho años más. Predominaron las crisis económicas recurrentes que dieron lugar a protestas sociales -más fuertes hacia 1983-, a las que se fueron sumando demandas democráticas.

El primer plebiscito se realizó en 1978 con el objeto de consultar a los ciudadanos sobre su apoyo al Gobierno. El objetivo era legitimar al régimen ante las críticas internacionales. Según los poco confiables resultados oficiales, el 75 % se expresó a favor del gobierno militar. En 1980, se sometió a consideración popular la reforma constitucional que proponía el concepto de «democracia protegida» y que establecía un mecanismo de transición hacia la democracia, incluyendo un período en el que habría senadores vitalicios, y otros métodos para impedir el «retorno al pasado». En una elección que se consideró fraudulenta, luego de una campaña en la que surgió una oposición moderada que impulsó el voto negativo, el Gobierno declaró que el 67% había votado a favor de la nueva Constitución. Dio origen a la segunda etapa del golpe, que se extendió hasta 1989 y que estableció que en 1988, Pinochet debía someter su continuidad a un nuevo referéndum. En esta ocasión la oposición realizó un pacto para organizar la campaña por el «no» y lograron imponerse con el 55% de los votos. Esto significó el final del régimen militar chileno, que se vio obligado a convocar a elecciones. Hasta diciembre de 1989, Chile vivió una intensa campaña electoral que terminó con el triunfo de Patricio Aylwin, quien asumió la presidencia en marzo de 1990. Entonces, Pinochet debió dejar el poder, aunque continuó como comandante en jefe del Ejército hasta 1998, cuando asumió como senador vitalicio. En 1998 viajó a Gran Bretaña para realizarse una intervención quirúrgica. Allí fue detenido por una orden emitida por el juez Baltazar Garzón, en el marco del proceso judicial iniciado por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura militar



Pinochet en 1982.

que él presidió. Si bien el Parlamento inglés aprobó la extradición a España, la presión ejercida por el gobierno chileno –justificándose en el estado de salud-fue efectiva y consiguió que Pinochet regresara a Chile en el año 2000.



LA RESISTENCIA POPULAR



- 1. Manifestación contra la dictadura militar.
- 2. Víctor Jara, asesinado por la dictadura militar el 16 de septiembre de 1973.
- 3. Un pescador, un miembro de la Unión Fischer de San Antonio, fue detenido durante una manifestación en Santiago por la policía (1985) Fotografía Santiago Oyarzo.
- (1985) Fotografía Santiago Oyarzo. 4. La Brigada de la Cultura. «Ramona Parra» pinta un mural durante una manifestación por un NO en el plebiscito de Pinochet en Santiago, 1988, Fotografía José Gribas.







URUGUAY

La dimensión civil de la dictadura que avasalló los destinos del pueblo del Uruguay entre 1973 y 1985 se erigió en el elemento distintivo que sobresale al equipararlo con otras experiencias en la región. Existieron dos momentos claves que marcaron el inicio de la dictadura en el país ubicado a la vera del Río de la Plata. El primero de ellos fue en febrero del año 1973, cuando con el implícito pero firme propósito de restarle poder de influencia a la Fuerza Aérea y al Ejército, el presidente Bordaberry firmó la designación de Antonio Francese como ministro de Defensa. La respuesta contundente de los militares no se hizo esperar, y el jefe de Estado tuvo que suspender su decisión. Incluso, a través de diversos comunicados, el poder militar dejaba en claro su férrea intención de participar activamente en la vida política del país mediante la creación de un artilugio institucional que daría luz verde a la intervención militar bajo la excusa de la seguridad nacional, la cual se extendía a los ámbitos sociales y económicos del país: el COSENA (Consejo de Seguridad Nacional del Uruguay). La declaración de guerra interna —la cual suspendía garantías individuales y constitucionales en nombre de una supuesta guerra dispuesta por el presidente un año antes-, no hizo más que acentuar la capacidad de presión en la vida cotidiana por parte de los militares uruguayos.





Raúl Sendic, fundador del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), fue detenido por militares uruguayos el 1.º de septiembre de 1972.



La dictadura en Uruguay.







COMUNICADO NÚMERO 4 LA OPCIÓN ENTRE LOS MILITARES Y EL CAOS 9 DE FEBRERO DE 1973

Los mandos militares conjuntos del Ejército y la Fuerza Aérea, ante la crisis que afecta al país y a los efectos de despejar hasta la última duda que pueda existir en el espíritu de todos los uruguayos sobre las causas que la han ocasionado, sienten el deber moral de informar lo siguiente:

1.º Si bien se ha manifestado la solicitud al señor presidente de la república de que disponga el relevo y se ha declarado la decisión de desconocer la autoridad del señor ministro de Defensa Nacional, se expresa con la más absoluta lealtad hacia el pueblo y sus autoridades nacionales que dicha posición no obedece a que se cuestione la persona misma del mencionado jerarca, sino lo que él representa y las graves consecuencias que derivarían del ejercicio de su cargo.

2.º Inmediatamente de asumido su cargo, el actual ministro puso de manifiesto encontrarse empeñado en cumplir la tarea de impedir mediante la desarticulación de los mandos, que las Fuerzas Armadas cumplieran con la misión de alcanzar los objetivos que se han impuesto, de restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional en procura del

bienestar general dentro del sistema democrático republicano de acuerdo con la filosofía actual de las Fuerzas Armadas.

[...]

- 3.º Los integrantes de las Fuerzas Armadas, a todos los niveles, tomaron consciencia plena de la problemática que afecta al país, a través de su especial participación en el quehacer nacional ocurrida en el último año y han valorado la gravedad de la situación, la que exige una reacción firme, con la participación honesta de todos los sectores del pueblo uruguayo, porque en su defecto, irremediablemente se llegará al caos total.
- **4.º** Se han planteado entonces, procurar alcanzar o impulsar la obtención de los siguientes objetivos:
- a) Establecer normas que incentiven la exportación, estimulando a los productores cuya eficiencia y nivel de calidad permitan colocar la mercadería en plazas del exterior a precios competitivos.
- **b)** Reorganización del servicio exterior, adjudicando los hombres más capaces a aquellos destinos diplomáticos en los que una gestión inteligente, dinámica y audaz, permita al país obtener beneficios

económicos crecientes, dando prioridad en su gestión al intercambio comercial exportador. Velar porque solo sean designados en representación de la república, a todos los niveles, personas que procedan no solo con entusiasmo y dedicación, sino que ostenten una moral acrisolada, indispensable para actuar con dignidad en su nombre.

- c) Eliminar la deuda externa opresiva, mediante la contención de todos aquellos gastos de carácter superfluo, comenzando por la reducción de todos los viajes al exterior de funcionarios públicos de cualquier índole, salvo que aquellos sean absolutamente indispensables, y la concertación de créditos, solo para su utilización en inversiones que aseguren un aceptable reembolso posterior.
- d) Erradicación del desempleo y la desocupación mediante la puesta en ejecución coordinada de planes de desarrollo, que utilicen el máximo de mano de obra nacional, con el mínimo de incidencia en la deuda externa.
- e) Atacar con la mayor decisión y energía los ilícitos de carácter económico y la corrupción donde se encuentre, procurando que la moral privada y pública nuevamente constituya un elemento principal en la personalidad del hombre uruguayo,



creando, a los efectos, tribunales especiales para tratar en la materia y dando participación decisiva a los comandos militares en el esclarecimiento de los hechos dada su grave incidencia en los problemas de seguridad interna.

- f) Reorganización y racionalización de la administración pública y el sistema impositivo, de modo de transformarlos en verdaderos instrumentos de desarrollo con el mínimo de esfuerzo para el erario público.
- **g)** Redistribución de la tierra buscando la máxima producción por hectárea, mediante regímenes impositivos justos y técnicos, y una tenencia más racional, de manera de asegurar el acceso a la propiedad a quien la trabaje.
- **h)** Creación, fomento y defensa de nuevas fuentes de trabajo, y el desarrollo de la industria en base a las reales posibilidades y necesidades nacionales.
- i) Extirpar todas las formas de subversión que actualmente padece el país, mediante el establecimiento de adecuada legislación para su control y sanción.
- j) Designar en los entes autónomos y servicios descentralizados a los hombres más capaces y con mejores aptitudes para el desarrollo de la función que se considere,

sin tener en cuenta para ello un criterio de cuotas por partidos o sectores, sino el elevado propósito de asegurar el mejor y más eficiente funcionamiento del servicio público.

- **k)** Asegurar la intervención o la representación de las Fuerzas Armadas en todo organismo o actividad que tenga relación con aspectos concernientes a la seguridad y soberanía nacional.
- 1) Realizar los mayores esfuerzos. a fin de canalizar la mayor cantidad posible del ingreso nacional fortaleciendo la capacidad productiva de toda la población y aumentando simultáneamente el ahorro. En ese sentido, conscientes de que la distribución del ingreso es de las cuestiones que más estrechamente se encuentran asociadas a la distribución de poder, asegurar paralelamente al aumento del ingreso nacional que se obtenga en cada período, un aumento en la participación de los grupos menos favorecidos, tanto en términos absolutos como relativos.
- m) Establecer disposiciones que permitan combatir tan eficazmente como sea posible los monopolios, instrumentando medidas que posibiliten la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control público de los medios de producción. Asegurar el interés obrero

por impulsar y mejorar la producción, arbitrando soluciones que estimulen su participación en la dirección de las empresas, tanto en el sector público como en el privado.

- n) Apoyar a través de una política crediticia adecuada aquellos sectores de la economía que se estiman prioritarios, dando preferencia a los medianos y pequeños empresarios y a las cooperativas de producción que deberán gozar de especiales beneficios conferidos por ley para su expansión en todo el país.
- o) Vigilar que todos los ciudadanos compartan en forma justa y de acuerdo con sus reales posibilidades económicas, la carga común representada por los gastos del Estado, fiscalizando se recauden sin evasiones tributarias, especialmente los derivados de capitales improductivos.
- p) Aceptar una inflación medianamente controlada, en tanto se estudian los cambios que permitan elaborar una táctica acorde con una concepción racional a largo plazo capaz de superar las causas estructurales y profundas, adoptando por ahora medidas de corto plazo que eviten descontentos excesivos y aseguren mantener por lo menos la posición relativa de los distintos grupos en la distribución del ingreso.

- **5.º** Colaborar en alcanzar lo señalado precedentemente mediante. el desarrollo de una política de acción conjunta de las Fuerzas Armadas, que se ajuste a los siguientes preceptos:
- a) Manteniendo permanentemente total cohesión en las Fuerzas Armadas, vigilar la conducción nacional en procura de los objetivos fijados, gravitando en las decisiones que afectan el desarrollo y la seguridad, mediante el mantenimiento de un estrecho contacto con el Poder Ejecutivo, y la presentación oportuna a través de planteamiento de la posición que las Fuerzas Armadas adopten en cada caso.
- **b)** Manteniendo a las Fuerzas Armadas al margen de los problemas sindicales y estudiantiles salvo que lleguen por su intensidad a poner en peligro la seguridad. Previa anuencia del Poder Ejecutivo, iniciar una política de realizaciones eficaces y concretas, apoyando o tomando a su cargo planes de desarrollo o interés nacional, aprovechando sus capacidades técnico-profesionales.
- c) Proceder en todo momento de manera tal de consolidar los ideales democrático-republicanos en el seno de toda la población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida.

6.º En consecuencia, quien ocupe la cartera de Defensa Nacional en el futuro deberá compartir los principios enunciados, entender que las Fuerzas Armadas no constituyen una simple fuerza de represión o vigilancia, sino que integrando la sociedad, deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la ley y comprometerse a trabajar, conjuntamente con los mandos, con toda decisión, lealtad y empeño, a fin de poder iniciar la reorganización moral y material del país.

El segundo momento, consecuencia directa de lo descrito, tuvo lugar el 27 de junio de 1973 cuando los encargados de custodiar las fronteras, en total consonancia con lo dispuesto por la doctrina de seguridad nacional desplegada a lo largo del continente latinoamericano, dieron el paso fundamental al clausurar el Poder Legislativo como organismo facultado para la creación de leyes, amparados en la supuesta amenaza del enemigo no ya externo, sino presente en territorio interno. A partir de allí la dictadura se distanció, a pesar de sus similitudes generales de otros gobiernos de facto, al evidenciarse sin disimulo su componente civil. El poder civil encarnado en el presidente Bordaberry no profesó resistencia discursiva ni de acciones, sino que por el contrario acompañó la disolución de la Cámara de Representantes; en su lugar instauró el Consejo de Estado, que de ahí en más se encargaría de la confección de las leyes. Bordaberry sería presidente hasta 1976 y lo sucederían en el cargo Alberto Demicheli y Aparicio Méndez. Paradójicamente, solo los últimos años de la dictadura vendrían acompañados de una máxima autoridad estatal de extracción militar.



Juan María Bordaberry, Alberto Demicheli, Aparicio Méndez, y Gregorio Álvarez.

Juan María Bordaberry.







Huelga general en 1973.

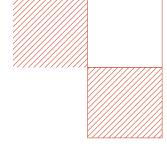
Entre los muchos componentes que se conjugaron para desencadenar los trágicos eventos del año 1973, el factor externo entendido como lucha ideológica y material entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y su consecuente efecto en la región, tuvo un peso sin lugar a dudas decisivo. El desarrollo propio de la Revolución cubana y sus implicancias políticas para América Latina también resultó clave. En el frente interno, la intensa política local estaba atravesada por su descrédito como elemento capaz de lidiar y resolver satisfactoriamente las demandas sociales. A ello se sumaron las crisis económicas y revueltas populares, las cuales intentaron ser aplacadas durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco (1967-1972). Fue mediante la instrumentación de un Estado que acentuó su rol represivo, gracias a la implementación de las «Medidas Prontas de Seguridad», como dispositivo constitucional que le permitió al presidente de la época hacer uso y abuso del poder opresor.

La herencia primordial que esta política estatal legó al presidente Bordaberry fue exactamente el ascenso de las armas como eje de poder preponderante en la vida política. Fue en ese contexto que surgieron los movimientos populares y guerrilleros como el Frente de Liberación Nacional-Tupamaro, el cual rechazaba —al igual que el movimiento de trabajadores en general— la decisión de que el pueblo era quien debía afrontar las consecuencias de las políticas económicas neoliberales, las cuales pretendían apaciguar la inflación crónica y apuntalar el escaso crecimiento económico que Uruguay tuvo durante largo tiempo.

Para finales de 1972 la mayoría de los miembros de la guerrilla ya habían sido desplazados de la escena política a fuerza de represión, encarcelamiento y desaparición. Se agotaban así las posibilidades de justificar el accionar militar amparado en la existencia del ya mencionado enemigo interno. Algo que no pareció importarle al Gobierno *de facto*, el cual evaluaba que las condiciones de seguridad internas continuaban amenazando la estabilidad del país. Ese análisis se tradujo en la política eminentemente represora que apuntó al movimiento obrero en su conjunto, y a militantes de partidos políticos de izquierda (como los integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Comunista, Agrupación de Militantes Socialistas, los grupos de Acción Unificadora, entre otros) como a cualquier otro individuo que intentase criticar el accionar militar. Los cuatrocientos cincuenta y seis muertos y ciento setenta y seis desaparecidos fueron la consecuencia de la política opresora, la cual contó con la «Operación Cóndor», una estrecha relación entre las dictaduras uruguaya y argentina. Muestra de esto fue la elevada tasa de prisioneros que Uruquay tuvo por esos años.

Por otro lado, la estrategia económica llevada adelante por la dictadura fue oscilante. Se llevó a cabo un intento de reforma agraria, el achicamiento de la deuda externa y la búsqueda del pleno empleo. Sin embargo, al poco tiempo el Gobierno cambió de rumbo acercándose a la concepción del neoliberalismo. Así, si bien fue adoptada como doctrina la no incidencia del Estado en el plano económico, en la práctica existieron momentos donde el Gobierno debió apelar al intervencionismo estatal, por lo que quedaron empresas claves bajo control público. No obstante, el emplazamiento del mercado como asignador de recursos, la ponderación de la inversión privada, la interpretación de la inflación como la principal causante del paupérrimo crecimiento y el libre juego de la oferta y la demanda como eje estructurador de los precios, sepultaron una política económica que durante mucho tiempo había tenido a la intervención del Estado como eje.

En lo estrictamente político, además de la ya mencionada orientación coactiva, el discurso militar no inducía a la eliminación la eliminación de los partidos políticos,



•

sino más bien a su saneamiento para abrirle paso a una democracia tutelada. Bordaberry, al disponer la prohibición del Parlamento, implícitamente delató lo que tiempo después, exactamente el 1.º de julio de 1976, expresaría como su idea de proyecto político y de país a futuro. En una serie de memorandos dirigidos a la cúpula militar, dejó asentado su convicción en la necesidad de prohibir toda actividad partidaria —algo que luego reafirmó el presidente *de facto* Méndez—, su rechazo no solo al voto como medio de elección de los representantes, sino también como expresión de los deseos del pueblo, la preponderancia del Consejo de Estado como el órgano encargado de la vida legislativa de Uruguay y la institucionalización del poder militar en la vida de la república. Precisamente fue este apartado el que acentuó la interna entre el sector civil y el militar de una dictadura que determinaría la salida del titular del Poder Ejecutivo hacia el año 1976.

Contrariamente a lo acontecido en Argentina y Chile, y en concordancia con Brasil, los partidos políticos no debían ser eliminados, sino en todo caso «saneados» para garantizar el camino hacia una democracia celosamente tutelada por los militares. La estable relación entre la corporación militar y el Partido Colorado (el cual gobernó el país durante un prolongado período) fue una de las razones que empujaron esta visión particular sobre los partidos.

La reforma constitucional de Pinochet plasmó un sistema político ideado por la dictadura; la tentativa de hacer lo mismo en Uruguay y su posterior fracaso en el año 1980, a través de un plebiscito popular, no hizo más que terminar de erosionar el Gobierno promovido por las fuerzas militares. Finalmente, la continuidad de la represión del Estado —a pesar de que en el ideario social la guerrilla había sido ya derrotada— sumado a un salario real extremadamente bajo, generó un creciente malestar social. La dictadura que compartió el poder civil y militar llegó a su fin en 1985, año en que Gregorio Álvarez entregó el poder a Sanguinetti del Partido Colorado, quien asumió la presidencia tras imponerse en elecciones democráticas. El primer presidente elegido democráticamente, además de encabezar un gobierno de corte liberal, negó y trabó todo intento de investigar y juzgar a los autores intelectuales y materiales de la dictadura.

LA PRENSA URUGUAYA FRENTE A LA DICTADURA MILITAR









- 1. Portada del 2 de diciembre de 1982.
- 2. Portada del 27 de junio de 1973.
- 3. Portada del 10 de marzo de 1985.
- 4. Portada del 3 de julio de 1976.

EL SISTEMA LEGAL IMPUESTO A LOS MEDIOS EN EL URUGUAY DICTATORIAL LEY DE RADIODIFUSIÓN (LEY 14 670) 15 DE JUNIO 1977



PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Los servicios de radiodifusión, considerados de interés público, podrán explotarse por entidades oficiales y privadas, en régimen de autorización o licencia, con la respectiva asignación de frecuencia.

Entiéndase por radiodifusión, a los efectos de esta ley, el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisoras sonoras, televisivas o similares estén destinadas a la recepción directa por el público.

Artículo 2.º El Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica (SODRE) gozará de preferencia sobre los particulares en cuanto a la asignación de frecuencias o canales y ubicación de estaciones, así como en todo lo relativo a las demás condiciones de instalación y funcionamiento.

Artículo 3.º Las emisoras privadas incurrirán en responsabilidad frente a la Administración, en los casos siguientes:

1) Si transmitieren o intentaren transmitir sin autorización; 2) Cuando infringieren cualquiera de las condiciones de la autorización; 3) En caso de que transgredieren las normas de emisión y funcionamiento que establezcan las leyes y los reglamentos o los usos intencionales, según lo dispuesto en los convenios respectivos; 4) Cuando las emisiones, sin configurar delito o falta, pudieren perturbar la tranquilidad pública,

menoscabar la moral y las buenas costumbres, comprometer la seguridad o el interés públicos, o afectar la imagen o el prestigio de la República.

Artículo 4.º El Poder Ejecutivo podrá imponer, en las hipótesis del artículo anterior, las siguientes sanciones:

- 1.º) Advertencia;
- 2.º) Apercibimiento;
- 3.º) Multa equivalente al importe de treinta unidades reajustables (Ley 13 728, del 17 de diciembre de 1968) a trescientas unidades reajustables;
- 4.º) Suspensión o clausura de la emisora por plazo de veinticuatro horas, como mínimo y treinta días como máximo;
- 5.º) Revocación de la autorización. En la hipótesis del numeral 3 del artículo precedente, se dispondrá la clausura definitiva, con incautación de la emisora sin indemnización.

Artículo 5.º El Poder Ejecutivo graduará racionalmente la aplicación de las sanciones atendiendo a la gravedad de la falta, a la entidad del daño y a los antecedentes de la emisora responsable.

Artículo 6.º En caso de delitos de lesa nación (Ley 14 068, de 10 de julio de 1972), el Poder Ejecutivo procederá de inmediato a la clausura provisoria de la emisora responsable, dando cuenta a la jurisdicción competente, sin perjuicio de

la decisión administrativa final en cuanto a la autorización.

Cuando se tratare de otros delitos o de faltas, el Poder Ejecutivo podrá suspender preventivamente la autorización de la emisora responsable, dando cuenta a la justicia ordinaria, a sus efectos.

Artículo 7.º La Dirección Nacional de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República (DINARP) será competente para controlar que las emisoras se ajusten a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulen la libre comunicación del pensamiento.

Artículo 8.º Deróganse la Ley 8390, del 13 de noviembre de 1928, y las demás disposiciones modificativas y concordantes, en lo referente a radiodifusión.

Hamlet Reyes, presidente, Nelson Simonetti, secretario

Ministerio de Defensa Nacional. Montevideo, 23 de junio de 1977.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Aparicio Méndez Walter Ravenna

OPERACIÓN CÓNDOR

La «Operación Cóndor» consistió en un conjunto de prácticas trasnacionales coordinadas y desarrolladas por organismos represivos que respondían a las dictaduras militares de los países del Cono Sur. Su apogeo fue entre 1975 y 1978. Cada país integrante intervino a partir de organismos específicos: Argentina lo hizo a través del Servicio de Inteligencia de Estado (SIDE) y del Batallón de Inteligencia 601 perteneciente al Ejército; Chile a partir de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA); Uruguay con el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA); Paraguay, con el Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción y el Departamento II del Estado Mayor General del Ejército; Bolivia, con la Dirección de Orden Político de la Policía; y Brasil, que intervino más periféricamente, lo hizo con el Estado Mayor del Ejército. Paralelamente, pero como parte del mismo ciclo represivo regional, se produjeron acciones que excedían los marcos de la «Operación Cóndor», desarrollados por otros servicios de inteligencia (como el Servicio de Inteligencia Naval en la Argentina) o ciertas policías regionales, pero que también parecen haber actuado con cierta coordinación.

El principal justificativo de las propias dictaduras para desplegar dicha coordinación fue la aparición de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), una organización integrada por organizaciones guerrilleras de distintos países de la región. Sin embargo, respondía a un concepto inscripto en la Guerra Fría y que era hijo de la doctrina de la seguridad nacional, donde las fronteras que delimitaban al «enemigo» —cuyo alcance pasó a ser por demás incierto— eran ahora ideológicas y no más geográficas. Así, la «Operación Cóndor» se llevó a cabo debido a la «amenaza» que para dichas dictaduras representaban, por un lado, el surgimiento de gobiernos populares elegidos democráticamente durante las décadas de 1960 y 1970, como sucedía en los casos de Juan Domingo Perón en Argentina o Salvador Allende en Chile, y por otro, para llevar adelante una feroz persecución y represión contra lo que denominaban el «terrorismo y la subversión».

Además de los efectos del espionaje y la presión psicológica sobre los migrantes políticos de la región, el saldo más tangible de su puesta en práctica fue la desaparición o ejecución sumaria de ciudadanos en alguno de los países que formaban parte de la coordinación y fuera de sus países de origen. En Argentina, uno de los tantos centros clandestinos de detención conocido como «Automotores Orletti», ubicado en la capital del país, estuvo específicamente destinado a la represión transnacional; por allí pasaron ciudadanos argentinos, chilenos, uruguayos, bolivianos y cubanos.

Si bien Estados Unidos parece no hacer sido el autor intelectual de la «Operación Cóndor», sí cumplió un destacado lugar en su financiamiento y equipamiento, ya que sus objetivos abonaban su estrategia regional. El giro del gobierno de Fidel Castro hacia el bloque comunista había sido uno de los hitos que había puesto en alerta al Gobierno de Estados Unidos que, en el marco de la Guerra Fría, se propuso no volver a permitir que uno de los países de su continente se alinease con la Unión Soviética. Fue así que en América Latina los militares constituyeron para Estados Unidos la garantía contra la posibilidad de que la experiencia cubana pudiese recalar en otras tierras. La intención de intervenir para evitar la formación de cualquier gobierno antiimperialista y antinorteamericano fue un factor determinante en su apoyo a la «Operación Cóndor».

El acuerdo pretendía coordinar acciones en todos los territorios en cuestión, e



incluso en aquellos países que se hallaban fuera, pero que recibían exiliados políticos procedentes de América Latina. Las pruebas fehacientes de esta operación se consiguieron recién en 1992, cuando se encontraron en Paraguay archivos de la dictadura de ese país, los cuales fueron conocidos como los «Archivos del Horror». Esta documentación fue hallada a raíz de la búsqueda impulsada por Martín Almada, una de las tantas víctimas de la represión ilegal en Paraguay. Ofrecía pruebas sobre el rol, conocimiento y apoyo de Estados Unidos respecto del accionar de la «Operación Cóndor». Con posterioridad, ya en el siglo XXI, las gestiones de gobiernos latinoamericanos y organizaciones no gubernamentales consiguieron que Washington desclasificara y entregara a los países del Cono Sur documentos de la Secretaría de Estado, donde también se pudo comprobar el rol de Estados Unidos y la coordinación entre dicho gobierno y las dictaduras de aquel entonces.

Para llevar adelante su plan de contención contra movimientos comunistas y populares, una de las herramientas principales utilizadas por el Gobierno estadounidense (además del financiamiento directo) fue el adiestramiento de los militares procedentes de las distintas Fuerzas Armadas de los países intervinientes. Dicha tarea fue realizada —aunque no exclusivamente— en la Escuela de las Américas. Fundada en 1946 en los inicios de la Guerra Fría, fue ubicada en el canal de Panamá, bajo ocupación estadounidense. Tenía como objetivo el adiestramiento de efectivos militares y de las fuerzas de seguridad que, procedentes de América Latina, recibían entrenamiento en métodos de interrogación, tortura, asesinato y represión para la lucha contrainsurgente. En 1984, tras algunos intentos de reubicarla en otro país, fue trasladada a territorio norteamericano.

También la escuela militar francesa caló hondo en estas tierras. En el caso argentino, los militares que egresaban con las mejores notas de la Escuela Superior de Guerra recibían una capacitación en París, desde donde hacían prácticas en Argelia, en plena guerra de Independencia. Allí fue donde los militares galos les enseñaron cómo obtener, entre otras cosas, declaraciones e información a través de la tortura.

ACTA FUNDACIONAL DE LA «OPERACIÓN CÓNDOR» COORDINACION REPRESIVA EN EL CONO SUR 21 DE NOVIEMBRE DE 1975

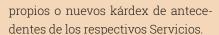
ACTA DE CLAUSURA DE LA PRIMERA REUNIÓN INTERAMERICANA DE INTELIGENCIA NACIONAL

En Santiago de Chile a veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, se procede a clausurar la PRIMERA REUNIÓN INTERAMERICANA DE INTELIGENCIA NACIONAL, con la participación de las delegaciones

de ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, PARAGUAY y URUGUAY, quienes acuerdan efectuar las siguientes recomendaciones para su accionar futuro:

RECOMENDACIONES

1.º Iniciar a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales, a voluntad de los países aquí participantes, para el intercambio de información subversiva, abriendo



- **2.º** Recomendamos la formación de una oficina coordinadora, destinada a proporcionar antecedentes de personas y organizaciones conectadas con la subversión.
- **3.º** Recomendamos se estudie la proposición de establecer un sistema de contacto periódico entre los Servicios de Inteligencia mediante la aprobación o modificación de lo



propuesto para normalizar este tipo de encuentros.

- **4.º** Recomendamos establecer el sistema de coordinación mediante tres etapas para su activación.
- **5.º** LA PRIMERA ETAPA que recomendamos es la siguiente:
- a.- Establecer un directorio completo con los nombres y direcciones de aquellas personas que trabajen en Inteligencia para solicitar directamente los antecedentes de personas y organizaciones conectadas directa o indirectamente con el marxismo.
- b.- Recomendamos que los servicios de seguridad atiendan con prioridad las peticiones de antecedentes de los Servicios involucrados en el sistema.
- c.- Recomendamos el contacto muy rápido e inmediato cuando se expulse del país un individuo o viaje un sospechoso, para alertar a los Servicios de Inteligencia.
- d.- Recomendamos el uso del sistema de criptografía que se pondrá a disposición de los países en los próximos 30 días, es bien entendido que presente vulnerabilidades, y será reemplazado a futuro por máquinas criptográficas que serán seleccionadas de común acuerdo.
- e.- Recomendamos estudiar los modelos de fichas que se propone, comunicándose las modificaciones necesarias.
- f.- Recomendamos colocar a disposición del equipo de técnico los antecedentes que posean sobre los Servicios de Inteligencia sobre: télex;

microfilm; computación; criptografía; para completar lo que falte; aprovechar lo que hay y proponer nuevos elementos.

- g.- Recomendamos la habilitación en las embajadas de nuestros países, la presencia de personal de Inteligencia nacional o similares para enlaces directos o personales, plenamente acreditados ante los Servicios.
- h.- Recomendamos recibir a las personas que estudiaron los temas teóricos del sistema referidos al banco de datos y transmisiones de antecedentes.
- i.- Recomendamos la utilización de los medios de enlaces ajenos a los países del sistema, especialmente extracontinentales para obtener antecedentes sobre la subversión.
- j.- Recomendamos facilitar los medios para publicar informaciones destinadas a atacar a la subversión y que digan relación con nuestros países.
- k.- Recomendamos realizar la próxima Conferencia una semana antes de la reunión de comandantes en jefe del Ejército, teniendo como país sede Chile y a la cual cada país se hará representar por no más de tres delegados.
- l.- El presente Organismo se denominará «CÓNDOR», aprobado por unanimidad, conforme a la moción presentada por la delegación de Uruguay en homenaje al país sede.
- **6.º** Para la segunda fase se recomienda:
- a.- Evaluar los resultados de la primera fase y proponer antecedentes

que faciliten la elaboración del proyecto de factibilidad del sistema en discusión.

- b.- Incrementación de los sistemas de comunicación y enlaces que permitan agilizar los intercambios de información, tanto bilateral como multinacional.
- c.- Presentación del Proyecto de Factibilidad del Sistema de Coordinación de Inteligencia.
- **7.º** Para la tercera fase, se recomienda:
- a.- Aprobación del Proyecto de Factibilidad del Sistema de Coordinación de Inteligencia.
- **8.º** La inclusión de cualquier otro país en el sistema CÓNDOR, deberá contar con la aprobación del total de los países participantes a la primera conferencia.
- **9.º** La presente acta de clausura, con las recomendaciones estampadas, será ratificada con la firma de los respectivos jefes de Servicio de los países participantes en un plazo no superior a sesenta días a contar desde esta fecha y que se materializa el 30 de enero de 1976.

Para constancia firman:

JORGE CASAS (capitán de Navío, jefe delegación ARGENTINA), CARLOS MENA (mayor de Ejército, jefe delegación BOLIVIA), MANUEL CONTRERAS SEPÚLVEDA (coronel de Ejército, director de Inteligencia Nacional, CHILE), JOSÉ A. PONS (coronel de Ejército, jefe delegación URUGUAY), BENITO GUANES SERRANO (coronel de Ejército, jefe 2º Departamento del E. M. FF. AA, PARAGUAY).

LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS EN AMÉRICA DEL SUR

I modo en que cada uno de estos países realizó la transición a la democracia resulta determinante para entender la posterior configuración de sus respectivos sistemas políticos, tanto desde el punto de vista de la incorporación de los militares al sistema democrático, cuanto desde la participación de las clases populares.

En el caso de Chile, gran parte de la sociedad aceptó las normas impuestas por los militares salientes. Pinochet tuvo banca de senador vitalicio hasta 1999, a la que renunció luego de haber sido detenido en Inglaterra acusado por violaciones a los derechos humanos, sobre la base de una investigación realizada por el juez español Baltasar Garzón.

La dimensión institucionalista también fue importante en el caso de Uruguay. Las transiciones de Brasil y Argentina en cambio, se encuentran en una situación intermedia. En este último, fueron factores claves tanto el desprestigio del gobierno militar luego de la guerra, la inestabilidad y crisis de la economía, como la posterior condena judicial a los miembros de la dictadura.

La pretendida reorganización nacional declamada por la Junta Militar en la Argentina, es decir, el concepto de la imperiosa necesidad de refundar los países bajo la tutela del mercado, puede ser proyectado a la mayoría de las dictaduras del continente. Aun con las diferencias marcadas en este apartado, existió un *ethos* común en todas ellas, el cual consistía en hacer de la supuesta lucha contra la «subversión» una cuestión de Estado.

El neoliberalismo fue la herramienta de política económica que las dictaduras instauradas en América Latina comenzaron a aplicar para erradicar de raíz toda resistencia proveniente de las clases populares. Si el objetivo político era desactivar o eliminar a la clase trabajadora como clase social en sí misma, su capítulo económico le allanó el camino a la ganancia extraordinaria a costa de los trabajadores, generando un nuevo modelo de acumulación en favor de la formación de una nueva clase dominante.

- 1. Mural contra la impunidad en Uruguay.
- 2. Mural conmemorativo del Colectivo Político Ricardo Carpani, ubicado en el barrio de La Boca, Buenos Aires, sobre la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.
- 3. Mural en las calles de Chile.
- 4. Chile recuerda a Víctor Jara a cuarenta años de su asesinato en dictadura.











No.

LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

urante el siglo XIX y XX, Nicaragua sufrió la incesante intervención de potencias extranjeras, especialmente de los Estados Unidos luego de que Inglaterra cediese sus zonas de influencia en el Caribe. La revolución de 1979 buscó la independencia económica y la soberanía política del país, yendo contra las políticas de intercambio que subordinaron el interés nacional frente al extranjero, como así también contra los regímenes que lo posibilitaron. Tuvo sus raíces en los combates fomentados por Augusto César Sandino, patriota nacionalista asesinado por la «Guardia Nacional», quien combatió la intervención de los Estados Unidos. En 1937, al mando de la «Guardia Nacional» estaba el general Anastasio Somoza García, quien derrocó al presidente Juan Bautista Sacasa y dio inicio a la dictadura de la familia Somoza que gobernó (bajo la tutela norteamericana) hasta el triunfo de la Revolución sandinista en 1979.

La dictadura somocista tenía el apoyo extranjero, de la «Guardia Nacional» y del sector terrateniente que reproducía el modelo agroexportador a través de enclaves norteamericanos para la producción de café, algodón, azúcar y ganadería en la costa del Pacífico. El último integrante del clan familiar en ostentar el poder fue Anastasio Somoza Debayle, y fue durante su gobierno cuando emergieron los movimientos de resistencia. En la década de 1960 nació el Frente de Liberación Nacional, luego Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL), que llevó adelante la lucha armada contra Somoza. Sus principales referentes fueron Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borge, Germán Pomares Ordóñez y Silvio Mayorga. El Frente estaba compuesto por tres grupos que se unieron para llevar adelante la ofensiva.

AMÉRICA CENTRAL: ENTRE LA REVOLUCIÓN Y LA GUERRA CIVIL

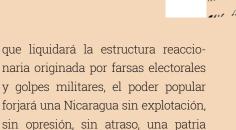
PROGRAMA HISTÓRICO DEL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (FSLN) LA HERENCIA PROGRAMÁTICA DE SANDINO (1969)

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha surgido de las necesidades del pueblo nicaragüense de tener una «Organización de Vanguardia» capaz de lograr mediante la lucha frontal contra sus enemigos, la toma del poder político y el establecimiento de un sistema social que liquide la explotación y la miseria que ha padecido nuestro pueblo en el pasado histórico. El FSLN es una organización POLÍTICO-MILITAR cuyo

objetivo estratégico es la toma del PODER POLÍTICO mediante la destrucción del aparato militar y burocrático de la dictadura y el establecimiento de un gobierno revolucionario basado en la alianza OBRERO-CAMPESINA y el concurso de todas las fuerzas patrióticas ANTIIMPERIALISTAS Y ANTIOLIGARQUICAS DEL PAÍS.

[...]

La Revolución Popular Sandinista establecerá un gobierno revolucionario



siguientes medidas de índole política:
- Dará al poder revolucionario
una estructura que permita la plena
participación de todo el pueblo,
tanto a nivel nacional como a nivel

libre, progresista e independiente. El

gobierno revolucionario dictará las





local (departamental, municipal, comarcal).

- Garantizará a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de todas las libertades individuales y el respeto a los derechos humanos.
- -Garantizará la libertad de emisión del pensamiento que conduzca primordialmente a la vigorosa difusión de los derechos populares y de los derechos patrios.
- Garantizará la libertad para organizar el movimiento obrero-sindical en la ciudad y en el campo, libertad para organizar agrupaciones campesinas, juveniles, estudiantiles, femeninas, culturales, deportivas, etc.
- Garantizará el derecho de los nicaragüenses emigrados y exiliados a retornar a suelo patrio. Garantizará el asilo a los ciudadanos de otros países perseguidos por participar en la lucha revolucionaria.
- Castigará severamente a los verdugos culpables de perseguir, delatar, ultrajar, torturar o asesinar a los revolucionarios y al pueblo.
- -Privará de sus derechos políticos a los individuos que ocupen altos cargos públicos a raíz de las farsas electorales y golpes militares. El gobierno revolucionario dictará las siguientes medidas de índole económica:
- Expropiará los latifundios, fábricas, empresas, edificios, medios de transporte y demás bienes usurpados por la familia Somoza y

acumulados mediante la malversación y despojos de las riquezas de la nación.

- Expropiará los latifundios, fabricas, empresas, medios de transporte y demás bienes usurpados por políticos y militares y todo tipo de cómplices que se han valido de la corrupción administrativa del régimen actual.
- Nacionalizará los bienes de todas las compañías extranjeras, que se dediquen a la explotación de los recursos minerales, forestales, marítimos y de otra índole.

[...]

- Desconocerá los empréstitos impuestos al país por los monopolios yanquis o de cualquier otra potencia.
- Establecerá relaciones comerciales con todos los países, cualquiera sea el sistema que los rija, en beneficio del desarrollo económico del país.

[...]

- -La Revolución Popular Sandinista sentará las bases para el desarrollo de la cultura nacional, la enseñanza popular y la reforma universitaria.
- Impulsará una campaña masiva para exterminar en forma inmediata el «analfabetismo».
- Desarrollará la cultura nacional y extirpará la penetración neocolonial en nuestra cultura.

[...]

- Legislación laboral y seguridad social. La Revolución Popular Sandinista, liquidará las injusticias de las condiciones de vida y trabajo padecidos por la clase obrera bajo la brutal explotación en favor de la legislación laboral y asistencial social.

[...]

- Ejército patriótico popular. La Revolución Popular Sandinista abolirá la fuerza armada enemiga del pueblo denominada Guardia Nacional (G. N.) y creará un Ejército Popular, Revolucionario y Patriótico.

[...]

- Educará a las nuevas generaciones en la gratitud y veneración eterna hacia los caídos en la lucha para que Nicaragua sea una patria Libre.
- Fundará una escuela superior para educar a los hijos de los mártires de nuestro pueblo. Inculcará a todo el pueblo el ejemplo imperecedero de nuestros mártires, defendiendo el ideal revolucionario.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE





- 1. Mural conmemorando la muerte de Carlos Fonseca Amador.
- 2. Miembros de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
- 3. Militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

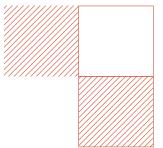




En la región centro norte de la montaña se encontraba el campesinado que alimentó las filas del movimiento guerrillero Guerra Popular Prolongada (GPP). En las ciudades se hallaba la pequeña burguesía y los trabajadores asalariados, que se unieron bajo el movimiento de los proletariados. Por último, la tendencia Tercerista, cuyo referente era Edén Pastora, el «Comandante Cero» partícipe en la toma del Palacio Nacional de Managua en agosto de 1978.

A fines de 1977, el FSLN lanzó la «Ofensiva de Octubre». La «Guardia Nacional» recuperó rápidamente sus instalaciones, aunque demostró la vulnerabilidad del somocismo. La guerrilla fue apoyada por los intelectuales nicaragüenses en el exilio, que lanzaron el «Manifiesto del Grupo de los Doce», y por países como Costa Rica, México, Panamá y Venezuela.

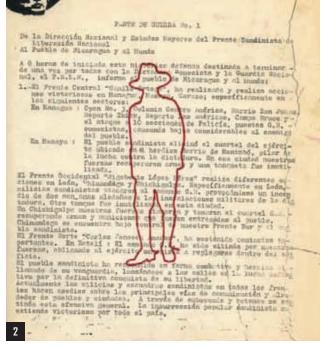
En 1978, el asesinato del director del periódico *La Prensa*, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, aumentó las protestas de la clase media y empresarial. El 22 de agosto, la toma del Palacio Nacional del Congreso obligó a Somoza a aceptar el pliego de condiciones del Frente.





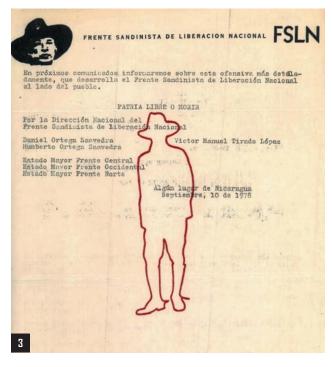
En 1979, el FSLN llamó a la ofensiva final que intensificó la lucha contra la «Guardia Nacional» y convocó a una huelga general. El Gobierno respondió con un bombardeo a las ciudades que se levantaron en su contra. Para ayudar a Somoza, Estados Unidos intentó intervenir a través de la OEA. El fracaso de dicha intervención obligó a Somoza a renunciar. Así, el FSLN entró en Managua el 19 de julio de 1979, y comenzó a gobernar mediante la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.





FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL FSLN

 La caída de Somoza.
 Parte de guerra N.º 1 del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 10 de septiembre de 1978.
 Parte de guerra N.º 1 del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 10 de septiembre de 1978.







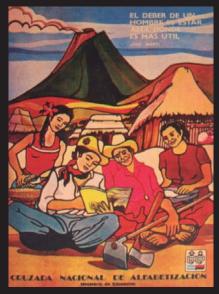




CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN











Desde el nuevo Gobierno, los sandinistas buscaron fortalecer una Nicaragua independiente y no alineada con Estados Unidos, promoviendo la justicia económica a través de una serie de reformas que tuvo inicio con la nacionalización de la fortuna de la familia Somoza primero, y la reforma agraria después. De esta manera, se llevaron adelante profundas transformaciones desde el inicio de la revolución, buscando la reparación social de una población golpeada por las intervenciones, la violencia y la opresión. Las campañas de alfabetización por ejemplo, llevadas a cabo por cientos de jóvenes, modificaron una situación de fuerte vulnerabilidad. A su vez, la reforma agraria instaló un nuevo paradigma de la propiedad comunal que rompió con los preceptos del capitalismo clásico. Luego de años de aislamiento, se restablecieron las relaciones diplomáticas con una gran cantidad de naciones de América Latina y Europa, quienes apoyaron al régimen sandinista en su labor de recuperación económica, respeto por la soberanía y los derechos humanos.

El poder se ejerció «desde abajo» a través de la participación del proletariado urbano y rural, en alianza con los campesinos y los sectores medios asalariados. Gran parte de la sociedad ejerció su compromiso con el Ejército Popular Sandinista (quien reemplazó a la «Guardia Nacional») a través del entrenamiento militar. A comienzos de 1981, el FSLN debió hacer frente al embate de las milicias contrarrevolucionarias «los Contras» financiadas por Estados Unidos. En 1984, se convocó a elecciones y asumió como presidente el conductor del FSLN, Daniel Ortega, quien triunfó con casi un 70 % de los votos.

El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, no tardó en oponerse al gobierno sandinista e inició un embargo comercial (que llevó a tejer fuertes lazos entre Nicaragua y Cuba) en el marco de la «Guerra de Baja Intensidad» que el país del norte desplegaba en la región de América Central y el Caribe. El apoyo sandinista, además de los sectores populares, se encontraba en la policía, el ejército

y el aparato estatal, pero aquellos que no eran parte del frente, como los propietarios de la tierra, los servicios y las multinacionales, se oponían a la dependencia hacia Cuba y la Unión Soviética. La idea del ataque extranjero del ejército somocista en el exilio y de la oposición en el interior (gran repercusión recobró el enfrentamiento con ciertas comunidades indígenas como la de los *miskitos*) incrementó el presupuesto de defensa del gobierno sandinista, generando una caída de la producción que culminó con un proceso inflacionario. La economía no repuntó de cara a las elecciones que se celebraron en febrero de 1990, donde el candidato sandinista, Daniel Ortega, perdió contra la coalición UNO, cuya candidata era Violeta Barrios de Chamorro, esposa del asesinado Joaquín Chamorro Cardenal, periodista dueño y director del periódico nicaragüense *La Prens*a.



Violeta Barrios de Chamorro.

EL SALVADOR

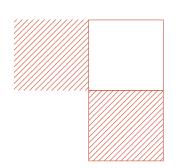
Entre los años 1980 y 1992, El Salvador se vio azotado por una guerra civil. Fue consecuencia de décadas de desgobiernos y conflictos políticos, económicos y sociales generados por la falta de respuestas de un sistema político y económico de tipo oligárquico.

Los antecedentes de un conflicto interno de tamaña gravedad pueden remontarse a las insurrecciones campesinas de 1932, las cuales se generaron debido a la difícil situación económica del país. Esto sucedió principalmente por la crisis mundial de 1929 y la consecuente caída del precio del café, lo cual dio comienzo a un período de gobiernos autoritarios tutelados por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en connivencia con los principales referentes del sector agrario. Dicha etapa se prolongó hasta finales de la década de 1970.

Durante las décadas de 1960 y 1970, como preludio a lo que estaba por venir, se acentuaron cada vez más los conflictos internos. Por un lado, la polarización en la sociedad salvadoreña hizo que el consenso y el diálogo fuesen una utopía. Fue tan fuerte la crispación que incluso penetró en la Iglesia, institución dividida en aquellos que se ubicaron en el conservadurismo, y entre otros que lo hacían del lado de los marginados del sistema, postura que prevaleció desde fines de la década de 1960. En el marco de la Guerra Fría, tomar partido por la defensa de los más pobres implicaba ser considerado un «comunista».

Dicha situación se expresaba también en la contienda política mediante la conformación de bloques para unir fuerzas y caudal de votos. Sin embargo, el sostenido fraude en cada proceso electoral erosionaba cada vez más la credibilidad en el sistema político y democrático del país, daba mayor legitimidad a los gobiernos militares y hacía inútil el accionar político de la oposición, victima además de amenazas y persecuciones. Tal cuestión terminó por «expulsar» de la arena política a vastos sectores de la sociedad que no se sentían escuchados en sus reclamos, siendo la cuestión de la tierra el principal conflicto de la sociedad salvadoreña. Dicha situación hizo que la lucha armada ganara terreno como alternativa de cambio, principalmente en los sectores más desfavorecidos, aunque también en ciertos sectores conservadores de la derecha, y diera lugar a la conformación de grupos paramilitares denominados «Escuadrones de la Muerte».

Bajo ese escenario, los movimientos político-guerrilleros cobraron notoriedad en su estrategia de lucha armada urbana y rural. Al Partido Comunista Salvadoreño y a las Fuerzas Armadas de Liberación (PCS-FAL), se le sumaron en 1970 las



Fuerzas Populares de Liberación (FPL-Farabundo Martí); en 1971 el Partido de la Revolución Salvadoreña-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRS-ERP), en 1974 la Resistencia Nacional-Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (RN-FARN) y en 1975 el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Posteriormente en octubre de 1980, las organizaciones se unirían para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El creciente uso de las políticas represivas por parte de los sucesivos Gobiernos, a través de un sangriento y prolongado enfrentamiento, hicieron de la violencia un recurrente recurso de expresión con graves consecuencias, las cuales iban a ser mucho más devastadoras en la década siguiente.

Como corolario en 1979, el derrocamiento del dictador pronorteamericano Anastasio Somoza por parte del FSLN en la vecina Nicaragua presagiaba un posible «efecto dominó» en otros países de la zona. Dicha situación alimentó aún más la intransigencia en uno y otro espacio.

COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA UNIFICADA (DRU-PM) ANUNCIANDO LA FORMACIÓN DEL FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL (FMLN) 10 DE OCTUBRE DE 1980



Con gran entusiasmo revolucionario, la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM), integrada en estos momentos por las organizaciones Partido Comunista de El Salvador (PCS), Fuerzas Populares de Liberación (FPL) «Farabundo Martí» y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), anuncia a los trabajadores y demás sectores revolucionarios y democráticos, los trascendentales pasos de consolidación y cohesión política, militar y orgánica de la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM), que como órgano superior de dirección unificada del proceso revolucionario de nuestro pueblo, han sido tomados recientemente.

[...]

A continuación damos a conocer algunos de los importantes acuerdos:

—Paso de excepcional importancia, después de la formación de la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM), ha sido el haber dotado a esta de la capacidad y mecanismos necesarios para tomar las decisiones estratégicas para dirigir la guerra revolucionaria, al adoptar el Centralismo Democrático como la base de su funcionamiento y la toma de decisiones por mayoría.

[...]

El símbolo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), será la personalidad del inmortal dirigente revolucionario del pueblo salvadoreño, Agustín Farabundo Martí, cuya figura irá acompañada en el logo oficial con dos fusiles en dinámica conjunción.

 De esta misma manera se reafirmó como lema oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la frase: «Unidos para combatir hasta la victoria final», que se complementará con la consigna ¡Revolución o muerte! ¡Venceremos!

—La bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), será de color rojo con una estrella de color blanco en el ángulo superior izquierdo y las siglas FMLN, también en color blanco, en el centro de la bandera.

-Comunicamos también que en breve circulará el órgano propagandístico unificado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; esta publicación llevará el nombre: «Venceremos».

Y como pasos vitales para la consolidación y avance del proceso unitario, informamos a nuestro pueblo que están ya constituidas las Comisiones Conjuntas de Propaganda y de Relaciones, que son organismos auxiliares de la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM). En ese mismo sentido, en el terreno militar se encuentra formado y trabajando aceleradamente nuestro Estado Mayor General Conjunto, con sus organismos de apoyo, las secciones conjuntas de Operaciones, Información, Logística y Comunicaciones.

—Como parte de este proceso acelerado de unidad, están ya constituidos nuestros Estados Mayores Conjuntos de cada uno de los cuatro grandes frentes de querra.

—Estos frentes de guerra fueron nominados por acuerdo de la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM), de la siguiente manera:

—Frente Central «Modesto Ramírez», en honor a este abnegado dirigente revolucionario que pertenece a la heroica generación de luchadores del pueblo que desde la gesta de 1932 se mantuvo en pie de lucha hasta el último día de su vida.

—Frente Occidental «Feliciano Ama», en honor al líder indígena que muriera asesinado por la dictadura martinista en la insurrección popular de 1932.

—Frente Para Central «Anastasio Aquino», en honor a ese heroico y bravo líder indígena que encabezó las más significativas luchas de nuestro pueblo en el siglo pasado.

—Frente Oriental «Francisco Sánchez», en honor a otro de los heroicos dirigentes populares que encabezaron las fuerzas del pueblo en la insurrección de 1932.

Las organizaciones Partido

Comunista de El Salvador (PCS), Fuerzas Populares de Liberación (FPL) «Farabundo Martí», y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que en este momento integramos la Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM), al pasar a unirnos bajo un solo nombre, una sola bandera, una sola consigna, una sola publicación propagandística central, y dar los pasos orgánicos estratégicos para llevar adelante el plan único de lucha político-militar de nuestro pueblo, estamos contribuyendo a elevar la mística unitaria de nuestros militantes y a elevar también la moral combativa de nuestro pueblo, que tan ansioso ha esperado y luchado por la unificación de su vanguardia.

De ahora en adelante, todo el accionar combativo político y militar de nuestras fuerzas, se calzará con el firme sello de la unidad, bajo el nombre de «Frente Farabundo Martí» para la Liberación Nacional (FMLN).

Hemos tomado para nuestro nombre la figura inmortal de Agustín Farabundo Martí, porque consideramos que este preclaro y visionario dirigente, sintetiza el carácter y el contenido de la heroica lucha de nuestro pueblo.

La figura de Martí, héroe popular asesinado por la dictadura militar martinista en 1932, resurge ahora vigoroso en la poderosa y heroica unidad de las fuerzas de nuestro pueblo, que durante 50 años ha venido luchando contra la opresión y el despotismo de las dictaduras militares instrumentos del imperialismo norteamericano.

Al tomar los nombres de Farabundo Martí, Feliciano Ama, Francisco Sánchez, Modesto Ramírez y Anastasio Aquino, buscamos inmortalizarlos en la gloriosa gesta que ahora libra nuestro pueblo, y de esta manera darle continuidad victoriosa a ese pasado heroico de lucha popular en nuestra patria.

De esta manera, mientras el régimen genocida, apuntalado por el imperialismo yanqui, se convulsiona en los estertores de una crisis total e irreversible y se debate en profundas contradicciones internas, nuestro pueblo fortalece sus diversas instancias de unidad, concentrando sus fuerzas hacia las batallas decisivas por su liberación definitiva y por la formación del Gobierno Democrático Revolucionario.

En este contexto, el camino de la unidad es irreversible y cualquier dificultad que el proceso unitario, que es un proceso múltiple y complejo, se le presente, será superado totalmente por la voluntad, la consciencia y el esfuerzo unitario de nuestro heroico pueblo, que no se detendrá hasta alcanzar la victoria definitiva de su revolución y conquistar el derecho de ejercer su autodeterminación y construir su futuro independiente, revolucionario, democrático, de progreso y bienestar para las inmensas mayorías, hoy explotadas y oprimidas.

Unidos para combatir hasta la victoria final.

¡Revolución o muerte! ¡Venceremos!.

Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN).

Monseñor Oscar Arnulfo Romero

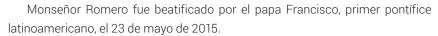
En 1979, un golpe de Estado contra el general Romero buscó promover diversas reformas, como así también denunciar los abusos de poder y violaciones de derechos humanos por parte de los anteriores gobiernos. La principal promesa tenía por objetivo cumplir con el mayor anhelo de cambio de gran parte del pueblo salvadoreño: la reforma agraria. Pero esta propuesta fracasó debido a la falta de apoyo en sectores de las Fuerzas Armadas y del sector empresarial.

A comienzos de 1980, el Gobierno fue desplazado por una Segunda Junta de Gobierno, la cual logró finalmente impulsar la reforma en una primera etapa, como así también hacerse del control de la banca y del comercio exterior. Sin embargo, los intentos de reforma habían llegado en medio del fuego cruzado. Los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla ya eran imposibles de detener. Ante tal situación, y ante la presión de Estados Unidos con el reciente triunfo sandinista en Nicaragua, otra facción de las Fuerzas Armadas alineada a los intereses de dicho país, adujo no encontrar otra salida que la guerra. Pero en este marco de violencia, aún se conservaba la esperanza de que la Iglesia salvadoreña pudiera generar canales de diálogo, incluso a pesar del asesinato de varios sacerdotes por

Monseñor Romero.



parte de los gobiernos autoritarios previos. No obstante a medida que el conflicto recrudecía, las declaraciones de sus más resonantes miembros, principalmente de Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador y principal referente de la Iglesia, se tornaban más críticas hacia la Junta de Gobierno, tanto por las violaciones a los derechos humanos cuanto por el asesinato de civiles indefensos. Ante los pedidos de cese a la represión y a la violencia, el 24 de marzo de 1980 dejó de sonar una de las últimas campanas del diálogo y la conciliación. Mientras oficiaba misa, el arzobispo fue asesinado a manos de un «Escuadrón de la Muerte» (vinculado a un militar de alto rango), hecho que estremeció al país y a la comunidad internacional. Dicha muerte fue considerada como uno de los hitos del conflicto armado salvadoreño, lo cual, junto al cada vez más extremo accionar represivo de la Junta de Gobierno, terminarían precipitando a partir de 1980, el estallido de la guerra civil.





Monseñor Oscar Arnulfo Romero





- 1. El asesinato de Romero.
- 2. La Prensa anuncia la muerte de monseñor

HOMILÍAS DE MONSEÑOR ROMERO

Dios es el Dios de Jesucristo. El dios de los cristianos no tiene que ser otro, es el Dios de Jesucristo, el del que se identificó con los pobres, el del que dio su vida por los demás, el Dios que mandó a su hijo Jesucristo a tomar una preferencia sin ambigüedades por los pobres. Sin despreciar a los otros, los llamó a todos al campo de los pobres para poderse hacer iguales a él. Nadie está condenado en vida; solo aquel que rechaza

el llamamiento del Cristo pobre y humilde y prefiera más las idolatrías de su riqueza y de su poder» (homilía 27-05-1979).

Ahora la Iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la Iglesia es pobre. Hoy la Iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su confianza... Esta es la Iglesia que yo quiero. Una Iglesia que no cuente

con los privilegios y las valías de las cosas de la tierra. Una Iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderlas juzgar con mayor libertad desde su perspectiva del evangelio, desde su pobreza» (homilía 28-08-1977).

He tratado durante estos domingos de Cuaresma ir descubriendo en la revelación divina, en la palabra que se lee aquí en la misa el proyecto de



Dios para salvar a los pueblos y a los hombres; porque hoy, cuando surgen diversos proyectos históricos para nuestro pueblo podemos asegurar: tendrá la victoria aquel que refleja mejor el proyecto de Dios. Y esta es la misión de la Iglesia. Por eso, a la luz de la palabra divina que revela el proyecto de Dios para la felicidad de los pueblos tenemos el deber, queridos hermanos, de señalar también las realidades; ver como se va reflejando entre nosotros o se está despreciando entre nosotros, el proyecto de Dios. Nadie tome a mal que a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros. Y es así como Cristo ha querido encarnarse para que sea luz que él trae del Padre, se haga vida de los hombres y de los pueblos [...]. Ya sé que hay muchos que se escandalizan de estas palabras y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del evangelio para meterse en política, pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio... para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor,

durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión [...]. Hoy también El Salvador vive su éxodo propio, hoy estamos pasando también nosotros la liberación por el desierto donde cadáveres, donde el dolor angustioso nos va asolando, y muchos sufren la tentación de los que caminaban con Moisés y querían volverse y no colaboraban. Es la historia de siempre, Dios quiere salvar al pueblo haciendo nueva la historia. La historia no se repite aunque el dicho dice: «la historia se repite», hay ciertas cosas que aparentemente son repetición. Lo que no se repite son las circunstancias, las coyunturas, somos testigos en El Salvador. ¡Qué densa nuestra historia, qué variado de un día para otro! Sale uno de El Salvador y regresa la semana siguiente y parece que ha cambiado tan rotundamente la historia. No nos estabilicemos en querer juzgar las cosas como las juzgamos una vez. Una cosa sí: tengamos firmemente anclada en el alma la fe en Jesucristo. el Dios de la historia, ese sí no cambia. Pero él tiene como la complacencia de cambiar la historia, jugar con la historia; «hago nuevas las cosas» [...].

La gracia del cristiano, entonces, está en no estabilizarse en tradiciones que ya no se pueden sostener sino en aplicar esa tradición eterna en Cristo a las realidades presentes. Los cambios en la Iglesia, queridos hermanos, sobre todo los que hemos sido formados en otras épocas, en otros sistemas, tenemos que tener y pedirle al Señor esa gracia de tenernos que adoptar sin traicionar nuestra fe, ser comprensivos con la hora de hoy. Dios hace nuevas las cosas y por eso corregía a los israelitas porque se alegraban del primer éxodo y no pensaban que Dios estaba haciendo ya maravillas en un segundo éxodo, y las haría mucho mayores en la era cristiana como las vamos viendo nosotros [...]. La historia no perecerá, la lleva Dios. Por eso digo, en la medida en que los proyectos históricos traten de reflejar el proyecto eterno de Dios, en esa medida, se van haciendo reflejo del Reino de Dios y este es el trabajo de la Iglesia; por eso ella, Pueblo de Dios en la historia, no se instala en ningún sistema social, en ninguna organización política, en ningún partido. La Iglesia no se deja cazar por ninguna de esas fuerzas porque ella es la peregrina eterna de la historia y va señalando a todos los momentos históricos lo que sí refleja el Reino de Dios y lo que no refleja el Reino de Dios y qué no refleja el Reino de Dios, Ella es servidora del Reino de Dios [...]. El gran trabajo de los cristianos tiene



que ser ese, empaparse del Reino de Dios y desde esa alma empapada en el Reino de Dios, trabajar también los proyectos de la historia. Está bien que se organicen en organizaciones populares, está bien que hagan partidos políticos, está bien que tomen parte en el Gobierno, está bien con tal que seas un cristiano que llevas el reflejo del Reino de Dios y tratas de implantarlo allí donde estás trabajando, que no seas juguete de las ambiciones de la tierra... Y este es el gran deber de los hombres de hoy. Mis queridos cristianos, siempre les he dicho y lo repetiré, de aquí, del grupo cristiano, del Pueblo de Dios tienen que salir los hombres que van a ser los verdaderos liberadores de nuestro pueblo [...]. Cualquier proyecto histórico que no se fundamente en eso que dijimos en el primer punto: la dignidad de la persona humana, el querer de Dios, el Reino de Cristo entre los hombres, será un proyecto efímero y será cada vez más estable y será cada vez solución del bien común de los pueblos, según la índole de cada pueblo, el que refleje mejor ese eterno designio de Dios. Por eso hay que agradecerle a la Iglesia, queridos hermanos políticos, no manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando, no tiene intereses. Yo no tengo ninguna ambición de poder y por eso con toda libertad le digo al poder lo que está bueno y lo que está

malo y a cualquier grupo político le digo lo que está bueno y lo que está malo, es mi deber [...]. Y desde esa libertad del Reino de Dios, la Iglesia, que no solo es el obispo y los sacerdotes sino todos ustedes los fieles, las religiosas, los colegios católicos, todo lo que es el Pueblo de Dios, el núcleo de los creyentes en Cristo, debíamos de unificar nuestros criterios; no debíamos de desunirnos, no debíamos de parecer dispersos y muchas veces como que somos acomplejados ante las organizaciones políticas populares y queremos complacerlas más a ellas que al Reino de Dios en sus designios eternos. No tenemos nada que mendigarle a nadie porque tenemos mucho que darle a todos... Y esto no es soberbia sino la humildad agradecida del que ha recibido de Dios una revelación para comunicarla a los demás (homilía 23-3-1980).

Al día sigiente, monseñor Romero es asesinado durante la misa en presencia de los fieles.







La guerra civil

Con el reciente proceso revolucionario de Nicaragua en 1979, el FSLN había demostrado que la lucha armada y la organización de masas populares podían ofrecer una exitosa combinación para la insurrección. En ese contexto y bajo la búsqueda de ese mismo recorrido, el 10 de enero de 1981, en lo que muchos consideran el umbral de la guerra civil, el FMLN salvadoreño lanzó una gran ofensiva con tres principales objetivos: la insurrección de masas y la huelga general, el ataque a cuarteles militares en las principales ciudades, y la sublevación de los militares que apoyaban al FMLN. Esta gran ofensiva no logró los objetivos planteados, principalmente en las ciudades, por lo que tuvieron que replegarse hacia las zonas rurales. Esta situación le cedió la iniciativa a las Fuerzas Armadas para el contraataque. Tanto el FMLN como los militares creyeron erróneamente que doblegarían a su enemigo en poco tiempo.

LA GUERRA CIVIL EN IMÁGENES











La evolución del FMLN era visible. Había logrado pasar de ser un elemento de insurrección popular a un ejército revolucionario profesional, situación que generaba inquietudes en los Estados Unidos ante el temor de que se replicara el mismo escenario que en Nicaragua. En consecuencia, el rol de Estados Unidos bajo la administración Reagan, cobró cada vez mayor protagonismo en el conflicto, ya fuese para asistir a la FAES con pertrechos militares, incluyendo helicópteros, como así también con asesoramiento y asistencia financiera al Gobierno de El Salvador. Dicha intromisión fue esencial para mantener equilibrada la correlación de fuerzas.

Pero la guerra civil prosiguió y en diciembre de 1981, una de las peores masacres de la historia nacional se suscitó en una zona de aldeas en el departamento de Morazán. De manera sistemática y deliberada, un batallón del ejército asesinó a cientos de civiles, incluyendo mujeres y niños. Conocida como la «Masacre del Mozote», fue uno de los hitos que marcaron el horror de un triste período en la historia de El Salvador.















Estados Unidos y El Salvador: un vínculo de contención

Con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Ronald Reagan a comienzos de 1981, el Departamento de Estado adoptó una política activa para evitar otro «nicaraguazo». Si bien El Salvador era el país de la región con menor injerencia norteamericana, en gran parte por su limitada geografía y menor presencia de capital norteamericano en su economía, mantenía la misma importancia geopolítica y estratégica que los demás países; así quedó demostrado cuando Reagan decidió intervenir en el conflicto interno salvadoreño como forma de contener el avance insurgente.

A través de la nueva estrategia de la «Guerra de Baja Intensidad», Estados Unidos no pretendía ahora intervenir directamente con tropas, sino que, en alianza con fuerzas políticas y militares locales, buscaba desgastar a las organizaciones revolucionarias a través de una serie de herramientas que iban desde la desestabilización económica, la denominada «guerra pscicológica», la preparación de fuerzas paramilitares y la asesoría a las Fuerzas Armadas locales. De esta manera, la administración Reagan destinó más de mil millones de dólares en armas, helicópteros, asesoramiento y entrenamiento, para transformar a la FAES en una fuerza destinada a la lucha contrainsurgente.

En tanto, el FMLN recibía armamento soviético, principalmente desde Nicaragua y Cuba, lo cual pudo dotar de mayor sofisticación a esta fuerza revolucionaria para contrarrestar así la ofensiva del Gobierno salvadoreño.

La política de los 80: un débil pero persistente intento de transición democrática

Al calor del conflicto armado, los partidos políticos salvadoreños se aventuraron en la búsqueda de una salida democrática. A la seguidilla de gobiernos autoritarios, se le sumaba una guerra civil que comenzaba a empantanarse. Aunque pareciese una paradoja, Estados Unidos, que había ofrecido asistencia a los gobiernos represores anteriores primero, y solventaba gran parte de la ofensiva militar de la FAES después, consideraba ventajosa la posibilidad de un nuevo régimen democrático. Si bien confiaba en una victoria militar sobre el FMLN, dentro de las metas planteadas en su agenda con El Salvador figuraba el hecho de poder instaurar una democracia liberal que dejase atrás el autoritarismo de décadas pasadas.

A partir de 1982, se anunció el llamado a una Asamblea Constituyente, donde se eligió un presidente provisional, mientras que a su vez se diagramaba una nueva Constitución. Mientras que en 1985 y 1988 se renovaron la Asamblea Legislativa y los Concejos Municipales, en 1984 y 1989 hubo elecciones presidenciales. Cada Gobierno hizo el intento por persuadir y alcanzar con las cúpulas del FMLN una mesa de diálogo que permitiera negociar un alto el fuego y un acuerdo de paz. Sin embargo, las partes en disputa desconfiaban de su oponente y a su vez creían en que la victoria militar aún era posible. Sumado a ello, en muchos casos aquellos que querían hallar una salida política al conflicto, y optaban por organizarse social o políticamente, terminaban siendo víctimas de persecuciones por parte de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad o también de organizaciones paramilitares. Dicha situación desalentó la posibilidad de involucrarse en una alternativa no violenta.

En ese contexto de debilidad política, el FMLN lanzó en 1989 una gran ofensiva denominada «Hasta el tope», dirigida hacia la capital, San Salvador, y las principales ciudades. Dicho enfrentamiento había terminado en un virtual «empate», lo cual pareció dejar claro a ambas partes que la posibilidad de una victoria militar era imposible.

El creciente reclamo del pueblo salvadoreño de alcanzar un entendimiento por la paz, sumado al nuevo escenario mundial delineado por la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, terminaron por ofrecer una alternativa para que El Salvador pudiera sentarse a negociar la paz.

Consecuencias de la guerra civil y el acuerdo de paz

Durante casi doce años, el conflicto armado dejó un saldo estimado en setenta y cinco mil muertos, miles de desaparecidos, mutilados, y desplazados tanto hacia el interior cuanto al exterior, principalmente a Estados Unidos. La infraestructura del país fue seriamente afectada y la economía tuvo un pronunciado declive. El alto nivel de violencia, la violación de los derechos humanos, la destrucción completa de poblados, el desarraigo, las altas tasas de desempleo y el alarmante aumento de la pobreza e indigencia obligaron a muchos a dejar el país para probar suerte en el extranjero.

Luego de la elección presidencial de 1989, en la que había sido electo Alfredo Cristiani -procedente del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)—, acontecería la última gran ofensiva del FMLN que puso temporalmente en crisis al nuevo Gobierno, pero que a su vez terminó de convencer a propios y extraños de la inviabilidad de un conflicto que parecía no poder resolverse de otra forma que mediante la vía de la política y la diplomacia. El acuerdo se firmó el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, pero demandó dos años de negociaciones, con avances y retrocesos, y con la decisiva participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del por entonces secretario general, Javier Pérez de Cuellar. Dicho organismo, ofreciéndose como mediador y siendo ajeno a las partes, fue garante para cada una de ellas en el cumplimiento de los compromisos establecidos en dicho acuerdo. Incluyó no solo poner fin al conflicto armado, sino que también incluía la promoción y el fortalecimiento del proceso de democratización. A su vez, las Fuerzas Armadas debían subordinarse al poder civil como así también cumplir con la reducción de las tropas, incluyendo la disolución de los batallones especializados en contrainsurgencia. Finalmente, se debía crear una nueva fuerza de seguridad independiente de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el FMLN se comprometió a cesar la lucha armada e incorporarse a la vida político-institucional, para reinsertar a sus integrantes en la vida civil.

El cumplimiento de lo acordado, y sobre todo el respeto irrestricto por los derechos humanos fue monitoreado por la ONU a través de una misión de observadores establecida en mayo de 1991 denominada ONUSAL. Compuesta por observadores militares y policiales, personal médico y civil nacional e internacional, tenía como función verificar la aplicación de todos los acuerdos convenidos entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN.

Desde el fin de la guerra civil, se desarrollaron en El Salvador elecciones libres monitoreadas por la ONU y otros organismos internacionales, donde se destaca la participación del FMLN dentro de la estructura de partidos políticos. En 1999 se inicia el período de gobierno de ARENA, fuerza política conservadora



a quien inclusive se la llega asociar con el accionar de los escuadrones de la muerte. Pero en 2009 se produce un cambio político, ya que accede al Gobierno representantes ligados al FMLN, debiendo enfrentar fuertes desafíos vinculados a los altos índices de violencia, pobreza y polarización social.

ACUERDOS DE CHAPULTEPEC 16 DE ENERO DE 1992

ferendo comenciario, y e ente existeri, y e ente existeri, y e ente existeri, y e entere entre entre tien al conviene à Man converte entre hom converte

[...]

La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de integridad del territorio, en los términos del régimen definido para ella por la Constitución y las leyes. El cumplimiento de la misma es inseparable de los valores democráticos y del estricto respeto a la Constitución en todas sus partes.

[...]

La doctrina de la Fuerza Armada se asienta en la distinción entre los conceptos de seguridad y de defensa. La defensa nacional, a cargo de la Fuerza Armada, tiene por objeto la garantía de la soberanía e integridad territorial frente a una amenaza militar externa. La seguridad, aun cuando comprende esa noción es un concepto más amplio, fundado en el irrestricto respeto de los derechos individuales y sociales de la persona. En ella quedan comprendidos, además de la defensa nacional,

aspectos económicos, políticos y sociales que exceden el ámbito de la competencia constitucional de la Fuerza Armada, y cuya atención es responsabilidad de otros sectores de la sociedad y del Estado.

El mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, del orden y de la seguridad pública está fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada como institución responsable de la defensa nacional. En ese ámbito, el eventual papel de la Fuerza Armada es del todo excepcional, cuando se hayan agotado los medios ordinarios para ello, en los términos establecidos por la reforma constitucional aprobada en abril de 1991.

[...]

Se acuerda un proceso de depuración de la Fuerza Armada, en el marco del proceso de paz y de cara al supremo objetivo de la reconciliación nacional, en base a la evaluación de todos sus miembros por una comisión *ad hoc.*

[...]

Se reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las Partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio, que las Partes igualmente reconocen, de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley.

[...]

Se reconoce el principio de que todo cuerpo o grupo paramilitar debe



ser proscrito dentro del Estado de derecho.

[...]

La reunificación de la sociedad salvadoreña en democracia, tiene como uno de sus requisitos el desarrollo económico y social sostenido del país. Al mismo tiempo, la reunificación de la sociedad salvadoreña y un creciente grado de cohesión social son elementos indispensables para acceder el desarrollo. Por eso, entre el conjunto de acuerdos requeridos para terminar definitivamente el conflicto armado en El Salvador, se

incluye una plataforma mínima de compromisos tendientes a facilitar el desarrollo en beneficio de todos los estratos de la población.

De conformidad con el Acuerdo de Nueva York, los temas objeto de este instrumento son: el problema agrario, créditos para el sector agropecuario, medidas que son necesarias para aliviar el costo social de los programas de ajuste estructural, formas convenientes para la cooperación externa directa destinada a impulsar proyectos de asistencia y desarrollo de las

comunidades, la creación de un Foro para la Concertación Económica y el Plan de Reconstrucción Nacional. Además, si bien la filosofía u orientación general de la política económica del Gobierno, que el Frente no necesariamente comparte, no son objeto de este Acuerdo, ambas partes coinciden en la necesidad de ofrecer algunas orientaciones básicas que permitan generar la estabilidad social necesaria en el período de transición, consolidar la paz y avanzar hacia la reunificación de la sociedad salvadoreña.

GUATEMALA

La etapa de formación del Estado oligárquico guatemalteco estuvo bajo dominio de la élite cafetalera asociada al capital extranjero, entre los que se destacó la empresa norteamericana United Fruit Company. La consolidación de la estructura social agraria del monocultivo conllevó la permanencia de los mecanismos de exclusión del campesinado heredados de la colonia. La denominada «Revolución de Octubre» surgió para intentar poner fin a tales exclusiones.

El derrocamiento del gobierno de facto del general Federico Ponce Vaides en 1944 inició una década de apertura política y ampliación de la base social que sostenía el poder. Se constituyó una Junta Revolucionaria que llamó a elecciones libres para constituir un gobierno democrático. Durante los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, las mayorías trabajadoras, indígenas y campesinas obtuvieron el derecho a sufragio; se permitió la libre conformación de partidos, organizaciones sociales y sindicales; se promulgó la legislación laboral y se descentralizó el poder al dar autonomía a los municipios. Además, la libertad de prensa posibilitó un debate como nunca había conocido el país.

Fue Árbenz en 1952, quien llevó adelante la Ley de Reforma Agraria por la cual se confiscaron las tierras de la United Fruit Company, el mayor latifundista del país. Fueron cedidas a familias campesinas con el propósito de crear medianos productores para el abastecimiento del mercado interno. Esto resultó intolerable para los propietarios del enclave norteamericano que en 1954, con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y la élite económica local, promovió el golpe de Estado contra Árbenz, dando inicio a una etapa represiva que se prolongó durante 36 años, y que en cierto momento derivó en terrorismo de Estado.

Estados Unidos impulsó la intervención con la complicidad de la élite y los partidos políticos locales. Estos sectores acusaban a Moscú de apoyar al Partido





Guatemalteco de los Trabajadores (PGT), miembros de la alianza del Frente Democrático Nacional que sustentaba al Gobierno. Estados Unidos contaba con la activa participación de su embajador John Emil Peurifoy y del secretario de Estado John Foster Dulles (que además era abogado de la United Fruit) quienes, apoyados también por Iglesia católica y otros organismos locales, se encargaron de promover el golpe de Estado, contando para ello con la colaboración de países vecinos como Honduras y Nicaragua, desde donde se inició la invasión terrestre y despegaron los aviones que bombardearon algunos sitios del país.

Tras el triunfo de la contrarrevolución, avanzaron las medidas anticomunistas del coronel Carlos Alberto Castillo Armas, el nuevo presidente *de facto*. Con la creación en julio de 1954 del Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo y la Ley Preventiva Penal contra el Comunismo se dio inicio a la persecución política; se derogó la Constitución de 1945, el Código de Trabajo y la reforma agraria; se proscribió el Frente Democrático Nacional y se disolvieron la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), y la Confederación Nacional Campesina (CNC), entre otras.

- 1. Portada del 10 de septiembre de 1954.
- 2. Carlos Alberto Castillo Armas.







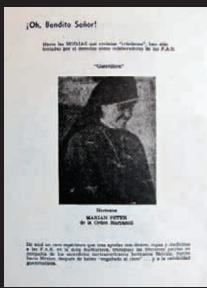


- 3. Procesión del Cristo Negro organizada por el arzobispo Rossell el 3 de julio de 1954, cuando llegó Castillo Armas.
- 4. Discurso de Carlos Castillo Armas.

El triunfo de la Revolución cubana en 1959 recrudeció el escenario de Guerra Fría en América Latina. Dicho contexto dio solidez a la dictadura militar cuando el general José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes, elegido presidente en 1958, cortó relaciones diplomáticas con Cuba y aceptó el apoyo estadounidense. El 13 de noviembre de 1960, se produjo una rebelión militar protagonizada por un grupo de oficiales. Luego de ser severamente reprimidos se refugiaron en El Salvador y Honduras, y fundaron el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) que dio inicio a la lucha armada.

En diciembre de 1962 se unieron el Movimiento 12 de Abril, formado por estudiantes y universitarios, y el Movimiento 20 de Octubre para conformar las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

MATERIAL ELABORADO POR EL MOVIMIENTO ACCIÓN NACIONALISTA ORGANIZADO CONTRA LAS FAR













MATERIAL ELABORADO POR EL MOVIMIENTO ACCIÓN NACIONALISTA ORGANIZADO CONTRA LAS FAR











Arana Osorio.



Mario Sandoval Alarcón, presidente Carlos Manuel Arana Osorio y el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Herrera.

En marzo de 1963 un golpe militar derrocó al gobierno ydigorista. El coronel Enrique Peralta Azurdia tomó el mando dando inicio a la etapa signada por la doctrina de seguridad nacional. En 1966, el coronel Enrique Peralta Azurdia convocó a elecciones, en las que fue electo presidente Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), quien pactó con los militares y dio inicio nuevamente a la represión. Las Fuerzas Armadas continuaron dominando la escena.

El general Carlos Arana Osorio (1970-1974) pasó del conocido «terror abierto» al «terror clandestino». Así, comenzaron a surgir escuadrones armados anticomunistas relacionados con el Ejército y con partidos de derecha. Se acentuó la intervención y la ayuda de Estados Unidos mediante entrenamiento militar, armas, y asistencia financiera. Como en Guatemala se había logrado compaginar la prédica comunista con los reclamos indígenas, tras la pretensión de erradicar al primero de los «enemigos» la represión terminó por convertirse en etnocidio. Se masacraron comunidades indígenas completas, se ejecutaron y desaparecieron a miles de mayas y ladinos con el consenso de ciertos sectores de la población.

Durante el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978), el movimiento popular comenzó a ganar mayor espacio político. Se celebraron los primeros seminarios indígenas de la Coordinadora Indígena y Campesina (CONIC). En 1974 se creó el Comité de Unidad Campesina (CUC) y en 1975 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Después de 1976, el EGP centró su atención en el campo, y logró unificar las acciones de las bases campesinas e indígenas a la lucha guerrillera. La respuesta estatal cobró nuevo impulso a partir de 1978, cuando asumió el general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), quien retomó el uso de las organizaciones armadas irregulares anticomunistas, las cuales pasarían de la clandestinidad a su institucionalización.









- 1- Miles de indígenas y campesinos guatemaltecos huyeron hacia los campamentos de Chiapas, Tabasco y Campeche. 2- Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). 3- Comité de Unidad Campesina, ca. 1978.

LA GUERRA CIVIL EN IMÁGENES













Guerrilleras del EGP en la selva de Ixcán.



En la década de los 80, el general Efraín Ríos Montt (1982-1983) presentó la lucha contra el hambre como parte de la lucha contra el comunismo. Llevó adelante el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que, junto a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y los paramilitares, perpetraron el etnocidio en el país.

José Efraín Ríos Montt.



En 1983 los principales grupos revolucionarios: el EGP y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), formarían la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El general Oscar Mejía Víctores tomó el poder luego de un golpe a Ríos Montt. La dictadura estaba ya deslegitimada en el plano internacional por las reiteradas violaciones a los derechos humanos, a lo que se sumó la ruptura con los sectores empresariales.





Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).



Fotografía de Jean Marie Simon, tomada en el área Ixil durante los años ochenta.

En 1984 se inició un proceso electoral bajo control militar que fue parte de la estrategia contrainsurgente que Estados Unidos había impulsado para Guatemala y América Central. Se eligió una Asamblea Constituyente para crear una nueva Constitución y se llamó a las elecciones generales en 1985 (en las que ganó el candidato de la Democracia Cristiana, Vinicio Cerezo) hecho que inició el proceso democrático hacia la paz.

Para las elecciones de 1990, se fundó el Movimiento de Acción Solidaria (MAS) que obtuvo el triunfo con el candidato Jorge Serrano Elías. En 1990 se firmó el Acuerdo de Oslo entre representantes de la URNG y la Comisión Nacional de Reconciliación. La negociación del acuerdo de paz duró nueve años, cuatro gobiernos y tres comisiones negociadoras. En 1994 se firmó el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos, con verificación internacional de la ONU por la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA). En 1996 se dio por finalizado el conflicto que duró treinta y seis años, con la firma de los Acuerdos de Paz.



Los puntos más importantes fueron la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, la economía agraria, el fortalecimiento de las instituciones del poder civil y la delimitación de las funciones de las Fuerzas Armadas. Las negociaciones se dieron en el seno de la Asamblea de la Sociedad Civil creada en 1994, conformada por partidos políticos, la Iglesia, organismos de derechos humanos, los sindicatos, organizaciones campesinas y el «Movimiento Maya», víctima de uno de los mayores crímenes de lesa humanidad cometidos por las sucesivas dictaduras que azotaron a este país centroamericano.

La lucha por la memoria y la justicia.



ACUERDO GLOBAL SOBRE DERECHOS HUMANOS MÉXICO, D.F., 29 DE MARZO DE 1994

mas solumne of the extension of the extension is the extension is the extension is the extension in the extension in the extension is the extension in the extension in the extension in the extension is the extension in the extension in the extension in the extension is the extension in the exte

Considerando la voluntad del Gobierno de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca para que el acuerdo de derechos humanos y de verificación internacional se aplique en consonancia con las citadas disposiciones constitucionales y tratados internacionales.

[...]

El Gobierno de la República de Guatemala reafirma su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar.

[...]

Las Partes coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la impunidad. El Gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden, orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos. El Gobierno de la República de Guatemala promoverá ante el organismo legislativo, las modificaciones legales necesarias en el Código Penal para la tipificación y sanción, como delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Asimismo, el Gobierno promoverá en la comunidad internacional el reconocimiento de las desapariciones forzadas o involuntarias y de las ejecuciones sumarias o

extrajudiciales como delitos de lesa humanidad. Ningún fuero especial o jurisdicción privativa puede escudar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.

[...]

Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos [...]

El Gobierno de la República de Guatemala reitera el compromiso de continuar la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Asimismo, expresa la necesidad de continuar adoptando e implementando medidas eficaces para regular en forma precisa la tenencia, portación y uso de armas de fuego por particulares de conformidad con la ley. Las Partes reconocen que es un deber humanitario resarcir y/o

asistir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Dicho resarcimiento y/o asistencia se harán efectivos a través de medidas y programas gubernamentales, de carácter civil y socioeconómico, dirigidos en forma prioritaria a quienes más lo requieran, dada su condición económica y social.

I neoliberalismo no tuvo su origen en América Latina. Ludwig Von Mises, Lionel Robbins, Friedrich Hayek, Walter Lippmann y Milton Friedman, fueron los economistas europeos y norteamericanos que expusieron sus ideas simultáneamente al desarrollo de la batalla occidental contra el comunismo en el marco de la Guerra Fría. De esta forma, el neoliberalismo se inició a comienzos de la década de 1970 como consecuencia de la crisis del modelo keynesiano que se había implementado en el mundo desde 1930. A dicho escenario se sumó la recesión de la economía mundial que estalló con la crisis del petróleo desatada en 1973. Esta crisis se produjo a principios de la década del 70, a partir de la decisión de los principales países exportadores de aumentar el precio del crudo, generando un proceso inflacionario mundial que repercutió negativamente en la actividad económica. De esta forma, la crítica al Estado de bienestar surgida en los países europeos se extendió a todos los países del mundo. En América Latina, coincidió con el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en Chile en 1973, y dio comienzo a la implementación progresiva de este proyecto económico en toda la región de la mano de los sucesivos golpes de Estado y la instalación de las diversas dictaduras.

A pesar de que las trayectorias nacionales fueran diversas, el modelo económico neoliberal se expandió en América Latina de forma generalizada e implicó la reformulación de las relaciones sociales capitalistas nacionales y globales, como también una reinserción de la región en la economía mundial.

Las reformas neoliberales tuvieron algunos pilares fundamentales. Algunos de ellos fueron: el ajuste económico a partir de la reducción del gasto público, la reducción de la intervención estatal, la liberalización de los mercados a partir de su desregulación para dar preeminencia al capital privado y al establecimiento de la flexibilidad laboral. Además, las políticas de ajuste estructural incluyeron políticas antiinflacionarias, privatizaciones, liberalización del sistema financiero y apertura de las fronteras comerciales.

EL PROYECTO NEOLIBERAL EN AMÉRICA LATINA



LA FE EN EL PROGRESO INDIVIDUAL

La Sociedad de Mont Pélerin, fundada en 1947 por Friedrich Hayek, representó a los intelectuales que creyeron fervientemente en la libertad individual como fuente del crecimiento económico. Su posición consideraba que la intervención estatal generaba distorsión de la competencia y destruía las posibilidades naturales a partir del esfuerzo individual. Este fue el principal fundamento de la lucha del neoliberalismo contra el poder de los sindicatos y la intervención del sector público. Se suponía que el poder sindical era indeseable, dado que modificaba la tasa natural de desempleo de toda economía que conformaba un ejército industrial de reserva que flexibilizaba los vínculos laborales, disminuía el valor del salario y garantizaba una mayor rentabilidad del capital.

EL CONSENSO DE WASHINGTON Y EL IMPULSO DEL NEOLIBERALISMO

Con la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin del socialismo real, el capitalismo vencedor se impuso también en la reconstrucción de Europa del Este. La llegada de Margaret Thatcher al cargo de primer ministro del Gobierno inglés en 1979 y la asunción de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos en 1981 dieron un impulso mayor a las medidas políticas de reforma estructural neoliberal.

Por su parte, el complejo proceso producto de los cambios y del desarrollo de las tecnologías de comunicación -definido por muchos analistas como globalización y por otros como mundialización – generó un impacto significativo en la economía internacional. La llamada «financiarización» de la economía fue un proceso global que se produjo a partir del aumento de la liquidez mundial producida por la circulación de los «petrodólares», y por la emisión monetaria norteamericana sin límites que implicó un mayor aumento de la inversión especulativa que la productiva. Por lo tanto, el sector más rentable de la economía era el rentístico-financiero. Estos cambios fueron también influenciados por las transformaciones en el ámbito de la producción. La finalización de la producción en masa dio paso a un proceso flexible que direccionó la producción en función de la demanda del mercado, modificando la organización de la cadena productiva por la necesidad de la velocidad de respuesta para hacer frente a la competencia comercial. Los mentores del neoliberalismo identificaron como enemiga de la productividad a la fuerza del movimiento obrero, por lo que, a fin de elevar las tasas de ganancias empresarias, profesaron la necesidad de revertir esta situación desequilibrando nuevamente la balanza a favor del sector patronal. Cualquier intervención al marco eminentemente teórico de la ley de la oferta y la demanda debía ser suprimida. En ese contexto, las potencias occidentales encontraron en el neoliberalismo la vía para reproducir, como en el pasado, la relación de dependencia con el sur del hemisferio.

En este marco se desarrolló el Consenso de Washington, que consistió en la formulación de una serie de medidas económicas consideradas deseables por los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la hora de recomendar políticas económicas que generaran condiciones de posibilidad para el pago de los préstamos que ellos mismos otorgaron a los distintos Estados. El Consenso de Washington, elaborado por John Williamson en 1989,

A (1973-1999)

presentó diez puntos conocidos como «recetas neoliberales» que debían ser aplicados por los países que contrajeran deuda: disciplina presupuestaria para evitar el déficit fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto en función de las áreas estratégicas del desarrollo, reforma impositiva, liberalización financiera, tipo de cambio competitivo, disminución de las barreras aduaneras, ingreso irrestricto de inversión extranjera directa, privatizaciones, desregulación y el aseguramiento de los derechos de propiedad. Por su parte, la flexibilización del mercado laboral y, por lo tanto, de la relación entre el mundo del trabajo y el empresarial, en detrimento del primero y a favor del segundo, formó parte de las directivas neoliberales.



Margaret Thatcher junto al presidente Ronald Reagan en Washington, 1987.

EL MITO DEL ESTADO MÍNIMO

El discurso neoliberal planteó un esfuerzo de los Estados por retirarse de sus funciones regulatorias, dejando al mercado la distribución de los recursos. Este postulado se apoyó en la demonización del Estado, que supuestamente había tenido un crecimiento desmesurado desde 1940 y que no había mejorado su funcionamiento, sino que resultó un ente torpe, débil, incompetente y costoso. Sin embargo, las medidas implementadas durante las décadas neoliberales presentaron una intervención distinta, en favor del aumento de la rentabilidad del capital y un menor gasto público en materia social. La presencia del Estado continuó, solo que su direccionamiento fue diferente. Este decálogo de medidas fue el dogma de los gobiernos a la hora de implementar las reformas estructurales tal como se vio en su adopción del neoliberalismo en América Latina. Sin embargo, las políticas que se observaron en los diferentes países tuvieron matices distintos en función de las condiciones sociales, el momento político, las posiciones partidarias, la crisis interna y los condicionamientos externos, aun manteniendo como primario el objetivo de la reducción inflacionaria.





Augusto Pinochet y Henry Kissinger en 1976.

LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES: LA DEUDA COMO INSTRUMENTO DISCIPLINARIO

Un amplio grupo de intelectuales chilenos se formaron en la Escuela de Chicago, con profesores del equipo de economistas de Milton Friedman, quienes desde 1955 habían desarrollado sus actividades en cooperación con la Universidad Católica de Chile. Este grupo de académicos fue conocido como los «Chicago Boys». Fueron los escritores del texto sobre política económica *El ladrillo*, documento publicado en 1973 que fundamentó el programa del gobierno de Augusto Pinochet, pionero en la adopción del neoliberalismo en Latinoamérica. Sus medidas fueron implementadas con rigor, violencia y sangre, violando los derechos fundamentales de los ciudadanos del país.

Lo mismo puede decirse que sucedió en las dictaduras de Bolivia y Argentina, en las cuales se impulsaron medidas de ajuste económico sobre la base de la represión y el disciplinamiento social. En Bolivia, la dictadura del general Hugo Bánzer Suárez entre 1971 y 1978 dejó la deuda externa más grande en la historia de dicho país. El golpe de Estado de 1976 en Argentina impuso a partir de la represión una reconversión de la estructura económica del país. El denominado Proceso de Reorganización Nacional, con Martínez de Hoz a cargo del Ministerio de Economía, construyó un modelo económico de crecimiento hacia afuera, basado en la primacía del sector agroexportador, de la actividad financiera local e internacional y la privatización de los sectores estratégicos de la economía.



Videla tomándole juramento a José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, 1976, Archivo del diario *Clarín*.



Apuesta al dólar, 1980, en el contexto de la aplicación de «La Tablita» de Martínez de Hoz. Fotografía: Daniel Rodríguez, diario *Clarín*.

En otras palabras, el endeudamiento del conjunto de la región durante esta etapa se debió a la combinación de dos factores: la alta liquidez de la banca internacional por los depósitos de los «petrodólares» en los bancos norteamericanos y a la avidez de la clase dominante nativa de hacer negocios financieros a través de la evasión de dinero al exterior. El endeudamiento fue resultado de la imposición externa (por la gran liquidez de los bancos) y del deseo de los grupos financieros locales de especular con las divisas, más que con una necesidad real interna de capitales por parte del país.

En el caso argentino, la Ley de Entidades Financieras en 1977 eliminó la regulación del mercado financiero, generando un crecimiento aún mayor de la deuda externa por el vuelco en favor de la especulación financiera. La disminución de los aranceles aduaneros en 1977 generó la apertura de las barreras comerciales, por lo que el aparato productivo nacional se vio afectado significativamente. El factor del tipo de cambio sobrevaluado también impactó en el intercambio comercial y en la composición del salario de la mano de obra. El proyecto desarrollado se basó en el incremento de la deuda externa, cuyo saldo fue la extranjerización económica y la fuerte dependencia de las agencias internacionales de crédito que condicionaron el actuar de los gobiernos siguientes en materia económica. De esta forma, en 1976 se





Fernando Collor de Melo.

recurrió al crédito externo sin que se lo precisara, hecho que luego pasó a convertirse en una necesidad intrínseca al funcionamiento del modelo del gobierno dictatorial.

El caso brasilero presentó algunas características particulares por haber tenido una dictadura militar que planteó un esquema de desarrollismo económico. El modelo incluyó un avance significativo en materia industrial dentro de sus medidas centrales, hecho que colocó a Brasil dentro de los países más importantes en la escala económica mundial. Este punto fue sumamente importante, ya que el avance del neoliberalismo se encontró con mayores resistencias en este país a la hora de implementar el ajuste estructural, la forma de adopción fue diferente y mucho más leve que en el resto de la región.

El neoliberalismo no llegó a Brasil con la dictadura militar, sino con el gobierno de Fernando Collor de Melo, ganador en los comicios de 1989 por el Partido de la Reconstrucción Nacional. Este implementó una serie de medidas de ajuste para frenar la grave crisis económica que sufría el país: confiscó los depósitos de los ahorristas, congeló salarios, precios y tarifas, cambió la moneda nacional y privatizó empresas. El presidente no pudo frenar la inflación ni el aumento del endeudamiento externo. Luego de la destitución de Collor de Melo por juicio político, asumió Fernando Enrique Cardoso, quien adoptó un plan de estabilización económica que implicaba la implementación de medidas que seguían las recetas dictadas por el FMI, financiando su plan con grandes préstamos internacionales. Los resultados luego de ocho años de ajuste y reformas estructurales fueron una gran deuda externa, crisis energética, desempleo, devaluación y crisis social.



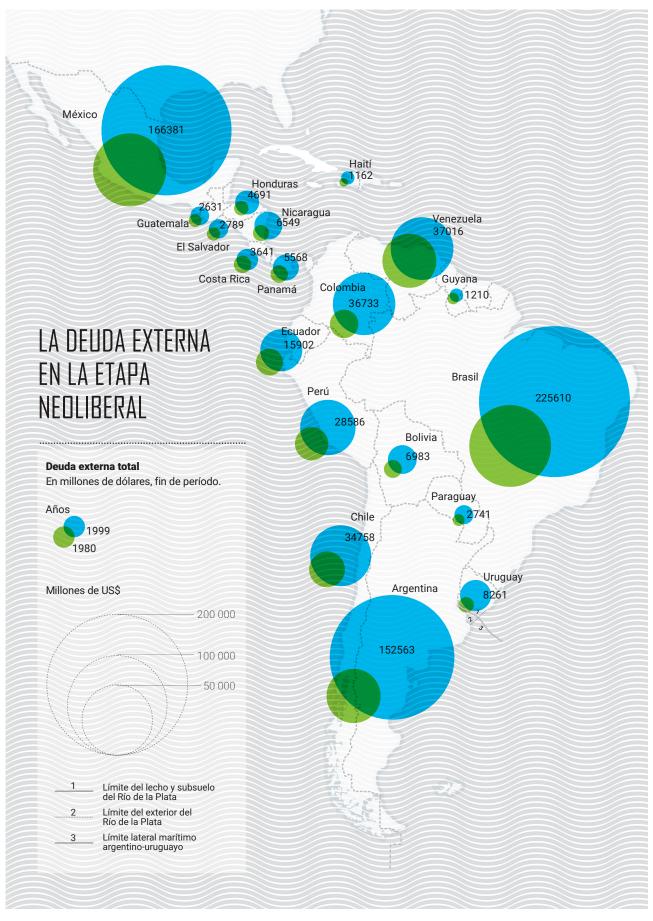
Los economistas neoliberales Sergio de la Cuadra, Sergio de Castro, Pablo Barahona y Álvaro Bardón en una reunión durante 1982.

DEUDA EXTERNA TOTAL

(Millones de dólares corrientes, fin de período)

País / Año	1980	1999	2013
Argentina	27162	152563	141076
Bolivia	2340	6983	7756
Brasil	64000	225610	308625
Chile	11207	34758	130724
Colombia	6805	36733	91923
Costa Rica	2209	3641	17654
Cuba		11078	
Ecuador	5997	15902	18672
El Salvador	1176	2789	13291
Guatemala	1053	2631	17493
Guyana	834	1210	1246
Haití	348	1162	1474
Honduras	1388	4691	6642
México	50700	166381	261039
Nicaragua	1825	6549	4724
Panamá	2211	5568	12231
Paraguay	861	2741	5131
Perú	9595	28586	60823
Suriname			737
Uruguay	1660	8261	22862
Venezuela	26963	37016	110485

(CEPAL: 2014)



GUAICAIPURO CUATÉMOC COBRA LA DEUDA A EUROPA POR LUIS BRITTO GARCÍA

Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuautémoc, he venido a encontrar a los que celebran el Encuentro. Aquí pues yo, descendiente de quienes poblaron América hace cuarenta mil años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace quinientos. Aquí pues nos encontramos todos: sabemos lo que somos, y es bastante. Nunca tendremos otra cosa.

El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas a quienes nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Ya los voy descubriendo.

También yo puedo reclamar pago. También puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solo entre el año de 1503 y el de 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque es pensar que los hermanos cristianos faltan a su séptimo mandamiento. ¿Expoliación? Guárdeme Tonantzin de figurarme que los europeos, igual que Caín, matan y después niegan la sangre del hermano. ¿Genocidio? Eso sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al Encuentro de Destruición de las Indias, o a ultrosos como el doctor Arturo Uslar Pietri, quienes afirman que el arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a esa inundación de metales preciosos.

No: esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios préstamos amigables de América para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería presuponer crímenes de guerra,

lo cual daría derecho, no solo a exigir devolución inmediata, sino a indemnización por daños y perjuicios. Yo, Guaicaipuro Cuautémoc, prefiero creer en la menos ofensiva de las hipótesis. Tan fabulosas exportaciones de capital no fueron más que el inicio de un Plan Marshalltzuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los musulmanes, cultores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización.

Por ello, al acercamos al Quinto Centenario del empréstito, podemos preguntarnos: ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable, o por lo menos productivo de los recursos tan generosamente adelantados por nuestro Fondo Indoamericano Internacional?

Deploramos decir que no. En lo estratégico, los dilapidaron en batallas de Lepanto, Armadas Invencibles, Terceros Reichs y otras formas de

LOS DISTINTOS PROCESOS NEOLIBERALES EN AMÉRICA LATINA

El panorama latinoamericano no resultaba auspicioso. La recesión internacional profundizó los problemas económicos y produjo la llamada crisis de la deuda de 1982. En ese momento, algunos de los países latinoamericanos no pudieron cumplir con los pagos de los préstamos contraídos con los acreedores internacionales. La falta de liquidez dado el aumento exponencial de la tasa de interés internacional, sumada a la caída de los precios de las exportaciones por la recesión mundial y el aumento de precios por la inflación en los costos de los insumos, generaron una combinación insuperable para los Estados latinoamericanos. El Gobierno mexicano en agosto de 1982, expresó que no era capaz de cumplir con sus obligaciones financieras. Casi todos los demás países de la región se encontraron en las mismas condiciones, debiendo los organismos multilaterales de



exterminio mutuo, sin más resultado que acabar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como Panamá (pero sin canal). En lo financiero, han sido incapaces —después de una moratoria de 500 años— tanto de cancelar capital o intereses, como de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta el tercer mundo.

Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman según la cual una economía subsidiada jamás podrá funcionar. Y nos obliga a reclamarles -por su propio bien- el pago del capital e intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a los hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas flotantes de interés de un 20 % y hasta un 30 % que ellos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo de un 10 % anual acumulado durante los últimos trescientos años.

Sobre esta base, y aplicando la europea fórmula del interés compuesto, informamos a los descubridores que solo nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de oro y otra de dieciséis millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de trescientos. Es decir: un número para cuya expresión total serían necesarias más de trescientas cifras, y que supera ampliamente el peso de la tierra. Muy pesadas son estas moles de oro y de plata.

¿Cuánto pesarían, calculadas en sangre? ¿Cuánto pesa la sangre de ochenta millones de víctimas? ¿Cuánto pesa el olvido de diez millares de culturas? ¿Cuánto pesa el silencio de veinte millares de lenguas?

Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar este módico interés, sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y/o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos. Pero sí exigimos la inmediata firma de una Carta de Intención que discipline a los pueblos deudores del Viejo Continente, y los obligue a cumplirnos sus compromisos mediante una pronta Privatización o Reconversión de Europa, que les permita entregárnosla entera como primer pago de su deuda histórica.

Dicen los pesimistas del Viejo Mundo que su civilización está en una bancarrota que le impide cumplir sus compromisos financieros o morales. En tal caso, nos contentaríamos con que nos pagaran entregándonos la bala con la que mataron al poeta. Pero no podrán: porque esa bala, es el corazón de Europa.

crédito renegociar los préstamos otorgados a través de la imposición condiciones aún más duras para todos.

Así, el neoliberalismo como corriente económica y política, se impuso en América Latina siguiendo los postulados determinados por los países de Europa, por Estados Unidos y principalmente por los organismos multilaterales de crédito tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La llegada al poder del gobierno de facto de Pinochet inauguró (primero en Chile y luego en toda la región), la aplicación de medidas neoliberales cuyo principal objetivo fue socavar los derechos sociales y políticos adquiridos por la clase trabajadora en las décadas precedentes, y defendido por el movimiento obrero organizado. Sin embargo, su instrumentación fue heterogénea en cada uno de los países donde el mercado le ganó la pulseada al Estado.

La crisis de deuda mexicana dio pie a los cambios económicos liberalizadores en manos del PRI con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari iniciado en 1988.



Estos fueron posibles de acuerdo con ciertos factores institucionales como las facultades discrecionales del jefe del Ejecutivo, el vasto sistema de redes clientelares y estructurales corporativas, el control gubernamental sobre el proceso electoral y la fortaleza histórica de las instituciones financieras. Las medidas adoptadas fueron, entre otras, la apertura comercial, la privatización, la desregulación, la estabilidad monetaria y el control de la inflación y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).

Carlos Salinas de Gortari junto a Bush.



En el caso boliviano, luego de atravesar un período de inestabilidad política durante el retorno a la democracia, Víctor Paz Estenssoro asumió la presidencia en 1985 e inauguró, en manos del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), la Nueva Política Económica: un programa de ajuste que consistió en la reducción de los subsidios, el cierre de empresas estatales, la desregulación del control de precios y el tipo de cambio para controlar la inflación. El plan tuvo impacto económico y también político-social, ya que inició una cadena de luchas muy significativas en contra de las reformas como la Marcha por la Vida de 1986 contra el cierre de las minas, o el paro general de la Central Obrera Boliviana (COB). Jaime Paz Zamora, presidente entre 1989 y 1993, intentó profundizar el modelo neoliberal; sin embargo, las medidas fueron adoptadas por sus sucesores en el cargo, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y el gobierno del exdictador Hugo Banzer Suárez (1997-2001). Las privatizaciones de las empresas estatales —Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos-YPFB—, las telecomunicaciones con la privatización de ENTEL, o la reforma del sistema de pensiones con la ley de capitalización que creó el Fondo de Capitalización Colectiva, despidos o el desmantelamiento del sector minero estatal, fueron las políticas neoliberales que se aplicaron en el país boliviano. Hugo Banzer Suárez, luego elegido en elecciones democráticas, continuó con las privatizaciones y con la eliminación de las plantaciones de coca, por lo que encontró creciente oposición.

En el caso argentino, la asunción de Raúl Alfonsín en 1983 debió enfrentar un panorama económico de gran complejidad. La elevada deuda externa fue uno de los principales desafíos. Su ministro de Economía (primero de varios), Bernardo Grinspun, presentaba posicionamientos críticos al neoliberalismo y se propuso impulsar el crecimiento de la pequeña y mediana industria. Sin embargo, las presiones internas y externas y las relaciones conflictivas con el FMI terminan provocando su desplazamiento y la aplicación de una política ortodoxa, sin poder controlar la inflación ni asumir el pago de la deuda externa, que entró en cesación de pagos en 1988. En dicho año, el Banco Mundial dejó de otorgarle préstamos al país y, en consecuencia, se desató la hiperinflación más grande de la historia argentina, debiendo el presidente dejar el cargo meses antes de la finalización oficial de su mandato.



El vicepresidente Julio Garrett, el presidente Víctor Paz Estenssoro y el presidente del Senado Gonzalo Sánchez de Lozada.



Gonzalo Sánchez de Lozada con Bush.



El acto de Alfonsín, 1983. Fotografía: Carlos Roberto Bairo, diario *Clarín*.





En el balcón del Cabildo, 1983 (detalle). Fotografía: Daniel Rodríguez, diario *Clarín*.







Desfile de acusados, 1985. Fotografía: Eduardo Longoni, diario *Clarín*. El gobierno de Alfonsín impulsó el juicio a los responsables de la violación de los derechos humanos luego de la presentación del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en 1983, a fin de recabar información sobre la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. Las condenas quedaron sin efecto luego de las denominadas «Leyes de impunidad» (Ley de Obediencia Debida, Ley de Punto Final), indultos sancionados entre 1987 y 1990 bajo los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.



Carlos Menem asumió su gobierno en el marco de la crisis de deuda. Luego de afrontar una nueva hiperinflación en 1991, y referirse a la necesidad de realizar «cirugía mayor sin anestesia», lanzó el Plan de Convertibilidad que fijaba el valor del peso argentino como el de un dólar norteamericano. La medida fue acompañada por la apertura al comercio internacional, la desregulación financiera, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público disminuyendo el número de empleados estatales a un tercio y redireccionando el presupuesto nacional. Luego, durante el segundo mandato, se lanzó la reforma del Estado que profundizaba las medidas en relación con la gestión pública, destinada a favorecer la lógica del mercado: la descentralización administrativa; la desregulación de las tasas de interés y la apertura de las fronteras comerciales.

Carlos Menem y Domingo Cavallo durante su primera gestión, 1991, archivo *Clarín*.



En Uruguay, la apertura democrática fue en 1985, cuando ganó las elecciones Julio María Sanguinetti por el Partido Colorado. El presidente encontró una situación de alto desempleo, deuda externa y la caída del salario real. Sin embargo, fue Luis Alberto Lacalle en 1990, electo por el Partido Nacional, quien llevó a cabo el modelo del Fondo Monetario Internacional. La implementación de las reformas estructurales fue un proceso gradual en Uruguay, el sistema político generó ciertas trabas institucionales que, en el marco de la falta de las mayorías necesarias para aprobar las propuestas, no permitieron realizar los cambios económicos de la forma deseada.

Primero, Sanguinetti se encontró con obstáculos para llevar a cabo algunas privatizaciones, aunque sí se encargó de reducir el gasto público. Luego

Luis Alberto Lacalle (1990-1995) quiso privatizar empresas públicas, disminuir el gasto público, reducir el tamaño del Estado, abrir las barreras comerciales y detener la inflación en el corto plazo. Su plan de ajuste encontró gran oposición partidaria y social ya que, por ejemplo, la ley de empresas públicas que privatizaba la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y otras empresas estatales, fue rechazada por referéndum. Así, el caso uruguayo no constituyó una reforma profunda en términos estructurales dado que a partir de mecanismos institucionales en manos de la oposición, se frenaron algunas de las políticas neoliberales.

- 1. Luis Alberto Lacalle.
- 2. Julio María Sanguinetti.



Sin embargo, el presidente sucesor sería nuevamente Julio María Sanguinetti, quien formó un Gobierno de coalición con el Partido Nacional y reformó la Constitución, el sistema judicial, la administración estatal con la reducción de los empleados públicos y el sistema de previsión social con la creación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

En Perú, la crisis económica, la inflación, la corrupción y el enfrentamiento con la guerrilla no pudieron ser apaciguados durante el gobierno de Alan García (1985-1990), quien, a pesar de intentar aplicar un programa de gobierno con más puntos en común con el keynesianismo, no pudo evitar finalizar su mandato con una profunda inestabilidad y crisis económica y social. Las recomendaciones del Consenso de Washington fueron adoptadas por Alberto Fujimori, presidente elegido en 1990, cuyo mandato fue controvertido por la forma autoritaria de su gobierno.

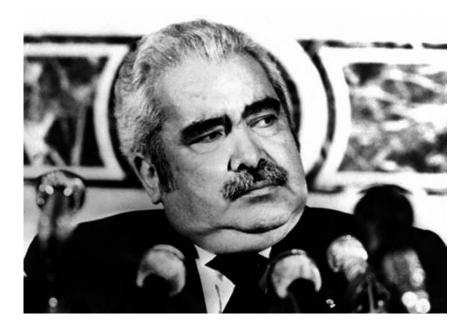
Ecuador se caracterizó por la inestabilidad política: entre 1976 y 2007, período durante el cual hubo trece presidentes y solo tres de ellos finalizaron su mandato. Uno de ellos fue Sixto Durán-Ballén, quien gobernó el país entre 1992 y 1996, negoció los empréstitos con el Banco Mundial e implementó las condicionalidades impuestas a cambio del crédito. Estas consistieron en un fuerte shock neoliberal, con privatizaciones, reducción de empleo público y flexibilización laboral, liberalización del comercio y entrada de inversiones extranjeras.

El caso venezolano muestra el advenimiento del *shock* neoliberal de una manera muy particular. A pesar del importante aumento del valor del petróleo en la década del setenta, el país debió enfrentar una fuerte devaluación en 1983. El presidente Luis Herrera Campins decidió solicitar un crédito al FMI, por el cual debió adoptar medidas liberalizadoras del mercado con las que logró un rápido crecimiento económico. El impacto del *shock* generó el primer estallido social



el 27 de febrero de 1989, primera oposición generalizada en contra del modelo neoliberal. Esta protesta es considerada un hito en la historia del país: la creciente oposición al Gobierno de Carlos Andrés Pérez dio lugar al pronunciamiento encabezado en 1992 por Hugo Chávez Frías, posteriormente elegido como presidente en elecciones democráticas hasta su muerte en 2013.

Luis Herrera Campins.



En el caso de Colombia, la continuidad de la violencia política en medio de la lucha de los diferentes gobiernos contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue un factor fundamental. Dentro de dicho escenario, en 1990 César Gaviria del Partido Liberal fue elegido presidente y adoptó el modelo liberal generalizado en esa década, para promover la apertura económica y reformar el sistema de prestaciones sociales. En el caso colombiano no se logró una inmediata reacción de los índices macroeconómicos y se desató una crisis económica (el shock neoliberal tampoco fue considerado un éxito).





- 1- Bandera de las FARC-EP.
- 2- Las FARC.

En el caso de Paraguay, la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989 finalizó en medio de una crisis muy profunda por las pujas internas por la sucesión presidencial y por problemas económicos (producto del impacto de la recesión internacional). En el caso paraguayo, una gran emigración de población hacia los países vecinos por el aumento del desempleo fue causada por el estancamiento económico y la recesión. La alternancia de los presidentes posteriores no modificó el camino a seguir, todos procuraron realizar un saneamiento fiscal sin lograr bajar los índices de pobreza y desigualdad, en medio de una profunda crisis financiera. El poder estuvo concentrado en el Partido Colorado a pesar de las notables riñas internas entre las distintas facciones y las destituciones constantes de los dirigentes partidarios. Sin embargo, el predominio del Partido Colorado disminuyó gradualmente a partir del fortalecimiento de los partidos opositores al régimen.



Guillermo León Sáenz, alias «Alfonso Cano»; Luis Édgar Devia Silva, alias «Raúl Reyes», y Luis Morantes, alias «Jacobo Arenas».





- 1. Alfredo Stroessner y Augusto Pinochet.
- 2. Alfredo Stroessner.

Por último, en cuanto a los países centroamericanos, cabe destacar que tanto la transición hacia la democracia y el fin de las guerras civiles se produjeron bajo la influencia de Estados Unidos, durante la gestión de Ronald Reagan. Esta intervención, condicionó los futuros Gobiernos que en la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI respondieron a las necesidades del capital norteamericano.

Tal es el caso de Nicaragua, donde la influencia norteamericana también fue determinante. Luego de la salida del Gobierno de Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Violeta Barrios de Chamorro del Partido Unión Nacional Opositora (UNO) negoció el levantamiento del embargo aplicado en 1981 en el marco del Gobierno revolucionario e implementó un modelo neoliberal de privatización de empresas públicas e inversiones extranjeras que tenían como prioridad controlar la inflación.

Otro ejemplo de la intervención norteamericana ocurrió en Panamá donde, a solicitud del presidente George Bush, se detuvo al jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, Manuel Antonio Noriega, acusado por corrupción (1989). A su vez, las políticas neoliberales fueron aplicadas por Ernesto Pérez Balladares, elegido presidente en 1994 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

También en el caso de Haití, Jean-Bertrand Aristide había sido electo presidente en 1990 en las elecciones libres y democráticas del país. Luego de sufrir un golpe de Estado en 1991 y exiliarse, con su retorno en 1994 (apoyado por Estados



Ernesto Pérez Balladares.

Unidos) y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, logró terminar su mandato. Enmarcado en el apoyo del Gobierno de Bill Clinton, inició el modelo neoliberal en Haití con la privatización de empresas estatales (recomendada por el Fondo Monetario Internacional).

EL ALCA, PIEZA CENTRAL DEL MODELO NEOLIBERAL

Durante 1980 y 1990, la mundialización de los imperativos económicos sumada a los problemas económicos regionales, generó un nuevo tipo de integración (nuevamente subordinada) de los países latinoamericanos. Por esa razón, resurgieron proyectos antiguos de Estados Unidos estructurados sobre la base de la idea del panamericanismo. Uno de ellos fue el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

El ALCA fue una propuesta de Estados Unidos para extender al resto de la región americana el proyecto planteado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, vigente desde el 1.º de enero de 1994. Dicha iniciativa implicaba la integración comercial de la región, extendiendo la hegemonía norteamericana sobre el resto del continente y beneficiando los términos de su balanza comercial.

Jean-Bertrand Aristide.



MANIFESTACIONES EN CONTRA DEL ALCA









^{*} En el caso de Paraguay se incluyó el gobierno de Alfredo Stroessner que comenzó en 1954. Cabe aclarar que las políticas neoliberales fueron aplicadas a partir de la década de 1970.



LA HERENCIA DEL NEOLIBERALISMO

La implementación del neoliberalismo se realizó en la región de manera dispar. Las reformas fueron adoptadas por Gobiernos de distintos partidos e ideologías y los procesos histórico-políticos de cada uno de los países presentaron características particulares.

Más allá de estas diferencias, luego de las décadas de 1980 y 1990 se produjo en la región la reconfiguración de la ecuación entre capital y trabajo, modificando la estructura social de América Latina. Las consecuencias fueron muchas, como las bajas tasas de crecimiento económico, la caída del ingreso per cápita en la región, el aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza, el aumento del desempleo y la tasa de pobreza. Los principales perjudicados fueron los sectores trabajadores.

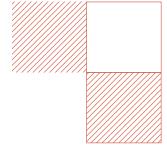
También se produjo la disminución de la capacidad productiva, debido a la desindustrialización producida por la apertura comercial. Esto modificó la situación de los sindicatos, el movimiento obrero perdió gran capacidad de lucha frente a la pérdida de los derechos laborales y la disminución de la cantidad de trabajadores. De esa forma disminuyó el número de sindicalizados, se modificó la identidad de clase así como su capacidad de lucha y resistencia.

La desarticulación del sector industrial tuvo como contrapartida una mayor importancia económica del sector de servicios y de los productores agropecuarios al favorecer un modelo de exportación, de crecimiento hacia afuera.

Por un lado la flexibilización laboral implicó la reformulación de las relaciones del trabajo y se implementaron nuevas modalidades como la contratación, la informalidad o trabajo precario, el trabajo a destajo y el trabajo de medio tiempo. Por otro lado también se produjo la reconfiguración del aparato del Estado, con la eliminación o disminución de las prestaciones sociales, salud, educación, asistencia social, sistema de previsión social, etc.

Los partidos que adoptaron los postulados neoliberales fueron de diversos signos ideológicos. Los hubo socialdemócratas, socialistas, nacionalistas e inclusive de tradiciones de izquierda. Durante esta etapa, se produjo la pérdida relativa de la soberanía nacional por la falta de autonomía de los Gobiernos para decidir sus proyectos económicos. La falta de divisas implicó el condicionamiento externo de los organismos internacionales en el otorgamiento de los créditos que incluyeron como requisito fundamental la adopción de las recetas del Consenso de Washington. La implementación de dichas medidas supuso un costo social muy importante, pero también un impacto en el sistema de representación política, frente al deterioro de las condiciones económicas generales y a la desesperanza y el descrédito de los votantes con la dirigencia política. El resultado de este proceso se manifestó en la creciente conflictividad social y la afectación de la gobernabilidad en América Latina.

A pesar de la firmeza con la que fue implementado el modelo económico neoliberal, numerosos sectores sociales se organizaron a lo largo de la década de 1990 para expresar sus reivindicaciones y luchar por sus derechos. En América Latina, se pudo observar el surgimiento de diversos movimientos sociales que lucharon en contra de la desigualdad social y abogaron por un modelo económico-político alternativo.



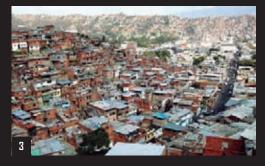


EL NEOLIBERALISMO Y LAS DESIGUALDADES SOCIALES



- Bolivia.
 Paraguay.
 Venezuela.
 Haití.







LA RESISTENCIA POPULAR AL NEOLIBERALISMO





- México insurgente,
 el subcomandante Marcos.
 La lucha en Cochabamba.
- 3. La lucha en Quito.
- 4. La lucha en Chile.





LA RESISTENCIA AL NEOLIBERALISMO: DISTINTAS ESTRATEGIAS DEL MOVIMIENTO POPULAR

La transformación de la estructura social era un efecto esperado de las políticas neoliberales en la región. Después de dos décadas de convulsión social generalizada y con algunos focos de rebeldía aún vigentes, la arremetida del proyecto imperialista para América Latina tenía entre sus objetivos acabar con la iniciativa popular. Más allá de la represión como una herramienta siempre disponible de las clases dominantes, la desestructuración económica y social funcionó como un mecanismo sumamente útil para quebrar la resistencia de los sectores populares. El retroceso de la presencia del Estado, la desarticulación de experiencias progresistas o revolucionarias y el abandono a su suerte de amplias capas de excluidos por parte de las políticas gubernamentales, minaron la base social de las estructuras organizativas más fuertes y debilitaron la capacidad de respuesta de sectores que debieron luchar por su supervivencia. La derrota ideológica y cultural logró además imponer un desánimo y descreimiento generalizado, deslegitimando muchas vías de la lucha popular. Además, con énfasis en aquellos países en que se vivieron experiencias traumáticas de violencia política (especialmente por lo que implicó la respuesta represiva), la avanzada ideológica neoliberal logró desterrar del vocabulario político



las ideas de revolución, socialismo o nacionalismo, que ante la desazón generalizada por el nuevo clima, parecían conceptos perimidos, pasados de moda, anacrónicos.

El nuevo escenario, sin embargo, no implicó pasividad desde los sectores populares, que debieron replantear sus líneas de acción ante una realidad que había transformado profundamente las posibilidades de intervención en la vida política. A lo largo y ancho de América Latina se dio una variedad de expresiones de resistencia, que tuvieron como protagonistas a los nuevos movimientos sociales y que implicaron una ruptura importante con el período anterior: por su relación con el Estado, por su relación con la democracia (como concepto y como marco institucional), por las formas de acción y la conformación del sujeto social y el discurso. Se fue conformando además una «territorialización» en nuevos espacios que reemplazaron a aquellos que entraron en crisis como forma aglutinadora y se revalorizaron formas de identidad cultural que excedieron la noción de ciudadanía, por ejemplo las identidades étnicas. La movilización muchas veces implicó a grupos y organizaciones sociales afectados negativamente por las reformas del mercado. Muchos de estos reclamos constituyeron una resistencia circunscripta a la defensa de intereses específicos y con poca coordinación entre sí. Se fue haciendo cada vez más evidente la incapacidad de canalizar estas demandas a través de las organizaciones existentes y fueron gestándose nuevos espacios de representatividad vinculados con sus intereses sectoriales o identitarios. Todo esto no significó una ruptura total con el pasado: la experiencia del movimiento obrero cumplió un rol clave en muchos países, y así también lo hicieron las formas organizativas propias de la tradición marxista. Incluso cuando muchas experiencias se entendieron a sí mismas de forma más bien sui géneris, una gran cantidad de ellas buscó en la tradición histórica y cultural de su pueblo una legitimación y una explicación para su propio accionar, estableciendo así un lazo con luchas anteriores que de ningún modo fuera meramente discursivo.

El movimiento obrero mantuvo su capacidad de iniciativa y constituyó uno de los focos de la resistencia a través de sus herramientas más tradicionales: las huelgas y movilizaciones.

En Chile, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) encabezó las «Jornadas de Protesta Nacional», formas de protesta organizadas contra la dictadura de Pinochet. Se dieron entre los años 1983 y 1986 y se configuraron a partir de manifestaciones callejeras, huelgas y barricadas que fueron duramente reprimidas. Estas jornadas constituyeron un punto de partida para articulaciones más amplias como la «Asamblea de la Civilidad», la «Alianza Democrática» y el «Movimiento Democrático Popular», en las que participaban numerosos sectores sociales que concluirán en la realización de un plebiscito en 1988, que pondría en fuerte cuestionamiento al gobierno de facto.

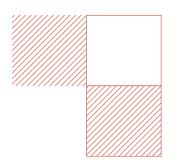
En Argentina, el movimiento obrero desde la Confederación General del Trabajo (CGT), pudo tomar la iniciativa en la década de 1980 con movilizaciones y huelgas generales en los últimos años de la dictadura militar, con trece paros generales durante el Gobierno de la transición democrática, bajo la conducción del sindicalista Saúl Ubaldini. En la década de 1990, esta línea de oposición al neoliberalismo se continuó a partir la conformación del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), núcleo disidente al interior de la CGT, y con la formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en 1992, con un grupo de sindicatos que se diferenciaron de los otros que decidieron no combatir al nuevo modelo.



1.º de mayo de 1984, manifestación del Comando Nacional de Trabajadores.

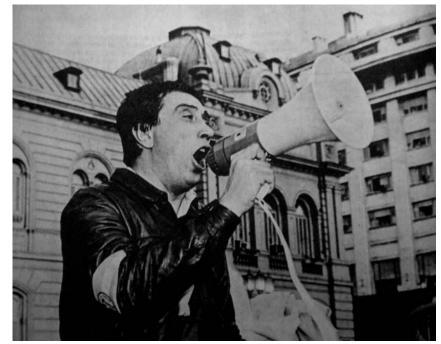


Chile, Movimiento Sebastián Acevedo, 1988.





Saúl Ubaldini.





El paro del 30 de marzo de 1982 convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Algo similar sucedió en Bolivia, donde la Central Obrera Boliviana (COB) y en especial el núcleo de trabajadores mineros encabezaron una serie de huelgas y protestas contra el Gobierno de Paz Estensoro. El punto de inflexión fue «La Marcha por la Vida y por la Paz» el 28 de agosto de 1986, cuando doce mil mineros se concentraron para repudiar el decreto con que se había iniciado la desnacionalización de la economía boliviana.





2. Columna de mineros de Oruro rumbo a La Paz, 28 de agosto de 1986.



En Bolivia también existió una continuidad de las tradiciones de lucha, sumada a la incorporación de nuevas formas de organización del movimiento popular. Con el eufemismo de la «relocalización», el Estado dejó grandes cantidades de trabajadores sin sustento y los obligó a buscar nuevas oportunidades laborales. En dicho contexto, una de las salidas que encontraron fue la migración a otras zonas de Bolivia. Muchos de aquellos migrantes fueron exmineros que

después del desmantelamiento de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), se reagruparon en nuevos tipos de organizaciones como las juntas vecinales en El Alto y sindicatos de cultivadores en el Chapare. Confluyeron allí tradiciones organizativas de los sindicatos campesinos y de los sindicatos obreros, como así también las propias de la vida comunitaria que impulsaron la generación de nuevas identidades colectivas, siendo eje fundamental de la lucha de los movimientos sociales y más adelante del Movimiento al Socialismo (MAS).

Las medidas económicas neoliberales generaron la disminución del trabajo formal y, por ende, un debilitamiento de las centrales sindicales de América Latina. Esta situación promovió nuevas modalidades de lucha popular, tales como la emergencia de movimientos sociales de desocupados, que frente a la imposibilidad de recurrir a la huelga —herramienta histórica de lucha de los trabajadores organizados— recurrieron al corte de rutas o calles para visibilizar



Evo Morales, uno de los fundadores del MAS

Detalle de barricada en Diagonal Norte y Florida, 20 de diciembre de 2001. Fotografía: Eduardo Longoni, diario *Clarín*.







Movimiento piquetero en las calles de Buenos Aires.

su lucha (movimientos piqueteros). En Argentina por ejemplo, se creó una nueva central obrera que convocó a los movimientos de desocupados a formar parte de ella (Central de Trabajadores de la Argentina, CTA). En ese sentido, la aparición del trabajador desocupado como una categoría reconocida por la institucionalidad sindical se configuró en torno a las nuevas modalidades de acción y organización. Además, las distintas organizaciones de derechos humanos cumplieron un rol destacado en la articulación de la oposición al neoliberalismo (el más significativo de ellos fue el de Madres de Plaza de Mayo), ya que en la mayoría de los casos expandieron su horizonte de reclamos desde su motivación específica hacia las cuestiones más amplias relacionadas con la calidad de vida de la población. Todas estas corrientes de oposición confluyeron en una gran manifestación popular los días 19 y 20 de diciembre de 2001, brutalmente reprimida, pero que constituyó un hito clave en la historia de los movimientos populares argentinos, poniendo en entredicho la hegemonía del proyecto neoliberal.

Distinto fue el caso brasileño, allí no había tenido lugar un proceso de desindustrialización como en otros países de la región; el movimiento obrero mantuvo un margen de acción para continuar la lucha sindical y política de forma independiente. El Partido de los Trabajadores (PT) constituyó un núcleo organizador de la lucha popular que condujo las protestas de jubilados y numerosas huelgas, entre ellas, la de los petroleros en 1955, una de las más significativas. El armado de su propio instrumento electoral configuró también una nueva estrategia del movimiento popular, aunque más integrada a tradiciones previas como la del partido de clase. Aún así, la experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) señaló la diversidad de realidades sociales que confluían en el país brasileño. Conformado por campesinos pobres (expulsados de sus tierras durante la dictadura militar en beneficio del latifundio) y desocupados urbanos, se entroncó a su vez con la tradición brasileña de la lucha agraria. Su surgimiento se dio en una fuerte vinculación con las comunidades eclesiales de base y pudo articularse además con otros sectores de la sociedad: el comunismo, el PT, el sindicalismo rural y urbano en general. La modalidad de ocupación de tierras y puesta en producción de una enorme cantidad de familias, no fue en desmedro de una fuerte organización interna que apuntó a la generación de una contrahegemonía tanto simbólica cuanto material, aunque sin pretender el acceso al Estado. La reivindicación de la formación y educación autónoma, junto con la construcción de normas de convivencia enraizadas en la cultura popular, expresaron la vocación de este movimiento por una refundación societaria establecida como contrapoder en el interior del Estado brasileño.



Logo utilizado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).



En plena campaña política, el candidato Luiz Inácio Lula da Silva participa en una reunión con Prefeito Zezinho Garcia, José Dirceu, Luiza Erundina y Eduardo Suplicy.



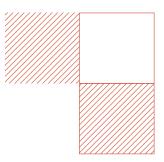


El dirigente del sindicato de metalúrgicos, Lula da Silva, 19 de abril de 1980.

Campamento del MST.

En Venezuela, el reclamo popular se expresó desde mediados de los ochenta, especialmente a partir de protestas urbanas que tuvieron como punto de inflexión el «Caracazo» o «Sacudón» del 27 de febrero de 1989. Ferozmente reprimida, no significó el final de estas expresiones de descontento que se reprodujeron en numerosas ocasiones en la década siguiente. La modalidad de acción fue similar a las de otras revueltas urbanas en países de la región: cortes de calles y rutas, barricadas y toma de edificios públicos. Se generalizaron las formas de acción colectiva por fuera de los canales institucionales partidarios y gremiales, organizaciones que se habían visto deslegitimadas en los años anteriores.

En este marco fue que tuvo lugar el levantamiento militar comandado por Hugo Chávez Frías el 4 de febrero de 1992. El intento frustrado de tomar el poder por las armas llevó a Chávez a la cárcel y a la necesidad de replantearse las vías para llegar al poder. En 1997 fundó el Movimiento V República, reflejo de la necesidad de trasvasar los límites estructurales de los partidos tradicionales para pensar la política desde el movimiento popular. Este se insertó rápidamente en la disputa electoral y cosechó victorias contundentes.



EL CARACAZO EN IMÁGENES















DISCURSO DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS EN CONMEMORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DEL 4 DE FEBRERO DE 1992 4 DE FEBRERO DE 2010

(SELECCIÓN DE FRAGMENTOS)

Recordemos de dónde vino aquel movimiento cívico-militar tras un arduo trabajo de muchos años, se levantó en armas aquel febrero rebelde. Si bien es cierto que el antecedente determinante de la insurgencia del Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 se encarna en aquel otro día de febrero que partió la historia nacional en dos, la insurrección popular del 27 de febrero de 1989, el mar de fondo del que Kléber nos habla, antecede al mismo Caracazo: nos remite no solo a los años del «puntofijismo», sino a la estructuración gomecista del Estado venezolano. Veamos las palabras de Hugo Chávez.

[...]

Para 1992 el juego estaba completamente trancado: las armas de la crítica tuvieron que dar paso a la crítica de las armas. La política entreguista del puntofijismo llegaba a su más nauseabunda expresión con el programa neoliberal puesto en práctica por Carlos Andrés Pérez: el país estaba subordinado al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y de rodillas ante el imperio; los partidos políticos se dedicaban exclusivamente al saqueo y a la burla social; la dignidad del pueblo venezolano estaba secuestrada. Teníamos que dar un paso al frente ante tal estado de cosas, con el más

puro compromiso con la redención de la Patria y para devolverle al pueblo las armas de la República.

[...]

A todo esto debemos añadir la necesidad de revivir el legado revolucionario de nuestro padre Libertador, líder y guía de nuestro movimiento. El 4-F Bolívar volvió para no irse nunca jamás.

[...]

Dotó a la nación de un objetivo estratégico en lo político: la nueva democracia, y anuló la validez de los viejos planteamientos de todos los partidos existentes.



Hubo también algunas experiencias de organizaciones guerrilleras que recuperaron la tradición de lucha del período anterior, mayormente desactivada en la casi totalidad de los países latinoamericanos. En Perú, con la experiencia de Sendero Luminoso; en Bolivia, con el Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) en el que participó, entre otros, el actual vicepresidente Álvaro García Linera; y en Chile, con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Estas experiencias se entroncaban con sus antecesoras de los años sesenta y setenta, y especialmente con la tradición de la Revolución cubana, pero también con experiencias más recientes como la Revolución nicaragüense, el gobierno revolucionario de Granada y las experiencias de El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de Guatemala, con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)

En México, la experiencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inició su camino también, presentándose como una guerrilla en términos clásicos. La realidad concreta del país y la reacción de la población mexicana ante el levantamiento neozapatista el 1.º de enero de 1994 (que no expresó su repudio, pero que tampoco prestó apoyo a la modalidad de acción) reconfiguró su posicionamiento y lo obligó a suspender el conflicto armado. El proceso tomó el cariz de un levantamiento indígena y campesino que tuvo elementos distintivos de la nueva época y que tuvo, también, como causa directa del levantamiento las reformas neoliberales (en particular el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio). Pero, a su vez, su enraizamiento fue muy profundo en relación con la tradición revolucionaria mexicana, en la que la cuestión de la tierra tuvo un rol preponderante como articulador de los reclamos sociales. El EZLN se convirtió en canalizador de las demandas de los sectores históricamente subordinados en México, con especial protagonismo en su interior de los pueblos originarios de la zona de Chiapas.



Portada de *El diario* donde se anuncia operativo de Sendero Luminoso.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).









EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA. HOY DECIMOS IBASTA! DICIEMBRE DE 1993

Al pueblo de México. Hermanos mexicanos:

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.

Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más

de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo.

Para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el artículo 39 constitucional que a la letra dice:

«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno».

Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari.

Conforme a esta declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación deponiendo al dictador.

También pedimos a los organismos Internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por la Leves sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, formando el EZLN como fuerza beligerante de nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte, tenemos patria y la bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes INSURGENTES, utilizamos los colores rojo y negro en nuestro uniforme, símbolos del pueblo trabajador en sus luchas de huelga, nuestra bandera lleva las letras «EZLN», EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, y con ella iremos a los combates siempre.

Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad.

Por lo tanto, y conforme a esta

Fines solom delante e

Declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes:

Primero. Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas.

Segundo. Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica.

Tercero. Iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados, o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la patria, y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo.

Cuarto. Formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General del EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

Quinto. Pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los combates.

Sexto. Suspender el saqueo de

nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN.

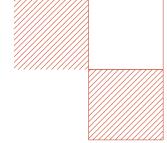
PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un Gobierno de nuestro país libre y democrático.

> INTÉGRATE A LA FUERZAS INSURGENTES DEL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Comandancia General del EZLN

La reivindicación de demandas sectoriales, mucho más específicas e identificadas con identidades particulares o de raigambre territorial, se expresó fuertemente en otros levantamientos de pueblos originarios que también se vivieron en Centroamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. En Ecuador, la lucha del movimiento indígena estuvo articulada por el Movimiento de Unidad Nacional Pachakutik-Nuevo País, que nació como organización en 1995, se constituyó como un partido político y participó exitosamente de las elecciones. Además, encabezó un ciclo de movilizaciones que llevaron a la caída del Gobierno de Abdalá Bucaram en 1997. En Quito, los pueblos originarios protagonizaron una rebelión en el año 2000 y en el 2006 estuvieron a la cabeza de la oposición de la firma del TLC con Estados Unidos. En Bolivia, el movimiento campesino-indígena ganó cohesión y comenzó a considerarse a sí mismo como el sujeto político de la transformación boliviana. En torno a este nuevo posicionamiento, se suscitó el debate sobre la necesidad de la construcción de un instrumento político que superara las limitaciones de las organizaciones sindicales. El Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP), luego enmarcado dentro del MAS, terminó por constituir el centro de la oposición al neoliberalismo y el imperialismo, abrevando en las múltiples tradiciones políticas del pueblo boliviano.

Todos estos movimientos latinoamericanos tuvieron una relación particular con el sistema democrático. Por un lado, reforzaron una nueva conceptualización de la democracia, en la que se propuso como elementos fundamentales la justicia social, el respeto por las identidades culturales diversas y la igualdad de derechos. Por otro lado, con una concepción divergente en torno a la participación en elecciones en función de su forma de relacionarse con el Estado. Algunos procesos se consideraron totalmente al margen del sistema electoral y no buscaron el acceso al Estado como forma de cumplimentar sus demandas. Interpelaron al Estado, pero no disputaron el control del gobierno, valorando la propia autonomía organizacional y en algunos casos hasta societaria. Los casos del MST y el EZLN son paradigmáticos en ese sentido, con la vocación de construcción de un contrapoder y una nueva concepción de democracia fundada en los principios de sus propias organizaciones. También recorrieron ese camino algunos núcleos de lucha indígena que se han centrado en la identidad étnica como elemento cohesionador y que defienden un modelo societario que entra en abierta contradicción con la estatalidad y el sistema capitalista. En otros casos, el acceso a la contienda democrática ha sido un objetivo expreso de los nuevos movimientos de resistencia. Esto, en general, se ha dado con los movimientos que han podido articular con otros focos de reclamo y combinar a partir de intereses comunes las vías de acción política. Estos espacios se han constituido en general como representantes de la oposición al neoliberalismo y han podido proyectar sus intereses específicos hacia expresiones políticas de más amplio alcance social. Esto se ve reflejado en el MAS, que como espacio de encuentro de distintas expresiones de los movimientos sociales bolivianos y bajo el liderazgo de Evo Morales, se incorporó al ámbito electoral no sin pocas desavenencias internas. De la misma manera, el PT pudo ampliar su base social y establecerse como alternativa política a partir de su participación en elecciones. El caso venezolano también es un ejemplo de esta forma de intervención, que se diferenció en el sentido de que el golpe militar significó de por sí una voluntad de acceso al poder del Estado por otras vías, enfatizando una concepción de democracia que se afirmó sobre la distribución de la riqueza más que en las características institucionales. Estos movimientos, que entendieron a la lucha electoral como un modo de acción más de sus repertorios de resistencia, posteriormente aportaron con sus principales referentes a aquellos presidentes que inauguraron una nueva etapa histórica regional.



LA INDEPENDENCIA SE HACE REVOLUCIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA POR FERNANDO BUEN ABAD

fenando emenas esta existe en delante e nal comocione en han e

Durante la primera parte del siglo XX la gran disputa capitalista por los mercados se expresó en, al menos, dos Guerras Mundiales y eso tuvo sus consecuencias inmediatas en el campo del arte. Rápidamente el clima bélico de Europa ensangrentada encontró expresiones en nuestra Latinoamérica que ya en 1910 vivió su primera revolución social: la Revolución mexicana. Se había asentado el modernismo como un sello indeleble de los cambios en el escenario ideológico y estético latinoamericano y comenzaría el surgimiento de expresiones nuevas acordes con el clima de un siglo de «Guerras y Revoluciones». Época de rupturas.

En ningún sentido es fácil dar cuenta en espacio breve sobre la diversidad y la cantidad de expresiones artísticas que el siglo XX ofreció divididas en, al menos, tres grandes momentos: a) el amanecer del siglo con una tendencia rupturista muy poderosa: b) Las consecuencias de las Guerras Mundiales en Latinoamérica hasta los años 80 y c) los años del «Consenso de Washington», el «neoliberalismo», el derrumbe de las «Torres Gemelas» y la Guerra de Irak. Todos nuestros países, con tradiciones, hibridaciones estéticas, mestizajes y lenguas distintas ofrece una dificultad enorme para todo compendio

De izquierda a derecha: Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. o todo Atlas. No obstante el arte y la estética latinoamericanos en conjunto, ofrecen una visión poderosa de una riqueza cultural nueva para todo el planeta y ofrece la oportunidad de conocer una herencia por áreas culturales, que recupera a la tradición prehispánica, a las influencias extranjeras al lado de lo que cada país aporta a las pautas de vida republicana incipiente y con un espíritu creador vigoroso.

Independientes de los movimientos vanguardistas europeos surgen versiones de la vanguardia artística latinoamericana como: estridentismo/futurismo (Maples Arce, List Arzubide, Arqueles Vela, 1921); realismo socialista (David Alfaro Siqueiros, 1923); simbolismo/ creacionismo (Jorge Luis Borges, Vicente Huidobro); surrealismo (Leonora Carrington, Remedios Varo) además de las figuras de José Guadalupe Posada (1851-1913), Diego Rivera, Frida Kahlo, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni,

Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Silvestre Revueltas, Julián Carrillo, Juan O'Gorman, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo.

Acaso dos ejemplos concretos sobre lo ocurrido en el arte durante el siglo XX en Latinoamérica expresen condensadamente la riqueza teórica y práctica de la época: por una parte el Muralismo como arte público que alcanzó un carácter identitario para la estética de nuestro continente y por otra la síntesis estético-política expresada en el documento de la FIARI - Manifiesto por un arte revolucionario independiente- firmado en México por André Bretón, referente del movimiento surrealista en Europa (en aquellos tiempos de visita en México); Diego Rivera, representante del muralismo y de la síntesis política-arte en la estética latinoamericana y León Trotsky revolucionario ruso refugiado en México experto en arte y literatura formalista y autor del texto Literatura y Revolución.





El arte que surge en Latinoamérica durante siglo XX tiene como exponente al muralismo enraizado en la Revolución mexicana (1910-1917). En el muralismo se hace presente el mensaje añejo de Latinoamérica, la experiencia expresiva de los pueblos originarios en los muros y más tarde las luchas agraristas, como la de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El muralismo ejerció un influjo poderoso en la emblemática revolucionaria de todo el continente. Por ejemplo: tras el aliento de la revolución mexicana por iniciativa de artistas jóvenes y revolucionarios se fundó (1922) el Sindicato de Pintores, Escultores y Obreros Intelectuales para contribuir al enriquecimiento de una cultura comprometidamente popular antiindividualista y militante en la herencia comunitaria de la América precolombina.

No era asunto ajeno al arte luchar por derribar las estructuras

económicas del capitalismo y la oligarquía mexicana fundamentalmente en aquello relativo a la usurpación de la tierra. «El arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo y su tradición indígena es la mejor de todas... Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi completamente pervertido en las ciudades» 1923, Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, firmado por David Alfaro Siqueiros, Xavier Guerrero, Fermín Revueltas, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Carlos Mérida.

Hubo también un aliento de revaloración revolucionaria del patrimonio cultural precortesiano, José Vasconcelos, ministro de Educación de México (1921) ofreció a Rivera, Orozco y Siqueiros, entre otros, la tarea de usar los edificios públicos como soporte para un arte que ganara las calles basado en una tradición ancestral de tomar los muros para relatar leyendas, identidades o sueños, que tiene con el muralismo mexicano un capítulo contemporáneo peculiar, síntesis de anécdotas éticas, estéticas y políticas contradictorias. «Sin la revolución esos artistas no se habrían expresado o sus creaciones habrían adoptado otras formas; asimismo, sin la obra de los muralistas, la revolución no habría sido lo que fue. El movimiento muralista fue ante todo un descubrimiento del presente y el pasado de México, algo que el sacudimiento revolucionario había puesto a la vista: la verdadera





realidad de nuestro país no era lo que veían los liberales y los porfiristas del siglo pasado sino otra, sepultada y no obstante viva... Todos tenemos nostalgia y envidia de un momento maravilloso que no hemos podido vivir. Uno de ellos es ese momento en el que, recién llegado de Europa, Diego Rivera vuelve a ver, como si nunca la hubiese visto antes, la realidad mexicana» (Octavio Paz).

El arte latinoamericano del siglo XX envuelto en convulsiones políticas, asesinatos, traiciones, esclavitud, miseria, racismo y deudas con la población, tuvo la autoría ideológica suficiente como para inventar un continente con «integridad cultural», «identidad», «igualdad de posibilidades», «progreso» y «futuro». Indígenas, campesinos, obreros y buena parte de la clase media fueron protagonistas de un arte necesario para acunar y catapultar el desarrollo con una burguesía

nueva con terratenientes, burócratas, comerciantes y empresarios ávidos de sacudirse los resabios de la Europa colonial y de siglo XIX bajo las pautas de una economía liberal incipiente; la construcción hegemónica partidos políticos; la instauración de modelos educativos positivistas, excluyentes y al servicio de la producción capitalista. Todo abrazado por debates cruciales.

El arte del siglo XX tiene, en su riqueza, el desarrollo espléndido de documentos que entre manifiestos, proclamas y debates teórico-políticos hizo ensanchar la importancia del arte en el desarrollo de la historia misma. El cúmulo de fuentes primarias y la documentación original de los autores con los estudiosos del arte es de suyo una veta cultural magnífica que marca toda la comprensión del arte en el siglo XX. Destaca la obra de Alfredo Boulton, Ida Rodríguez Prampolini y Adolfo Sánchez Vázquez quienes por su

- 1. Mural de Diego Rivera (detalle) en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.
- 2. André Bretón, poeta fundador del movimiento surrealista; Diego Rivera, pintor muralista; León Trotsky, autor del libro *Literatura y Revolución*.
- 3. Xul Solar, Museo MALBA, Buenos Aires.
- 4. Pablo Neruda, Diego Rivera, David Alfaro Siquerios.

lado han compendiado conjuntos de textos que son fundamentos intelectuales obligatorios para la interpretación, exposición y disfrute del arte producido a lo largo del Siglo XX. Sobresalen los aportes artísticos de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Perú, Venezuela, Ecuador, Nicaragua... y la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos.

En Chile hacia 1925 nacieron algunas iniciativas de «ruptura» contra ciertos moldes académicos y se fortaleció el campo de las discusiones similares a las que fluían en Buenos







Volante aparecido el 31/12/1921 pegado en los muros de la Ciudad de México. Mandado a hacer por el joven Manuel Maples Arce. Sería el manifiesto que dió origen al movimiento estridentista.

Aires entre los autores del llamado «Florida y Boedo». Mayormente pintores que relacionados con escritores y poetas, impulsaros publicaciones de vanguardia plenas de ideas nacionalistas durante los 20 y 30. Amelia Peláez, Xul Solar, Torres-García, Baldomero Sanín Cano; lugar especial merece la proliferación de revistas que asignaron lugar privilegiado al arte y a la cultura en general.

Vicente Huidobro, Roberto Matta y José Carlos Mariátegui exigían en cada país estrategias de desarrollo, que desde lo artístico y los estético se imbricaran con lo político y económico para aportar y reclamar «identidad», una de las banderas comunes y factor decisivo del arte contemporáneo nacional que hunde raíces en civilizaciones indígenas, el mestizaje, como valor y fuente de polémicas.

Los artistas evolucionan con el siglo y ya en los años 70 dan la batalla por la identidad pese a las adversidades (o acaso por ellas mismas). En el panorama económico y sociopolítico mundial, los endeudamientos monstruosos, el neoliberalismo salvaje, el avasallamiento de los derechos humanos y las revueltas populares de México 68, Brasil y Venezuela en los años 80... mantuvieron a los artistas superando al boom de los años 60, preludio del «boom literario» (Fuentes, Borges, Cortazar, Rulfo, García Márquez) y de la exaltación mundial de esa década, Vietnam y el ajuste de cuentas de la década siguiente del Consenso de Washington, la crisis petrolera y la miseria que produjo. Los artistas mantuvieron un ritmo de producción que, no sin debates duros, buscó sus márgenes de independencia y revolución. Un esplendor.

Es falso que en el siglo XX América Latina no hubiere creado algún «ismo» propio. Son prueba de eso el muralismo mexicano —que transformó el lenguaje y la relación de las artes en el espacio político y estético— como también lo hizo el estridentismo por referir solo un par de casos. El aporte fundamental fue hacer de la «ruptura» una bandera de los tiempos y articularse con su «identidad» apoyados en propuestas cargadas de sentido para una comunidad artística independiente de los modelos importados,

con la fuerza del arte popular prehispánico y anticolonial, hacia una forma de vida simbólica muy rica en los países mestizos y mulatos, con obras de sorprendente perfección y riqueza semántica.

En el siglo XX se crea una dinámica estética con orientación a las masas, con una impregnación social constante del arte contemporáneo latinoamericano. Una explosión estética de esperanzas revolucionarias, nuestros afectos emancipatorios ligados por la historia, por la geografía y por el desarrollo socioeconómico de América Latina; una unidad de crisoles independentistas y revolucionarios que encontró en el arte una de sus mejores identidades históricas. Construcción intelectual con programas «rupturistas» ante los modelos europeos más ortodoxos y con una proyección teórica del arte para una idea de la creación motivada por los artistas que no renegaron de la temática indígena o mestiza, negra o mulata, en una superación radical de la imagen académica y decimonónica. De ellos y para ellos el lenguaje del arte ocupa un lugar prioritario como lenguaje de la historia. Ese ha sido el camino de lo contemporáneo que enfrenta los retos formales y conceptuales que caracterizan a buena parte del arte del siglo XX en Latinoamérica.